

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) de la OMPI

# **Estudio exploratorio sobre la promoción del uso de la propiedad intelectual en las industrias creativas en la era digital en Chile, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Uruguay**

Preparado por Ignacio Garrote Fernández-Díez

Profesor de Derecho Civil

Universidad Autónoma de Madrid

## **Agradecimientos**

Agradezco el trabajo de coordinación de este estudio a Dimiter Gantchev y la ayuda de Ronak Shahsavar en la investigación de los textos jurídicos y materiales que se usaron para completarlo.

## Índice

I. Objetivos y metodología del estudio exploratorio	6
II. Panorama del mercado para las industrias creativas en el entorno digital en Chile, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Uruguay	8
1. Estructura del mercado y contribución a la economía nacional	8
2. La situación en los diferentes subsectores que abarca este estudio	11
3. Evolución del mercado	15
4. Políticas nacionales para reforzar las industrias creativas en el entorno digital	16
III. Panorama de los derechos de PI y los desafíos para las industrias creativas en el entorno digital en Chile, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Uruguay	19
1. Rol de los derechos de PI en el funcionamiento de las industrias creativas en el entorno digital	19
2. Normas de fondo para la protección de los derechos de PI en el entorno digital	21
A. Régimen jurídico, materia de derechos de autor y formalidades	21
B. Alcance de la protección: derechos patrimoniales	26
C. Excepciones y limitaciones a los derechos de autor y los derechos conexos	32
D. Titularidad y cesión de derechos	34
3. Panorama de la gestión colectiva de derechos	39
4. Observancia de los derechos de la PI en el entorno digital	44
A. Desafíos actuales en la aplicación digital de derechos de autor	44
B. Mecanismos de observancia de los derechos de autor y derechos conexos	47
C. Medidas tecnológicas de protección e información sobre gestión de derechos	53
5. Infracción del derecho de autor y prestadores de servicios de intermediación en línea	55
A. Chile	56
B. Indonesia	58
C. Emiratos Árabes Unidos	60
D. Uruguay	61
IV. Recomendaciones para promover el uso de los derechos de PI en el entorno digital en Chile, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, y Uruguay	62
1. Adaptación de la legislación nacional sobre derechos de autor al entorno digital	63
A. Acciones recomendadas en materia de derechos de autor y sistemas de registro	63
B. Acciones recomendadas en materia de derechos patrimoniales	65
C. Acciones recomendadas en materia de excepciones y limitaciones	67
D. Acciones recomendadas en materia de titularidad y cesión de derechos	71
E. (In)acciones recomendadas en materia de nuevos problemas digitales	75
2. Recomendaciones sobre el ecosistema de derechos de gestión colectiva	76

A. Establecimiento de una estructura nacional adecuada de entidades de gestión colectiva	77
B. Autorización	79
C. Normas de afiliación y transparencia	81
D. Concesión de licencias	83
E. Mantenimiento de bases de datos para los mercados digitales	85
3. Promoción de la observancia de los derechos de PI en el entorno digital	85
A. Modificaciones jurídicas menores	86
B. Observancia administrativa en línea	88
4. Regulación del rol de los prestadores de servicios de intermediación en línea en la infracción del derecho de autor	90
A. Actualización o creación de nuevas normas nacionales	90
B. Definición del mejor modelo para regular el rol de los prestadores de servicios de intermediación en línea en la infracción del derecho del autor	91
C. Responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación en línea por infracción del derecho del autor	93
D. Más allá de la responsabilidad: medidas cautelares contra los prestadores de servicios de intermediación en línea en caso de infracción del derecho del autor	97
E. El caso de los proveedores de servicios para compartir contenidos en línea	98
5. Medidas educativas	102
6. Adopción de nuevas políticas para fomentar el uso de los derechos de PI en la era digital	105

## **Abreviaturas y siglas**

CISAC: Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores

DGIP: Dirección General de Propiedad Intelectual

IA: inteligencia artificial

IFPI: Federación Internacional de la Industria Fonográfica

OCSSP: proveedor de servicios para compartir contenidos en línea

OGC: organismo de gestión colectiva

OIGD: organización independiente de gestión de derechos

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

PIB: producto interno bruto

PSSI: prestadores de servicios de intermediación en línea

TDRA: Autoridad Gubernamental de Reglamentación de las Telecomunicaciones y el Entorno Digital

TNF: token no fungible

URL: Localizador Uniforme de Recursos

URSEC: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones

WCT: Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

WPPT: Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas

## I. Objetivos y metodología del estudio exploratorio

Este estudio pretende abarcar las cuestiones que se deben abordar con el fin de fomentar el uso de los derechos de propiedad intelectual (PI) en la era digital en Chile, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Uruguay.

Se trata de un paso primordial en el marco del proyecto titulado *Propuesta revisada de proyecto de Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos sobre la promoción del uso de la propiedad intelectual en los países en desarrollo para las industrias creativas de la era digital* (documento CDIP/26/5), que aprobó el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).<sup>1</sup>

El objetivo principal del proyecto es fortalecer el uso de los derechos de PI por parte de las empresas y compañías creativas locales (en adelante, las industrias creativas) en el entorno digital en los cuatro países beneficiarios. Para ello, el proyecto se centra en las preguntas relacionadas con la PI que surgen en subsectores específicos.

En este marco, el estudio tiene como objetivo elaborar recomendaciones estratégicas que ayuden a los cuatro países a lograr sus objetivos nacionales. Para ello, distingue diferentes cuestiones en Chile, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Uruguay que se deberían contemplar para fomentar el papel de los derechos de PI en cinco subsectores

En lugar de adoptar un enfoque académico, da prioridad a soluciones y recomendaciones prácticas. Por lo tanto, el factor más importante del análisis es la propia realidad jurídica y económica de cada país, y las preocupaciones que se perciben con respecto al sistema nacional de derechos de PI.

Por este motivo, el punto de partida mayoritario de este estudio es el análisis de la legislación nacional<sup>2</sup> y las respuestas de cada país a un cuestionario (las resoluciones a una encuesta).<sup>3</sup> Todas las encuestas nacionales estuvieron abiertas a las partes interesadas, tanto públicas como privadas. Cada país envió un documento que contó con las respuestas de, al menos, las autoridades gubernamentales. En algunos casos, hubo aportes de sectores interesados privados. En otros, fue necesario complementar respuestas específicas con fuentes de acceso público.

Teniendo en cuenta esos aspectos prácticos, este estudio se ha centrado en cuestiones relacionadas con los derechos de autor y conexos, ya que estos son los más afectados cuando las industrias creativas y culturales comercializan sus productos y servicios en el entorno digital.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Para ver la descripción de los objetivos o el desarrollo del proyecto, véase: [https://www.wipo.int/meetings/es/doc\\_details.jsp?doc\\_id=537938](https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=537938).

<sup>2</sup> Las traducciones al español de las leyes de Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos son traducciones oficiales de la Oficina Internacional. Se incluye una cita en cada caso.

<sup>3</sup> Cuando corresponde, se hace referencia directa a fuentes académicas, en particular en lo concerniente a aspectos sobre los que no se facilitó respuesta o que no se trataron de manera suficiente en la encuesta.

<sup>4</sup> Cuando es necesario se mencionan debidamente los derechos de PI que podrían verse afectados en los subsectores seleccionados, especialmente las marcas registradas, los diseños industriales y, en casos específicos, las patentes.

Por este motivo, cuando se refiere a la propiedad intelectual o a los derechos de PI, estos deben entenderse en el sentido del derecho continental o codificado,<sup>5</sup> es decir, incluyendo únicamente los derechos de autor y los derechos conexos o afines. De igual manera, los derechos de propiedad intelectual e industrial<sup>6</sup> describen el concepto anglosajón amplio de los derechos de PI.

Cabe destacar que las referencias a las industrias creativas incluyen, de manera exclusiva, las seis áreas de negocio contempladas expresamente en el proyecto de la OMPI que financia este estudio. Por lo tanto, se considerarán solamente las problemáticas vinculadas a las industrias audiovisuales, de los videojuegos, de las aplicaciones móviles, de la música, editorial y de la moda.

Desde la perspectiva de los derechos de PI, no hay una razón real para diferenciar entre los dos subsectores del mercado en el caso de los videojuegos y las aplicaciones móviles, ya que los problemas principales que se plantean son, básicamente, los mismos. Por lo tanto, las áreas de videojuegos y de aplicaciones móviles se tratan en conjunto.<sup>7</sup>

Además, los conceptos de videojuegos y aplicaciones móviles se superponen fácilmente desde el punto de vista de los derechos de autor. Por este motivo, los videojuegos y otros juegos electrónicos describirán un producto basado en un programa informático que está diseñado principalmente, y se utiliza, para tales fines, incluso cuando se comercializa a través de una aplicación móvil. Por el contrario, el término “aplicaciones móviles” se referirá al *software* comercializado para ser usado en teléfonos inteligentes, tabletas u otro *hardware* portátil con fines distintos al juego.<sup>8</sup>

Dados los objetivos y la metodología, las recomendaciones incluidas en este estudio no se deben considerar normativas. Representan un equilibrio entre los planteamientos estándar y las soluciones individuales, y pretenden ser sugerencias o propuestas de acción para legisladores nacionales.

---

<sup>5</sup> En un contexto internacional, la PI es un concepto amplio que incluye dos ramas de derechos: la propiedad industrial y los derechos de autor y derechos conexos. El término se usa en este sentido en el artículo 2.viii) del Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y el Anexo 1C, art. 2.1 del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marruecos el 15 de abril de 1994 y modificado por el Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC de 2005.

<sup>6</sup> La propiedad industrial suele referirse a todas las formas de derechos de PI aparte de los derechos de autor y derechos conexos, como patentes, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas de servicio, nombres comerciales, indicaciones geográficas y represión de la competencia desleal. El término se usa en este sentido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado originalmente en 1883.

<sup>7</sup> Hay muchas formas de comercializar un videojuego o un juego electrónico, desde videojuegos pagos distribuidos por Internet, descargas de versiones completas para consolas de videojuegos o computadoras y juegos móviles para teléfonos inteligentes y tabletas, hasta juegos multijugador en línea pagos y gratuitos; véase <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-media/video-games/worldwide?currency=usd>.

<sup>8</sup> Una aplicación móvil se basa en un programa informático que organiza los distintos elementos de la misma, por lo que, en esencia, también puede considerarse *software*. No obstante, se pueden conceder derechos de autor sobre imágenes, gráficos, diseños y otros elementos de las visualizaciones en pantalla independientemente de la protección concedida al programa informático subyacente, como ocurre en los videojuegos. Véase la publicación de la OMPI. *Protecting your mobile app: Intellectual property solutions*. wipo.int. 2021, p. 22. <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_1071.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1071.pdf)>.

Tras este capítulo introductorio, este estudio se divide en tres capítulos más. En el Capítulo II se analiza el escenario económico y empresarial para las industrias creativas en el entorno digital en cada uno de los países abordados.

En el Capítulo III se describe el panorama de los derechos de PI en el ámbito nacional para reconocer si la legislación y su funcionamiento práctico pueden hacer frente adecuadamente a la explotación digital de las obras y otras materias. Finalmente, en el Capítulo IV se incluyen recomendaciones para promover el uso de los derechos de PI en el entorno digital en los cinco subsectores identificados en las industrias creativas.

## **II. Panorama del mercado para las industrias creativas en el entorno digital en Chile, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Uruguay**

El estado actual de las industrias creativas en los cuatro países varía enormemente según las características nacionales tales como la población,<sup>9</sup> el desarrollo,<sup>10</sup> la economía y el capital humano.<sup>11</sup> También hay varias diferencias en el grado de desarrollo de cada sector dentro de los países.<sup>12</sup> Sin embargo, todas las respuestas a la encuesta señalaron un mercado sólido y creciente para las industrias creativas, aunque la calidad de los datos proporcionados varía.<sup>13</sup>

En esencia, el panorama del mercado de las industrias creativas en un país es la consecuencia de varios factores, entre ellos, la estructura de las partes interesadas involucradas, la situación de los subsectores, la evolución del mercado como resultado de la pandemia de COVID-19 y el papel de las políticas nacionales en la promoción de las industrias.

### **1. Estructura del mercado y contribución a la economía nacional**

Las cuatro respuestas a la encuesta proporcionaron información sobre la estructura del mercado (prevalencia de las pymes frente a las empresas grandes o internacionales) y su contribución a la economía y mano de obra nacionales.

---

<sup>9</sup> Existen enormes diferencias de mercado entre un país como Indonesia (población estimada de 276 millones, PIB de 1,19 billones de dólares estadounidenses actuales-2021- ) y Uruguay (población de casi 3,5 millones, PIB de 59.320 millones de dólares estadounidenses actuales-, 2021); véase <https://datos.bancomundial.org/?locations=CL-ID-AE-UY>.

<sup>10</sup> Existen diferencias significativas entre los países seleccionados en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Según el informe 2021-2022, los Emiratos Árabes Unidos ocupan el puesto 26 (IDH de 0,911), Chile el 42 (IDH de 0,855), Uruguay el 58 (IDH de 0,809) e Indonesia el 114 (IDH de 0,705). Véase PNUD: “Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022”. [hdr.undp.org](https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf). 2022, p. 272. En Internet. 21 de octubre de 2022. [https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf\\_1.pdf](https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf).

<sup>11</sup> Por ejemplo, el Índice de Capital Humano, un indicador del desarrollo social, varía un 20% en los cuatro países (0,7 en Chile, 0,7 en los Emiratos Árabes Unidos, 0,5 en Indonesia y 0,6 en Uruguay). Véase <https://datos.bancomundial.org/?locations=CL-ID-AE-UY>.

<sup>12</sup> Por ejemplo, el porcentaje de la población con acceso a Internet en 2020 varía entre el 54% en Indonesia y el 100% en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que Chile (88%) y Uruguay (86%) se encuentran entre ambos porcentajes. Véase <https://datos.bancomundial.org/?locations=CL-ID-AE-UY>.

<sup>13</sup> En casi todos los casos, las cifras proporcionadas no diferenciaron entre entornos digitales y no digitales o solamente se facilitaron por subsectores sin presentarse una cifra acumulada global.



En Chile, más de 45.000 empresas operaban en el mercado en 2020 en la explotación de obras y materias protegidas.<sup>14</sup> El 70% de estas eran microempresas y alrededor del 10% eran pymes con ingresos modestos.<sup>15</sup> En una tendencia común a otros países, las grandes empresas (solo el 0,6% del total) representaron el 65% de los ingresos totales de las industrias creativas, mientras que las microempresas y pymes representaron el 23% de las ventas.<sup>16</sup>

En 2020 las empresas creativas representaban el 3,6% de las empresas del país, pero sólo aportaron el 1,3% de las ventas nacionales,<sup>17</sup> lo que sugiere que las industrias creativas producen a un ritmo inferior al de las empresas de otros sectores.

Las empresas chilenas son conscientes de la importancia de las herramientas y las plataformas digitales para sus negocios, pero en muchos casos carecen de la formación necesaria para acceder a los nuevos canales. Más del 40% de las empresas considera que la transmisión en continuo (*streaming*) es una forma importante de comercializar sus contenidos<sup>18</sup>, pero solo el 27% considera que tiene el personal adecuado para ocuparse de las cuestiones legales asociadas a los nuevos mercados, incluidos los derechos de PI.<sup>19</sup> En 2020, sólo el 37% de las empresas registraron sus obras y otro material para proteger sus activos.<sup>20</sup>

Con respecto a la contribución de las industrias creativas a la mano de obra nacional, las microempresas tuvieron un total de 13.000 empleados en 2020, y las pymes casi 36.000. Las empresas medianas informaron acerca de la existencia de unos 25.000 trabajadores dependientes, mientras que las grandes empresas acumularon más de 57.000 empleados, lo que suma un total de aproximadamente 131.000 puestos de trabajo. También hubo una cantidad importante de trabajadores no dependientes en la industria que representaron más de 152.000 en empleos de tipo autónomo.<sup>21</sup>

En Indonesia, la economía creativa es un sector cada vez más importante, en el que se identificaron dieciséis industrias creativas internas que caen parcial o totalmente dentro del ámbito de este estudio.<sup>22</sup> Según algunos estudios, la mayoría de las empresas de estos subsectores (casi el 92%) son microempresas o pymes.<sup>23</sup> Hasta 2016, el 92% de estas empresas obtuvieron ingresos anuales por debajo de los 20.000 dólares estadounidenses, y casi el 96% contó con menos de cuatro empleados.<sup>24</sup>

---

<sup>14</sup> CORFO. "Estudio de Caracterización de empresas MIPE creativas en Chile." *corfo.cl*. Julio de 2022, p. 27. <http://repositoriodigital.corfo.cl/handle/11373/716719>.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 29.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 30.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 29.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 67.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 75.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 78.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 31.

<sup>22</sup> Véase la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. "Perspectivas de la Economía Creativa 2022." *unctad.org*. 7 de octubre de 2022, p. 5. En Internet. 21 de octubre de 2022. <https://unctad.org/es/webflyer/perspectivas-de-la-economia-creativa-2022>.

<sup>23</sup> "Survei Khsus Ekonomi Kreatif," citada en Lestariningsih, E., K. Maharani y T.K. Lestari. "Measuring creative economy in Indonesia: Issues and challenges in data collection." *Asia-Pacific Sustainable Development Journal*. Vol. 25, N.º 2 (2019): p. 107.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 108.

Según la respuesta a la encuesta, la economía creativa desempeña una parte importante en la economía nacional. La participación real de las industrias creativas en el PIB nacional es del 7,35%. Sin embargo, gran parte de este porcentaje se debe a los sectores tradicionalmente no digitales, como el de la moda.<sup>25</sup>

Una parte significativa del destino de los productos creativos de Indonesia es la exportación, especialmente en el sector de los videojuegos, las aplicaciones móviles<sup>26</sup> o la industria audiovisual (particularmente, la animación digital).<sup>27</sup>

Según fuentes gubernamentales, la cantidad de puestos de trabajo relacionados directamente con el ámbito audiovisual en 2021 superó los 43.000 mientras que la cantidad de trabajadores en el sector de los videojuegos o las aplicaciones móviles se calculó en más de 140.000. Otros subsectores constituyen una parte significativa de la mano de obra de Indonesia, donde la industria musical emplea a unas 70.000 personas, la industria editorial a 428.000 y la industria de la moda a casi cuatro millones.<sup>28</sup> Con respecto a esta última, no está claro si todos intervienen en la industria del diseño de moda o si incluye otras partes de la cadena de distribución.

De acuerdo con la respuesta a la encuesta de los Emiratos Árabes Unidos, el valor total añadido de las industrias culturales alcanza más de 54.000 millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos, que representa el 3,5% del PIB nacional y 5% del PIB no proveniente del petróleo. Las industrias culturales comprenden 36.295 establecimientos que emplean a 280.455 personas, el 3,7% de la mano de obra nacional. La respuesta, también incluyó información sobre la situación en algunos Emiratos, como Dubái, que muestra un gran número de microempresas que operan en el territorio (más de 11.500). El país estuvo entre las primeras 10 economías en desarrollo en 2020 en lo que respecta a la exportación de contenido y servicios de las industrias creativas cuando casi el 10% de las exportaciones totales de servicios del país provinieron de este subsector.<sup>29</sup> Los Emiratos Árabes Unidos ocupan el puesto 31 entre las 132 economías del Índice Mundial de Innovación de la OMPI.<sup>30</sup>

En la respuesta de Uruguay a la encuesta no se proporcionaron datos de alcance mundial sobre la distribución por tamaño de las empresas que operan en el sector de las

---

<sup>25</sup> La contribución de la industria de la moda es significativa y representó el 18% de la economía creativa en 2016, con tres subsectores no digitales (culinario, moda, artesanías) representando alrededor del 70% de la participación total. Véase Burhanudin, M., *et al.* "Analysis of creative industries development in Indonesia." *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*. Vol. 49, N. °1 (2020): p. 197.

<sup>26</sup> El objetivo del mercado nacional de juegos asciende aproximadamente al 30% y el 70% restante se dirige al mercado exterior.

<sup>27</sup> Según la respuesta a la encuesta de Indonesia, 67 de 150 estudios de animación locales declararon haber exportado a mercados extranjeros, sobre todo, a Canadá, China, Corea del Sur, EE. UU., Japón, Malasia, Reino Unido y Singapur. Este rápido crecimiento está repercutiendo en la enseñanza superior que ofrece a los estudiantes una educación más adaptada a esta realidad. Las universidades en Indonesia aportan anualmente más de 10.000 graduados en animación, multimedia y diseño de comunicación visual a estas industrias nacionales.

<sup>28</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Outlook Pariwisata & Ekonomi Kreatif di Indonesia 2020/2021." *kemenparekraf.go.id*. En Internet. 21 de octubre de 2022. <https://www.kemenparekraf.go.id/pustaka/Buku-Outlook-Pariwisata-dan-Ekonomi-Kreatif-2021>.

<sup>29</sup> UNCTAD, *op. cit.*, pp. 38–52.

<sup>30</sup> OMPI. "Índice Mundial de Innovación 2022: Emiratos Árabes Unidos." *wipo.int*. En Internet. 21 de octubre de 2022. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_2000\\_2022/ae.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ae.pdf).

industrias creativas. Pero sí se afirmó que en algunas áreas casi todas las empresas en funcionamiento son microempresas o pymes, especialmente en la industria audiovisual o los subsectores de videojuegos o aplicaciones móviles (donde casi el 100% de los estudios nacionales son una microempresa o una pyme).

## **2. La situación en los diferentes subsectores que abarca este estudio**

En Chile, la encuesta nacional informó que en el sector de videojuegos o las aplicaciones móviles, las empresas internacionales dominan el mercado interno y se destaca la presencia de las plataformas para la distribución electrónica de videojuegos, como Sony (PlayStation) y Microsoft (Xbox).

En Indonesia, en cambio, la encuesta no proporcionó una respuesta específica sobre el sector de los videojuegos o aplicaciones móviles. Sin embargo, cabe suponer que incluso si el porcentaje de la población con acceso a Internet todavía es moderado, el volumen de usuarios de videojuegos y aplicaciones móviles es enorme en términos absolutos. Así lo confirma el hecho de que el índice de penetración de teléfonos inteligentes en el país sigue creciendo exponencialmente.<sup>31</sup> Según algunos informes no oficiales, se prevé que los ingresos en el segmento de los videojuegos alcancen los 1.069 millones de dólares estadounidenses en 2022, con un índice de penetración de usuarios en la población total del 38,1%. La mayor participación del mercado corresponde a los juegos móviles, con un volumen de mercado de más de 629 millones de dólares estadounidenses en dicho año.<sup>32</sup>

Diferentes empresas internacionales del sector de los videojuegos y los juegos electrónicos están presentes en los Emiratos Árabes Unidos, entre ellas Ubisoft, Microsoft y Riot Games. El mercado nacional de aplicaciones móviles representa el 60% de la región de Oriente Medio y los desarrolladores emiratíes fabrican productos para las principales plataformas digitales.<sup>33</sup> Este sector de las aplicaciones móviles parece ser uno de los puntos de entrada más habituales para las nuevas empresas emergentes y los jóvenes empresarios locales que buscan lanzar nuevos negocios a partir de contenidos creativos.<sup>34</sup>

En la encuesta de Uruguay se evidencia que el mercado de los videojuegos o las aplicaciones móviles está operado principalmente por empresas internacionales, aunque también existe un pequeño grupo de entre 20 y 30 estudios que son, en su mayoría, pymes nacionales.

---

<sup>31</sup> La tasa total de conexiones de Indonesia fue del 125,6%, frente a la tasa de usuarios de Internet del 73,7%. Véase Calboli, I. y G. Hwang. "Informe sobre el mercado de la música en internet y los principales modelos de negocio en Asia: panorama y tendencias generales". *wipo.int*. 2021. En Internet. 21 de octubre de 2022. [https://www.wipo.int/meetings/es/doc\\_details.jsp?doc\\_id=540737](https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=540737).

<sup>32</sup> Statista. *Video Games: Indonesia*. *statista.com*. En Internet. 21 de octubre de 2022. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-media/video-games/indonesia?currency=usdZ>.

<sup>33</sup> Los indicadores de Emiratos Árabes Unidos también revelaron que el sector de los programas informáticos, las bases de datos y el *software* están dentro de los tres que más contribuyen a las principales industrias culturales, con un valor añadido total de casi 10.000 millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos.

<sup>34</sup> Según la respuesta de los Emiratos Árabes Unidos a la encuesta, entre los grandes desarrolladores de aplicaciones móviles del país figuran Group42, Branex LLC, Inserito Technologies, Appikr Labs y Qtch Networks.

El sector audiovisual, en términos generales, también es fuerte en los cuatro países y está dominado por grandes empresas internacionales junto con actores nacionales.

Se ha informado que hay más de 4.000 pymes que operan en el sector en Chile, pero los principales servicios de transmisión en continuo (*streaming*) están gestionados por empresas multinacionales como Amazon Prime Video, Netflix, Disney y HBO. En el año 2020, el 74% de la población chilena estaba suscrita al menos a un servicio de video bajo demanda.<sup>35</sup>

En Indonesia, además de las empresas internacionales que operan en los servicios de “transmisión libre” (servicios OTT) y de video bajo demanda, hay varias empresas nacionales que prestan servicios audiovisuales, algunas de las cuales cuentan con un importante número de suscriptores.<sup>36</sup> El sector de la animación también registra un auge gracias a la actividad de numerosos estudios sobre todo en Yakarta.

En los Emiratos Árabes Unidos, la posición dominante del mercado está ocupada por las grandes plataformas digitales internacionales del sector audiovisual, aunque hay otras empresas nacionales o regionales que funcionan con éxito. Entre ellas, están MBC Shahid (que posee una gran colección de contenidos de los países árabes), Viu (una plataforma panregional) y beIN Connect (especializada en la transmisión de eventos deportivos).

Uruguay cuenta con casi 1.000 empresas productoras de contenidos audiovisuales, la mayoría de propiedad y gestión local. Sin embargo, al igual que en los demás países seleccionados, son las grandes empresas internacionales las que prestan los servicios digitales importantes mientras que las industrias nacionales producen los contenidos. Algunas de ellas son pequeñas empresas e instituciones que ofrecen contenidos a través de plataformas digitales.<sup>37</sup>

Se informa que, en Chile, el sector musical está compuesto por 1.150 empresas y si bien los actores dominantes del mercado digital son los cuatro grandes sellos discográficos (EMI, Sony Music Entertainment, Universal Music Group y Warner Music Group), también hay lugar para sellos nacionales como Red Poncho, Quema su Cabeza e Iged. Asimismo, los principales proveedores internacionales, como Spotify, Apple Music, Deezer y Google son los que manejan los principales servicios de transmisión en continuo de música. También se publica gran parte del contenido en forma de vídeos musicales en las plataformas internacionales y las redes sociales.

La transición al modelo de música comercializada como servicio digital está en una etapa avanzada en Chile. Los ingresos totales generados por la música digital en 2021 fueron de 82,64 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 39,5%,<sup>38</sup> lo que implica

---

<sup>35</sup> CISAC. “Remuneración justa y crecimiento económico en el sector audiovisual: un estudio de América Latina”. *cisac.org*. 2002. En Internet. 21 de octubre de 2022. <https://www.cisac.org/es/Sala-de-prensa/articles/remuneracion-justa-y-crecimiento-economico-en-el-sector-audiovisual-un>.

<sup>36</sup> Según la encuesta de Indonesia, el servicio RCTI+ tenía casi 20 millones de usuarios activos mensuales y Vison+ (también de propiedad indonesia), casi 12 millones.

<sup>37</sup> En la encuesta del Uruguay se señala que la plataforma CineUy cuenta con más de 150 películas para ver mediante transmisión en continuo. +Cinemateca ofrece películas, documentales y cortometrajes dentro de Cinemateca Uruguaya, con un impacto comercial más limitado.

<sup>38</sup> Véase <https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-chile-en-el-2020-2021/>.

que la proporción de ingresos para los titulares de derechos por el uso digital está creciendo rápidamente.<sup>39</sup>

Indonesia es un mercado en expansión para la industria de la música digital, a tal punto que Spotify ha creado un nodo dedicado a la música indonesia<sup>40</sup> y también hay servicios regionales que ofrecen música en indonesio de artistas locales independientes.<sup>41</sup> Según la respuesta a la encuesta nacional, el PIB proyectado del subsector de la música en 2021 era de 6,8 billones de rupias indonesias, con 70.755 trabajadores.

En la respuesta a la encuesta de los Emiratos Árabes Unidos no se facilitaron datos sobre las características de las empresas que operan en el sector de la música, pero sí se informó que el país ha pasado rápidamente de un modelo de ingresos basado en la música en directo a otro dominado por plataformas de transmisión en continuo asequibles, como Anghami, Spotify o Apple Music.

El modelo de consumo musical se ha acercado a los estándares mundiales (un 62,1% de los ingresos procede de servicios de transmisión en continuo) y se prevé que los ingresos en el segmento de la música digital en los Emiratos Árabes Unidos alcancen los 2.087 millones de dólares estadounidenses en 2022.<sup>42</sup> De acuerdo con la respuesta a la encuesta, se ha producido un aumento anual del 6,3% en la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del sector.

El sector de la música en Uruguay abarca unas 150 empresas, cifra que incluye a aquellas con actividad no digital, como productoras de espectáculos en vivo. Las discográficas nacionales funcionan habitualmente en plataformas digitales como Spotify, iTunes, Deezer o Google.

En cuanto a la situación actual del sector editorial en los cuatro países, se informa que en Chile hay más de 4.900 empresas en funcionamiento. El mercado digital está dominado por plataformas internacionales como Amazon, que ofrece libros electrónicos y otras publicaciones digitales, aunque también existen algunas pequeñas plataformas de libros electrónicos como Ebooks Patagonia. El sector se encuentra en una transición firme hacia los formatos digitales; en 2022, casi el 40% de los títulos publicados en Chile por los subsectores comercial y educativo fue en formato digital o de audio.<sup>43</sup>

En la respuesta de Indonesia a la encuesta se indica que el valor del PIB del sector editorial nacional en 2021 fue de 78,08 billones de rupias indonesias, mientras que el valor de las exportaciones fue de 15,43 millones de dólares EE. UU.

Por su parte, en la encuesta de los Emiratos Árabes Unidos se indicó que el sector de la prensa y el libro, que tiene un valor añadido total de casi 10.000 millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos, forma parte de sus principales industrias culturales. Las

---

<sup>39</sup> Por ejemplo, en el año 2019, el 22,7% del total de los ingresos declarados por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales correspondieron a los usos digitales, con un aumento al 44,7% en 2020 y al 57,4% en 2021.

<sup>40</sup> Calboli y Hwang, *op. cit.*, p. 8.

<sup>41</sup> *Ibid.*, p. 9.

<sup>42</sup> Statista, "Digital Music: United Arab Emirates." *statista.com*. En Internet. 21 de octubre de 2022. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-media/digital-music/united-arab-emirates>.

<sup>43</sup> OMPI. *World Intellectual Property Indicators 2021*. *wipo.int*. 2021. En Internet. 21 de octubre de 2022. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2021.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2021.pdf).

editoriales de publicación electrónica locales y regionales que funcionan en el país son, entre otras, ITP Media Group, Motivate Media Group y Al Nisr Publishing.

La transición al mercado digital también está en un estado avanzado allí, ya que muchos editores tradicionales han desarrollado servicios de publicación electrónica junto a sus títulos impresos o son ahora empresas independientes que operan exclusivamente en el mercado digital. Sin embargo, existe un marco regulador nacional para las industrias editoriales del país y se requiere una licencia del Ministerio de Cultura y Juventud para publicar contenidos tanto en formato electrónico como en papel.

En Uruguay existe un pequeño sector editorial (unas 15 editoriales) y se están haciendo esfuerzos para afrontar los desafíos del entorno digital y promover la internacionalización.<sup>44</sup>

Hasta no hace mucho tiempo, la industria de la moda no se había visto afectada en gran medida por la revolución digital y las cuatro respuestas a la encuesta aportaron pocos datos sobre este subsector. Sin embargo, como ha ocurrido en otras industrias creativas, esto ha cambiado con la explosión del metaverso y otros mundos digitales. La creación de los tókenes no fungibles (TNF) y de ropa electrónica en el metaverso o de avatares en la industria de los videojuegos, está generando nuevos desafíos para la industria.

Muchos de los problemas tradicionales relativos a los derechos de PI en la moda se han trasladado al entorno digital. Es el caso de las prendas digitales que reclaman protección de marcas y diseños.<sup>45</sup> En algunos casos, dependiendo del grado de originalidad, también se les podría conceder la protección por derechos de autor.

Sin embargo, no hay problemas más específicos para la industria de la moda en los mercados digitales que para los otros cuatro subsectores que abarca este estudio. La protección integral de las marcas, los diseños y los derechos de autor del mundo “físico” debería trasladarse fácilmente a las obras digitales.

Las respuestas de Chile indican que el país cuenta con tan solo 24 empresas en la industria de la moda.

En Indonesia, el sector minorista es una de las principales fuentes de ingresos de la industria creativa en el mundo físico. La transición que ha hecho este país, de los mercados tradicionales a las tiendas y los centros comerciales modernos cerrados, generó una superposición con el comercio electrónico ya que varios mercados de este

---

<sup>44</sup> Uruguay, Dirección de Planeamiento, Oficina de Planeamiento y Presupuesto. “Hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050: Vol. XIII – Las industrias creativas en el desarrollo del Uruguay del futuro.” *opp.gub.uy*. Mayo 2019, pp. 26–27. [https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/inline-files/15\\_%20Las%20industrias%20creativas%20en%20el%20desarrollo%20del%20Uruguay%20del%20futuro.pdf](https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/inline-files/15_%20Las%20industrias%20creativas%20en%20el%20desarrollo%20del%20Uruguay%20del%20futuro.pdf).

<sup>45</sup> Ya se han dado casos de infracción de los derechos de marcas en el metaverso. Un ejemplo es el del bolso MetaBirkin. Mason Rothschild, su diseñador, creó y vendió 100 TNF no autorizados a precios no muy distintos del bolso original por lo que Hermès, diseñador del Birkin físico, alegó que esto infringía sus derechos de marca registrada. La demanda se presentó ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en enero de 2022. Véase <https://www.hfgip.com/news/hermes-sues-metabirkin-trademark-infringement>.



tipo incluyen productos al por menor y de moda, como Lazada.com y Tokopedia.com que ya están en funcionamiento.<sup>46</sup>

Según la respuesta a la encuesta de los Emiratos Árabes Unidos, solo una de las zonas francas del Emirato, Dubai Design District, está dedicada al sector de la moda y el diseño profesional.

En Uruguay se observa un número significativo de empresas en la industria de la moda, aunque la mayoría son microempresas que se encuentran únicamente en el mercado físico.<sup>47</sup>

### 3. Evolución del mercado

Las cuatro economías creativas nacionales han crecido significativamente en los últimos años.<sup>48</sup> En Indonesia, por ejemplo, el PIB a precio de mercado correspondiente a las industrias creativas se duplicó con creces en el decenio 2010-2020. En los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, la cantidad de microempresas del sector de las industrias creativas aumentó de 7.179 en 2019 a 11.580 en 2020.

No obstante, la evolución de dichos mercados en las cinco áreas cubiertas por este estudio es altamente variable.

En los subsectores audiovisual (sobre todo la animación) y de los videojuegos o las aplicaciones móviles, la tasa de crecimiento ha sido fuerte.<sup>49</sup> En Chile, por ejemplo, la industria de videojuegos y otros juegos electrónicos creció del 27,6% entre 2020 y 2021.<sup>50</sup> En Indonesia, el tamaño del sector de la animación aumentó más de un 25% anual en los últimos cinco años hasta 2022. Los Emiratos Árabes Unidos informaron que el mercado de las aplicaciones móviles está creciendo de manera sostenida y ofrece productos innovadores a los usuarios de la región de Oriente Medio. En Uruguay, por su parte, el número de productos audiovisuales en 2018 fue el doble que en 2008.

En la industria de la moda, el crecimiento ha sido significativamente más lento y algunas respuestas a la encuesta (por ejemplo, la de los Emiratos Árabes Unidos) señalaron que, si bien el comercio electrónico está creciendo de manera veloz, las ventas minoristas tradicionales se están ralentizando. Un proceso similar se está produciendo, aunque en menor medida, en la industria editorial.

También existen nuevos mercados emergentes para la explotación de obras y otros derechos conexos en el entorno digital, especialmente en el metaverso y en el ámbito

---

<sup>46</sup> *Global Business Guide. "Indonesia's retail sector: E-commerce, the next growth driver."* gbgindonesia.com. 2016. En Internet. 21 de octubre de 2022. [http://www.gbgindonesia.com/en/services/article/2016/indonesia\\_s\\_retail\\_sector\\_e\\_commerce\\_the\\_next\\_growth\\_driver\\_11631.php](http://www.gbgindonesia.com/en/services/article/2016/indonesia_s_retail_sector_e_commerce_the_next_growth_driver_11631.php).

<sup>47</sup> Según la encuesta de este país, de las 2.097 empresas que operan en el sector de la moda, 2.006 son microempresas, 162 pymes, 26 medianas empresas y tres grandes empresas (más de 250 trabajadores).

<sup>48</sup> La mejora de la calidad y la velocidad de los servicios de Internet, el uso generalizado de teléfonos inteligentes con abono de datos con tarifa plana y el aumento de la seguridad de los sistemas de pago electrónico aceleran la transición a los mercados digitales.

<sup>49</sup> Según la encuesta indonesia, el mercado nacional del cine, la animación y el video casi triplicó su tamaño de 2010 a 2017.

<sup>50</sup> Véase <https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-chile-en-el-2020-2021/>.

de los TNF y otras criptomonedas coleccionables. Según los informes de los Emiratos Árabes Unidos, este mercado ya está creciendo rápidamente. Las obras y otros materiales creados por medio de la inteligencia artificial también se perfilan como un mercado prometedor, aunque los cuatro países todavía no han informado de ninguna actividad.

En muchos casos, la pandemia de COVID-19 causó muchas dificultades debido a la falta de ventas, la infraestructura inadecuada para trabajar desde casa, el descenso de la productividad y los problemas de comunicación entre los empleados. También se vio afectada la capacidad de recopilar información estadística precisa, especialmente en 2020 y 2021.

La pandemia impactó de manera negativa en algunas áreas como el de la moda, pero también supuso un impulso para subsectores digitales nativos como el de los videojuegos o las aplicaciones móviles y aceleró la transición a los servicios digitales de transmisión en continuo en los mercados de la música, audiovisual, y en menor medida, editorial. Aun cuando el mercado físico de la moda se vio afectado, el nuevo *statu quo* contribuyó a la expansión de los mercados de comercio electrónico que venden productos al por menor, incluyendo los de la moda.

Los datos proporcionados por las respuestas a la encuesta también muestran que la pandemia de COVID-19 ya no tiene impacto en las industrias creativas. Por ejemplo, en Indonesia, el valor del PIB de la economía creativa se contrajo ligeramente en 2020 (1,70%), pero se expandió de manera significativa en 2021 (4,04%).

Sin embargo, algunas respuestas indicaron que sigue habiendo incertidumbre sobre la evolución de las industrias creativas en los próximos años. De la respuesta de Chile, por ejemplo, se desprende que una recesión mundial causaría graves problemas a muchas pymes, lo que probablemente aceleraría la transición al mercado digital debido a que sus costos son reducidos.

#### **4. Políticas nacionales para reforzar las industrias creativas en el entorno digital**

Las respuestas de los cuatro países citaron uno o varios de los subsectores seleccionados como prioridades estratégicas en cuanto a las políticas nacionales para reforzar las industrias creativas en el entorno digital.

Por ejemplo, según la encuesta en Indonesia, los subsectores de animación y aplicaciones móviles se consideraban importantes, mientras que en los Emiratos Árabes Unidos se daba prioridad a los subsectores de la música, editorial y videojuegos o aplicaciones móviles.

En Chile, no existe una política estratégica nacional que potencie específicamente el uso de los derechos de PI en el entorno digital. Sin embargo, existen dos programas para promover el desarrollo de las industrias creativas: la Política Nacional de Cultura 2017 - 2022<sup>51</sup> y el Plan Nacional de Fomento de la Economía Creativa de 2017. Con la gestión

---

<sup>51</sup> Véase <https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/politica-nacional-cultura-2017-2022.pdf>.



del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,<sup>52</sup> dichos programas han establecido directrices generales para promover las industrias creativas.

Además, existen proyectos puntuales para áreas como la exportación,<sup>53</sup> o la financiación de obras audiovisuales,<sup>54</sup> desarrollados y llevados a cabo en algunos casos con colaboración y financiación público-privada.<sup>55</sup> También se han realizado mapeos específicos de los subsectores de la industria de la música y el entretenimiento que incluyeron a las empresas que prestan servicios de realidad virtual y aumentada.<sup>56</sup>

El sector público financia activamente las industrias culturales y creativas. Según un informe, en 2022, más del 57% de las empresas chilenas de este sector dependieron en cierta medida de la financiación pública.<sup>57</sup>

En el ámbito legislativo, Chile ha realizado importantes esfuerzos para proteger los derechos de PI con la aprobación de dos leyes que introducen reformas importantes en materia de propiedad industrial y comercio ilegal de productos pirateados.<sup>58</sup>

En Indonesia, hay varios avances prometedores en políticas públicas. La legislación reciente, como la Ley N° 24 del 2019 sobre economía creativa, tiene como objetivo promover las industrias creativas indonesias en el mercado digital. Entre otros instrumentos gubernamentales que comparten el mismo objetivo, se encuentran el Reglamento gubernamental N° 24 de 2022, un reglamento de ejecución de la ley de

---

<sup>52</sup> Véase <https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/plan-nacional-de-fomento-a-la-economia-creativa/>.

<sup>53</sup> El programa ProChile se ha extendido a las industrias creativas. Véase <https://www.prochile.gob.cl/sectores-exportadores/industrias-creativas>.

<sup>54</sup> Véase <https://www.cntv.cl/fondo-cntv/>.

<sup>55</sup> Programa Chile Creativo; véase <https://chilecreativo.cl/proyectos/>.

<sup>56</sup> UNCTAD, *op. cit.*, p. 26.

<sup>57</sup> CORFO, *op. cit.*, p. 62.

<sup>58</sup> Chile, Ley N.º 19.039 del 6 de marzo de 2006 sobre Propiedad Industrial, refundida por el Decreto Ley N° 4 del 20 de junio de 2022 que incorpora modificaciones hasta la Ley N° 21.335 del 5 de julio de 2021; véase <https://bcn.cl/299v0>. La ley estableció una indemnización por daños y perjuicios; véase el art. 108. La Ley N.º 21.335 incluyó la tipificación de la falsificación de marcas, el reconocimiento de las marcas no tradicionales, la introducción de solicitudes provisionales de patentes, la incorporación de una definición más amplia de los secretos comerciales y la ampliación a 15 años del plazo de protección de los dibujos y diseños industriales. Posteriormente, Chile aprobó la Ley N° 21.426 del 12 de febrero de 2022, sobre comercio ilegal; véase <https://bcn.cl/2xi9n>. En ella se tipifica como delito la complicidad en el comercio de productos falsificados, pirateados y otros tipos de productos ilícitos, y se autorizan multas y sanciones más severas. En concreto, el nuevo artículo 28 introdujo una pena de reclusión menor por infracción de los derechos de marca y falsificación comercial, que antes solo estaba sujeta a multas. Véase la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. 2022 *Special 301 Report*. *ustr.gov*. 2022, p. 42. En Internet. 21 de octubre de 2022. <https://ustr.gov/sites/default/files/IssueAreas/IP/2022%20Special%20301%20Report.pdf>; y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 2022 *International IP Index*. *uschamber.com*. 2022, pp. 132–133. En Internet. 21 de octubre de 2022. <[https://www.uschamber.com/assets/documents/IPIndex-FullReport\\_2022.pdf](https://www.uschamber.com/assets/documents/IPIndex-FullReport_2022.pdf)>.

economía creativa,<sup>59</sup> y el Reglamento Presidencial N.º 142 de 2018 relativo al plan maestro de economía creativa.<sup>60</sup>

También se estableció un Grupo de Trabajo sobre PI para mejorar la coordinación en materia de observancia,<sup>61</sup> y se han emprendido varias iniciativas para combatir la piratería en línea como el aumento de los esfuerzos de observancia y la cooperación entre el Ministerio de Comunicaciones e Informática (MOCI) y la Dirección General de Propiedad Intelectual (DGIP).<sup>62</sup>

Durante 2021, Indonesia llevó a cabo actividades para desarrollar y promover sus industrias creativas a escala nacional, bilateral, regional y multilateral, mediante la colaboración con las partes interesadas.<sup>63</sup> El país ocupa el puesto 75 entre las 132 economías incluidas en el Índice Mundial de Innovación de la OMPI, lo que mejora de manera significativa su posición en 2022, en especial en cuanto a productos de innovación, en comparación con los dos años anteriores.<sup>64</sup>

Los Emiratos Árabes Unidos presentaron en 2021 la Estrategia Nacional para las Industrias Culturales y Creativas (Estrategia Nacional para CCI). Esta política, que abarca un periodo de 10 años, pretende aumentar la contribución de las industrias creativas al 5% del PIB.<sup>65</sup> La estrategia nacional cuenta con 40 iniciativas específicas para fomentar la creatividad y mejorar el entorno profesional y empresarial del sector, con el objetivo de duplicar en una década la cantidad de empresas que operan en el país.<sup>66</sup>

Una característica importante de las políticas federales y estatales<sup>67</sup> es la creación de zonas francas para atraer empresas creativas,<sup>68</sup> muchas de las cuales llevan a cabo su actividad en el entorno digital. También ha habido un gran impulso en el área de la

---

<sup>59</sup> Se utiliza como reglamento de ejecución de la Ley N.º. 24 de 2019 de Indonesia, que entrará en vigor un año después de su promulgación. Su objetivo principal es reafirmar la financiación basada en la PI usándola como garantía para obtener financiación de las instituciones financieras; véase <https://aklaw.co.id/new-government-regulation-enabling-ip-based-financing-to-support-development-of-creative-economy>.

<sup>60</sup> En Indonesia, los instrumentos normativos para la protección de la PI incluyen leyes, reglamentos gubernamentales, reglamentos presidenciales y reglamentos del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

<sup>61</sup> Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, *op. cit.*, p. 12.

<sup>62</sup> *Ibid.*, p. 58.

<sup>63</sup> UNCTAD, *op. cit.*, p. 82.

<sup>64</sup> OMPI. "Índice Mundial de Innovación 2022: Indonesia." *wipo.int*. En Internet. 21 de octubre de 2022. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_2000\\_2022/id.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/id.pdf).

<sup>65</sup> Véase <https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/national-strategy-for-the-cultural-and-creative-industries#:~:text=Launched%20in%202021%2C%20the%20UAE's,the%20national%20GDP%20by%202031>.

<sup>66</sup> Los Emiratos Árabes Unidos facilitan la obtención de visas para los empresarios calificados en las industrias creativas; véase <http://wam.ae/en/details/1395302998166>.

<sup>67</sup> En Dubái, el Departamento de Economía y Turismo ha estado trabajando para crear un entorno normativo adecuado para el espacio de activos virtuales. Colaboró en la creación de contenidos audiovisuales y musicales promocionales y turísticos en los Emiratos Árabes Unidos y ha promovido eventos de videojuegos en la región.

<sup>68</sup> Incluye twofour54 en Abu Dhabi, y Dubai Media City (para la industria de los medios de comunicación), Dubai Internet City (empresas de tecnologías de la información), Dubai Design District (industria de la moda o el diseño profesional) y Al Quoz Creative Zone en Dubái.

educación<sup>69</sup> y, según el Índice Mundial de Innovación 2022,<sup>70</sup> estas políticas han situado a los Emiratos Árabes Unidos en la cima de la clasificación mundial de políticas y cultura empresariales. Además, se ha realizado un importante esfuerzo legislativo en materia de propiedad industrial, y se aprobaron nuevas leyes de protección de marcas<sup>71</sup> y derechos de PI.<sup>72</sup>

En Uruguay, existen dos programas principales de financiación pública para producciones audiovisuales y otros programas orientados al sector de los videojuegos.<sup>73</sup> Con arreglo a fuentes gubernamentales, las políticas nacionales para fomentar la innovación están orientadas a la internalización, la creación de productos y servicios de calidad, la promoción de la coordinación institucional y el respaldo a la formación profesional,<sup>74</sup> sobre todo en torno a la gestión de los derechos de PI<sup>75</sup> en el entorno digital<sup>76</sup>. Con formación profesional se busca lograr una participación más activa en la educación superior, una mejor gestión de los recursos humanos y la promoción de cursos dirigidos a los profesionales de las industrias creativas.<sup>77</sup>

Uruguay también cuenta con algunos grupos en diferentes subsectores (música, audiovisual, editorial, diseño) que funcionan como punto de conexión entre los responsables de las políticas públicas y las partes interesadas del ámbito privado.<sup>78</sup> Además, lleva adelante un programa específico con financiamiento e incentivos fiscales para el sector audiovisual.<sup>79</sup> Recientemente se hizo una actualización parcial de la legislación sobre propiedad industrial.<sup>80</sup>

---

<sup>69</sup> Por ejemplo, el Centro de Propiedad Intelectual Dhahi Khalfan impartió cursos académicos y formación aplicada sobre PI, y organizó cursos de capacitación a distancia para 5.300 participantes locales e internacionales. Véase la publicación de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, *op. cit.*, p. 11.

<sup>70</sup> OMPI. “Índice Mundial de Innovación 2022: Emiratos Árabes Unidos”, *op. cit.*, p. 6.

<sup>71</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley Federal N.º 36 de 20 de diciembre de 2021 sobre marcas e indicaciones geográficas; véase <https://u.ae/-/media/Documents-2022/Trademarks-law-no-36--of-2021-on-trademarks.ashx>.

<sup>72</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley Federal N.º 11 de 31 de mayo de 2021 sobre la regulación y protección de los derechos de propiedad industrial; véase <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/584451>.

<sup>73</sup> Según la respuesta a la encuesta de Uruguay, incluyen un programa de financiación pública para videojuegos, concursos para detectar talentos locales e incubadoras comerciales para ayudar a las empresas emergentes.

<sup>74</sup> Uruguay, Dirección de Planeamiento, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, *op. cit.*, p. 40.

<sup>75</sup> *Ibid.*, p. 45.

<sup>76</sup> El Uruguay ocupa el puesto 64 entre las 132 economías incluidas en el Índice Mundial de Innovación 2022. A escala regional, ocupa el 5.º puesto entre las 18 economías de América Latina y el Caribe. Véase la publicación de la OMPI. “Índice Mundial de Innovación 2022: Uruguay.” *wipo.int*. En Internet. 21 de octubre de 2022. <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_2000\\_2022/uy.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/uy.pdf)>.

<sup>77</sup> Uruguay, Dirección de Planeamiento, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, *op. cit.*, p. 59.

<sup>78</sup> Véase <https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/sectores-industrias-creativas-culturales-icc>.

<sup>79</sup> Véase <https://uruguayaudiovisual.com/>.

<sup>80</sup> Uruguay, Ley N.º 17.164 de 2 de septiembre de 1999 de patentes, modificada hasta la Ley N.º 19.924 de 18 de diciembre de 2020; véase <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/583266>; y la Ley N.º 17.011 del 25 de septiembre de 1998 que dicta normas relativas a las marcas, modificada hasta la Ley N.º 19.670 de 15 de octubre de 2018; véase <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/585239>.

### **III. El Panorama de los derechos de PI y los desafíos para las industrias creativas en el entorno digital en Chile, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Uruguay**

#### **1. Rol de los derechos de PI en el funcionamiento de las industrias creativas en el entorno digital**

Como hemos observado, existen diferencias sustanciales en las industrias creativas que operan en los mercados digitales en los cuatro países. Sin embargo, poco importa esto desde el punto de vista jurídico. Incluso si el marco constitucional y las tradiciones jurídicas difieren drásticamente, estas variaciones son mucho menos importantes en la legislación de derecho de autor.

Se trata de una rama del derecho que se ha beneficiado de la entrada en vigor de diferentes tratados internacionales multilaterales con referencias entre ellos.<sup>81</sup> Se ha creado un régimen de derechos de autor verdaderamente internacional que es, hasta cierto punto, homogéneo. Esto garantiza los principios de territorialidad y trato nacional, un sistema de protección sin formalidades obligatorias y un nivel mínimo de protección respecto de la duración, los derechos morales y patrimoniales, las excepciones y limitaciones, entre otras cuestiones. Los principales pilares de esta red internacional en el caso de los derechos de autor son: el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna),<sup>82</sup> el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)<sup>83</sup>, el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (Tratado de Marrakech)<sup>84</sup> y el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

En menor medida, este proceso también ha tenido lugar en el ámbito de los derechos conexos, especialmente para los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, con tratados como el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT),<sup>85</sup> la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Convención de Roma)<sup>86</sup> y el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.<sup>87</sup> El Acuerdo sobre los ADPIC también

---

<sup>81</sup> Véanse, por ejemplo, referencias en el art. 9.1) del Acuerdo sobre los ADPIC de los art. 1 a 21 del Convenio de Berna, con la exclusión del art. 6*bis* para los derechos morales.

<sup>82</sup> El Convenio de Berna se aprobó el 9 de septiembre de 1886, última enmienda el 28 de septiembre de 1979.

<sup>83</sup> El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor se aprobó en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

<sup>84</sup> Tratado de Marrakech adoptado por la Conferencia Diplomática, celebrada en Marrakech el 27 de junio de 2013, sobre la conclusión de un tratado que facilite a las personas con discapacidad visual y/o con dificultad para acceder al texto impreso, el acceso a las obras publicadas; véase <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/302980>.

<sup>85</sup> El WPPT se aprobó en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

<sup>86</sup> La Convención de Roma se adoptó en Roma el 26 de octubre de 1961.

<sup>87</sup> Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales aprobado por la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, adoptado en Beijing el 24 de junio de 2012; véase <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/295840>.

contiene normas sobre derechos conexos, con estrechas conexiones con la Convención de Roma y el WPPT.

También hay un factor más sutil que acerca los regímenes de cada país en materia de derechos de autor y derechos conexos: en cierta medida, todos tienen sus raíces jurídicas en la tradición del *droit d'auteur*,<sup>88</sup> más que en el sistema anglosajón de derechos de autor. Los cuatro países regulan los derechos morales y tres de ellos basan su legislación en el enfoque humanista de la tradición jurídica continental, mientras que Indonesia tiene un carácter más híbrido.

Con respecto al rol de los derechos de PI en los países seleccionados, en las cuatro respuestas a la encuesta se muestra que los derechos de autor y los derechos conexos son una parte esencial del funcionamiento diario de las industrias creativas en los mercados digitales. De hecho, casi todas las fuentes de monetización de obras digitales y otros materiales, desde la clásica transmisión en continuo y la descarga hasta mercados más nuevos como la venta en redes sociales o la creación de TNF en la cadena de bloques, requieren la gestión de derechos de PI complejos.

Las respuestas a la encuesta de los cuatro países también reflejan problemáticas jurídicas en común, que sugieren la necesidad de definir correctamente el concepto de obra y otro material protegido en formatos digitales, abarcar nuevas formas de monetizar el contenido (TNF, obras creadas por inteligencia artificial), definir con precisión las excepciones y limitaciones nacionales para equilibrar el *ius prohibendi* (el derecho para prohibir el uso de la obra) de los titulares del derecho con otros intereses públicos y proporcionar un sistema de aplicación sólido que evite la infracción en el entorno en línea.

También se expresaron algunas preocupaciones relativas a ámbitos específicos. En Chile, por ejemplo, se presenta un problema en el mercado digital con el registro y la trazabilidad de los derechos de autor y los derechos conexos que perjudica la correcta gestión de los primeros, ya que muchas transacciones en el país no siempre se registran ni se documentan por escrito. Esto es especialmente cierto en el caso de los fonogramas, dado que muchos sellos discográficos independientes no llevan un registro de sus contratos con los artistas intérpretes o ejecutantes. También se mencionó la dificultad de recaudar tasas para los proveedores musicales y audiovisuales con domicilio fuera de Chile y, en determinados casos, los problemas relacionados con la aplicación de los derechos de PI y la dependencia excesiva de los subsidios públicos.

En Uruguay, por su parte, la falta de conocimiento del régimen de derecho de autor de las obras audiovisuales podría obstaculizar la creación en este campo, sobre todo en el caso de los guiones, que no requieren grandes inversiones económicas.

## **2. Normas de fondo para la protección de los derechos de PI en el entorno digital**

El alcance de este estudio no incluye la descripción de la legislación nacional sobre derechos de autor y derechos conexos de los países seleccionados. Nuestro análisis se centrará, en cambio, en cuatro ámbitos de protección jurídica de derechos de autor y derechos conexos considerados esenciales para garantizar una protección adecuada de

---

<sup>88</sup> Por ejemplo, las legislaciones española y francesa han influido claramente en la legislación sobre derechos de autor de Chile y Uruguay.

los derechos en el entorno digital. Entre ellos figuran el alcance de las obras protegidas por los derechos de autor y su adaptación a nuevas formas de expresar la creatividad en formato digital, los derechos patrimoniales protegidos por los derechos de autor, las excepciones y limitaciones<sup>89</sup> a los derechos patrimoniales y las normas sobre titularidad y cesión de derechos de autor y derechos conexos.

Se tratarán por separado otros dos ámbitos relativos al funcionamiento práctico de los derechos de PI que merecen atención individual, a saber, el sistema nacional de gestión colectiva y la observancia de los derechos en el entorno digital, incluidas las normas para atribuir responsabilidad por infracción del derecho del autor a prestadores de servicios de intermediación en línea (PSSI<sup>90</sup>) por actos cometidos por sus usuarios.

#### A. Régimen jurídico, materia protegida por derechos de autor y formalidades

En Chile, el art. 19.25 de la Constitución reconoce y garantiza la propiedad intelectual e industrial como derechos fundamentales que se desprenden del derecho de propiedad.<sup>91</sup> La Ley N.º 17.336 sobre propiedad intelectual (Ley de Propiedad Intelectual),<sup>92</sup> modificada por la Ley N.º 21.045,<sup>93</sup> establece el marco jurídico de los derechos de autor y los derechos conexos en el país. La Ley N.º 20.243<sup>94</sup> y la Ley N.º 20.959<sup>95</sup> también reconocen algunos derechos morales y patrimoniales a los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales, y a los guionistas y directores de obras audiovisuales.

Con respecto al escenario internacional, Chile es parte contratante de los principales tratados sobre derecho de autor y derechos conexos (Convenio de Berna, el WCT,<sup>96</sup> Tratado de Marrakech, Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales,<sup>97</sup> WPPT, Convención de Roma y Acuerdo sobre los ADPIC<sup>98</sup>) y ha incluido en la Ley de Propiedad Intelectual el principio de trato nacional,<sup>99</sup> que garantiza que el

---

<sup>89</sup> Esta diferencia terminológica sirve para separar las situaciones en las que el titular del derecho está totalmente privado del derecho patrimonial (excepciones) de aquellas en las que carece de *ius prohibendi* pero aún puede percibir algún ingreso económico, normalmente en forma de derecho de mera remuneración (limitaciones).

<sup>90</sup> Se trata de empresas que prestan servicios de intermediación a los usuarios de Internet, como alojamiento o acceso a la red.

<sup>91</sup> Véase [https://www.constituteproject.org/constitution/Chile\\_2021?lang=es](https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2021?lang=es).

<sup>92</sup> Chile, Ley N.º 17.336 del 2 de octubre de 1970 sobre propiedad intelectual; véase <https://bcn.cl/299v0>.

<sup>93</sup> Chile, Ley N.º 21.045 del 3 de noviembre de 2017 crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; véase <https://bcn.cl/2jy6q>.

<sup>94</sup> Chile, Ley N.º 20.243 del 5 de febrero de 2008 sobre derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual; véase <https://bcn.cl/2w53b>.

<sup>95</sup> Chile, Ley N.º 20.959 del 29 de octubre de 2018 que extiende la aplicación de la Ley N.º 20.243; véase <https://bcn.cl/35vu2>.

<sup>96</sup> Chile, Decreto N.º 270 del 28 de noviembre de 2022 que promulga el WCT; véase <https://bcn.cl/2puzt>.

<sup>97</sup> Chile, Decreto 122 del 3 de febrero de 2022 que promulga el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales; véase <https://bcn.cl/3926h>.

<sup>98</sup> Chile se adhirió al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid) en 2022, pero no forma parte del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, el Tratado sobre el Derecho de Patentes ni del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.

<sup>99</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 2.

trato para los autores extranjeros no sea menos favorable que el que otorga a sus nacionales con respecto a la protección de derechos de autor y derechos conexos.<sup>100</sup>

La ley de PI establece que una obra está protegida por derechos de autor por el mero hecho de su creación.<sup>101</sup> No hay otros requisitos como la fijación, la novedad o el registro.

La ley incluye una lista abierta de obras.<sup>102</sup> Esto significa que las obras no mencionadas expresamente en la lista aún pueden recibir la protección por derecho de autor, a diferencia de los sistemas de listas cerradas presentes en los países de tradición anglosajona, donde la protección solo se concede a las obras expresamente mencionadas en la ley.<sup>103</sup>

Los legisladores chilenos han mencionado expresamente como obras protegidas los programas informáticos<sup>104</sup> y algunas obras usadas con frecuencia en la industria de la moda, como los diseños o modelos textiles.<sup>105</sup>

La ley contempla un sistema de registro voluntario para obras y otros materiales.<sup>106</sup> La cesión total o parcial de los derechos de autor o derechos conexos, por cualquier motivo, también puede registrarse.<sup>107</sup> El registro está a cargo del Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,<sup>108</sup> con el procedimiento detallado en el reglamento de la ley de propiedad intelectual.<sup>109</sup>

En Indonesia, la Ley N.º 28 de 2014 sobre derecho de autor (Ley sobre el Derecho de Autor) es la ley que regula los derechos de autor y los derechos conexos.<sup>110</sup> El país también ratificó el Convenio de Berna,<sup>111</sup> el WCT,<sup>112</sup> el Tratado de Marrakech, el WPPT,<sup>113</sup> el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales y el

---

<sup>100</sup> Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (enmendado el 28 de septiembre de 1979) (Traducción Oficial). *WIPO Lex*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Art. 5.1). <<https://www.wipo.int/wipolex/es/text/283694>>.

<sup>101</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 1.1).

<sup>102</sup> *Ibid.*, art. 3.

<sup>103</sup> Véase, por ejemplo, la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988 del Reino Unido, art. 1.

<sup>104</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 3.16).

<sup>105</sup> *Ibid.*, art. 3.18). La definición de programa informático se encuentra en el art. 5.t).

<sup>106</sup> *Ibid.*, arts. 72-76.

<sup>107</sup> *Ibid.*, art. 73.

<sup>108</sup> La inscripción se puede realizar de forma digital usando la plataforma del registro nacional; véase <https://www.propiedadintelectual.gob.cl/servicios>. Además, en la encuesta nacional se informó que los titulares de derechos chilenos usaban registros digitales en el sector musical gestionados de forma privada por organismos de gestión colectiva o por el Centro de Registros Nacionales Integrados de la IFPI.

<sup>109</sup> Aprobado por el Decreto N.º 277 del 28 de octubre de 2013 sobre el Reglamento de la Ley N.º 17.336 sobre propiedad intelectual; véase <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1055543>. Para el proceso de registro, véanse los artículos 7-23.

<sup>110</sup> Indonesia, Ley N.º 28 de 2014 sobre derecho de autor, art. 106 (Ley sobre el Derecho de Autor). La ley entró en vigor el 16 de octubre de 2014. Para la versión en inglés, véase <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/578071>.

<sup>111</sup> Indonesia, Decreto Presidencial N.º 18 de 1997, instrumento de adhesión de 5 de junio de 1997, entrada en vigor el 5 de septiembre de 1997.

<sup>112</sup> Indonesia, Decreto Presidencial N.º 19 de 1997.

<sup>113</sup> Indonesia, Decreto Presidencial N.º 74 de 2004.



Acuerdo sobre los ADPIC o se adhirió a ellos. Sin embargo, no forma parte de la Convención de Roma.

En cuanto al material protegido por los derechos de autor, según la ley que los rige, el término derechos de autor “significa un derecho exclusivo del autor que se adquiere automáticamente sobre la base del principio de declaración, una vez plasmadas las obras en una forma tangible sin reducirse en virtud de restricciones de conformidad con las disposiciones de las leyes y los reglamentos.” (Traducción oficiosa de la Oficina Internacional<sup>114</sup>).

La definición de obra incluye no solo las que son el resultado de la inspiración, la aptitud, el pensamiento o la imaginación, sino también las que surgen de la destreza, habilidad o experiencia. Por lo tanto, la originalidad no es un requisito *sine qua non* para la protección y, por consiguiente, las obras artesanales están protegidas.<sup>115</sup>

La lista de obras protegidas es cerrada<sup>116</sup> pero incluye expresamente muchas obras relacionadas directamente con el entorno digital, como bases de datos electrónicas,<sup>117</sup> programas informáticos<sup>118</sup> y videojuegos.<sup>119</sup> La ley también contempla la protección de las obras de artes aplicadas, como los diseños de moda.<sup>120</sup>

La Ley sobre el Derecho de Autor incluye diferentes disposiciones para el registro de obras y materia de derechos conexos, pero siguiendo el Convenio de Berna, este no es un requisito para obtener la protección del derecho de autor y conexos.<sup>121</sup>

La Dirección General de Propiedad Intelectual (DGIP) es la encargada del registro de derechos de autor, y la ley contempla (es decir, tiene en consideración) un proceso para invalidarlo.<sup>122</sup> Las licencias y los contratos de cesión de derechos de autor y derechos conexos se pueden registrar, pero para que produzcan efectos frente a terceros, dicho acto es obligatorio.<sup>123</sup> También existen normas para transferir a terceros de los derechos registrados cuando ya se han transferido los derechos de fondo.<sup>124</sup>

---

<sup>114</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 1.1.

<sup>115</sup> *Ibid.*, art. 42. Excluye expresamente de la protección algunas obras tales como leyes y reglamentaciones. El artículo 41 establece que la protección no cubre obras no incorporadas en forma tangible. También las ideas, procedimientos, sistemas, métodos, conceptos, principios, hallazgos o datos, incluso cuando se incorporan en una obra, y herramientas, objetos o productos creados únicamente para solucionar problemas técnicos o que solo atiendan a necesidades funcionales.

<sup>116</sup> *Ibid.*, art. 40.

<sup>117</sup> *Ibid.*, art. 40. (1).p.

<sup>118</sup> *Ibid.*, arts. 1.(3) y 40.(1).s.

<sup>119</sup> *Ibid.*, art. 40.(1).r.

<sup>120</sup> *Ibid.*, art. 40.(1).g.

<sup>121</sup> *Ibid.*, art. 64.

<sup>122</sup> *Ibid.*, arts. 74 y 75.

<sup>123</sup> *Ibid.*, art. 83.

<sup>124</sup> *Ibid.*, arts. 76 y 77.



En los Emiratos Árabes Unidos, el reciente Decreto-Ley Federal N.º 38 de 2021 sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos)<sup>125</sup> actualizó el régimen de derechos, que reemplaza la ley de 2002.<sup>126</sup>

En el ámbito internacional, los Emiratos Árabes Unidos también han ratificado los principales tratados internacionales o se han adherido a ellos<sup>127</sup> (Convenio de Berna, WCT, Tratado de Marrakech,<sup>128</sup> Convención de Roma, Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales,<sup>129</sup> y Acuerdo sobre los ADPIC) garantizando el respeto de los principios de territorialidad y trato nacional.

Considerado como un sistema de *droit d'auteur* o derecho codificado en virtud de las leyes de 1992 y 2002,<sup>130</sup> la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 2021 mantiene esta filiación tradicional. Por ejemplo, la ley concede derechos morales a los autores<sup>131</sup> que no pueden cederse ni renunciarse,<sup>132</sup> y la lista de obras es no exclusiva o abierta.

En la mencionada ley se ha optado implícitamente por la originalidad<sup>133</sup> como criterio distintivo para obtener protección,<sup>134</sup> y en la lista de obras protegidas se han incluido expresamente algunas obras digitales nativas como, “aplicaciones inteligentes, programas informáticos y aplicaciones, bases de datos y obras similares determinadas por una decisión del ministro”.<sup>135</sup> Los programas informáticos y las aplicaciones móviles

---

<sup>125</sup> Emiratos Árabes Unidos, Decreto-Ley Federal N.º 38 de 2021 sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos). Promulgado el 20 de septiembre de 2021, entró en vigor el 2 de enero de 2022. Para la versión en inglés, véase el sitio web del Ministerio de Economía en <https://www.moec.gov.ae/documents/20121/376326/copyright.pdf/1b4d5d16-8e3c-6012-afa8-56cd4eb008da?t=1645596129916>.

<sup>126</sup> “Constitución de los Emiratos Árabes Unidos” (modificada en 2011). *WIPO Lex*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El art. 121 establece que la federación tendrá competencia legislativa exclusiva en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual, técnica e industrial, derechos de autor de impresión y derechos de publicación. Para la versión en inglés, véase <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/568259>.

<sup>127</sup> Los Emiratos Árabes Unidos se adhirieron al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid) en 2021. En 2022, se adhirieron al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

<sup>128</sup> Emiratos Árabes Unidos, Decreto Federal N.º 233 de 2016 sobre la adhesión al Tratado de Marrakech.

<sup>129</sup> Emiratos Árabes Unidos, Decreto Federal N.º 20 de 2017 sobre la adhesión al Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

<sup>130</sup> Makeen, F.M. “The protection of musical works under the UAE Copyright Act.” *Journal of the Copyright Society of the USA*. Vol. 57, N.º 4 (2010): p. 748.

<sup>131</sup> Pareciera que los derechos morales solo pueden atribuirse a personas físicas, como sucede con otros derechos de la personalidad. Sin embargo, el artículo 5 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de los Emiratos Árabes Unidos en general se refiere a “autores”, y según las definiciones en el artículo 1, un autor puede ser una persona física o jurídica.

<sup>132</sup> Para reafirmar su pertenencia a los países de derecho codificado, el artículo 16 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de los Emiratos Árabes Unidos establece algunos derechos morales para los artistas intérpretes o ejecutantes.

<sup>133</sup> Para estar protegida, una obra debe ser una producción innovadora en los campos de la literatura, las artes o la ciencia, cualquiera sea su tipo, forma de expresión, significado o finalidad. Sin embargo, este mismo artículo 1 define la innovación como “el carácter innovador *que confiere originalidad y distinción a la obra*” [énfasis añadido].

<sup>134</sup> Eso significa que las “obras” realizadas solamente por habilidad y mano de obra no están protegidas. Véase Makeen, *op. cit.*, p. 751.

<sup>135</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 2.1.

(o aplicaciones usadas principalmente en teléfonos inteligentes o tabletas), por lo tanto, se reconocen en la ley como una nueva adición.

Las obras originales pueden registrarse en los Emiratos Árabes Unidos, pero no es un requisito previo para su protección,<sup>136</sup> ya que la ley establece expresamente que el no registro de la obra no supondrá la vulneración de ningún aspecto de la protección establecida en la ley.<sup>137</sup>

La Ley de los Emiratos Árabes Unidos también proporciona una solución en el caso de que se venda el original de la obra (manuscrito, escultura o cuadro). En este caso, salvo pacto en contrario, el comprador solo adquiere la propiedad física del original sin incluir los derechos patrimoniales.<sup>138</sup>

En Uruguay, la Constitución reconoce la protección de los derechos de autor y conexos y otros derechos de PI en el artículo 33.<sup>139</sup> La Ley N.º 9.739 sobre derechos de autor (Ley de Derechos de Autor), publicada originalmente en 1937 y actualizada sustancialmente en 2003,<sup>140</sup> establece el régimen general de los derechos de autor.<sup>141</sup>

A escala internacional, Uruguay es parte en el Convenio de Berna, el WCT, el Tratado de Marrakech, la Convención de Roma, el WPPT y el Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, no es parte en el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. En consonancia con este régimen internacional, la Ley de Derechos de Autor reconoce el principio del trato nacional.<sup>142</sup>

La definición de una obra en el Uruguay incluye toda creación literaria, científica o artística. El autor también tiene el derecho de propiedad sobre las “producciones de su pensamiento, ciencia o arte”<sup>143</sup> y la ley no exige expresamente la originalidad para que una obra reciba la protección por derecho de autor.

La Ley de Derechos de Autor contiene una lista no exhaustiva de obras que incluye algunas obras digitales nativas, como los programas informáticos y las bases de datos.<sup>144</sup> También incluye algunas obras utilizadas habitualmente en el mundo de la moda, como por ejemplo, los diseños o creaciones que tengan valor artístico en lo que se refiere al

---

<sup>136</sup> Convenio de Berna, *op. cit.*, art. 5.2).

<sup>137</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 4.2.

<sup>138</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 13.1.

<sup>139</sup> Anteriormente, los derechos de autor estaban protegidos por el Código Civil de Uruguay, de 1869. Véase Montaña, Bugallo B. “El autor y su protección constitucional en Uruguay: consideraciones generales.” *Revista Do Direito de Autor*. N.º 35 (2021): p. 74.

<sup>140</sup> Uruguay, Ley N.º 17.616 de 1 de octubre de 2003 sobre protección a la propiedad intelectual; véase <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17616-2003/1>. Además, la Ley N.º 19.149 de 24 de octubre de 2013 sobre rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. Ejercicio 2012; véase <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/363856>.

<sup>141</sup> Uruguay, Ley N.º 9.739 de 1937 sobre derechos de autor (Ley de Derechos de Autor); véase <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937>. La ley se publicó originalmente en 1937 y se encuentra disponible modificada por Ley N.º 19.857 de 23 de diciembre de 2019. Esta última, extendió a 70 años el plazo de protección de los derechos patrimoniales para los titulares de derechos de autor y derechos conexos; véase el artículo 1 en <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19857-2019/1>.

<sup>142</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, art. 4.

<sup>143</sup> *Ibid.*, art. 1.

<sup>144</sup> *Ibid.*, art. 5. Aclara que la lista incluye “toda producción del dominio de la inteligencia”.

diseño de la vestimenta, si no están protegidos por la legislación sobre propiedad industrial.

La protección de las obras y los derechos conexos en la Ley de Derechos de Autor no está subordinada a ninguna formalidad o registro,<sup>145</sup> aunque existe un registro voluntario de derechos de autor, incluido en el Reglamento de la Ley N.º 17.216.<sup>146</sup> Desde el punto de vista técnico, el funcionamiento del registro depende de la Biblioteca Nacional, mientras que el Consejo de Derechos de Autor (organismo regulador de los derechos de autor) gestiona los aspectos jurídicos del proceso.<sup>147</sup> Los contratos de cesión de derechos o las licencias que autorizan determinados usos también pueden ser registrados.<sup>148</sup>

#### B. Alcance de la protección: derechos patrimoniales

En muchas jurisdicciones de todo el mundo, los derechos de autor siguen la tradición del Convenio de Berna, que proporciona derechos morales y patrimoniales. Algunos derechos morales están garantizados por el Convenio,<sup>149</sup> y pertenecen solamente al autor como persona física.

En general, los derechos morales son inalienables, incluso cuando los derechos patrimoniales hayan sido cedidos a un tercero. En algunos casos, pueden ser ejercidos por los herederos u otras partes designadas incluso después de la muerte del autor. Varios países también reconocen algunos derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes.

Desde un punto de vista económico, el poder fundamental del titular de los derechos de autor consiste en autorizar o prohibir la explotación económica de su obra. Para articular jurídicamente este poder, los legisladores nacionales suelen afirmar que el autor tiene derecho de autorizar o prohibir determinados actos de explotación de su obra (derechos exclusivos). La cantidad exacta y la definición de los derechos patrimoniales del autor varían en las distintas legislaciones, pero en su mayor parte, están estandarizados por los principales convenios internacionales sobre derechos de autor.

La mayoría de los países reconocerá, por lo tanto, los derechos exclusivos de reproducción de la obra en cualquiera de sus formas: distribución del original o copias (incluido su alquiler y préstamo), comunicación al público de diversas maneras (interpretación o ejecución pública, radiodifusión o puesta a disposición en línea) y traducción a otros idiomas, adaptaciones u otras transformaciones.

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, art. 6.

<sup>146</sup> Uruguay, Decreto N.º 154/004 del 3 de mayo de 2004 que establece la Reglamentación de la Ley N.º 17.616 sobre derechos de autor y derechos conexos, arts. 2-11; véase <https://wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/uy/uy036es.pdf>.

<sup>147</sup> Véase <https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/consejo-derechos-autor-uruguay>.

<sup>148</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, art. 55; y Decreto N.º 154/004, *op. cit.*, art. 7.

<sup>149</sup> Convenio de Berna, *op. cit.*, art. 6 *bis*. Concede al autor el derecho de paternidad y el derecho de integridad.

La variedad de derechos exclusivos reconocidos en las legislaciones nacionales es más amplia para los derechos conexos, ya que el nivel de armonización internacional alcanzado a través de los tratados y los convenios es menor.

De los cuatro países seleccionados, algunos también incluyen en su legislación los llamados derechos de remuneración equitativa.<sup>150</sup> En este caso, no se trata de un derecho exclusivo. El usuario puede utilizar la obra u otro material protegido si paga al titular del derecho una remuneración pecuniaria fijada por la ley que, a menudo, gestiona de manera colectiva estos derechos.

En general, las legislaciones de los países seleccionados han adaptado las definiciones de los derechos patrimoniales para abarcar los avances tecnológicos de la era digital, en especial tras ajustar la legislación nacional para adherirse al WCT y al WPPT. Los derechos patrimoniales de los distintos titulares de derechos conexos también se han adaptado correctamente a la explotación digital de la materia en la legislación nacional. Sin embargo, hay diferencias entre los países.

En Chile, existe un derecho general a autorizar cualquier uso económico de la obra, que otorga al titular de los derechos de autor la potestad de ceder, total o parcialmente, sus derechos sobre la obra y a autorizar su uso por terceros.<sup>151</sup> La ley también define el *ius prohibendi* del titular de los derechos de autor y establece que nadie puede hacer uso público de una obra en el dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular de los derechos de autor.<sup>152</sup>

También incluye un variado conjunto de derechos patrimoniales exclusivos de los autores (por ejemplo, reproducción o distribución), y reconoce un derecho intransferible de remuneración equitativa a algunos autores de obras audiovisuales (directores y guionistas).<sup>153</sup>

La Ley de Propiedad Intelectual contempla una definición amplia del derecho de reproducción que abarca todas las copias digitales, incluidas copias temporales.<sup>154</sup> Esto podría interferir con la situación jurídica de las copias transitorias y auxiliares creadas al poner el contenido a disposición del público.

Por este motivo, los legisladores chilenos incluyeron una disposición específica para eximir de los derechos de reproducción los actos de reproducción transitorios y accesorios realizados durante las transmisiones por Internet, siempre que no tengan una relevancia económica independiente.<sup>155</sup> Se trata de un medio adecuado para tratar las

---

<sup>150</sup> Por ejemplo, los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonograma en algunos casos de comunicación al público de fonogramas, siguiendo el régimen del artículo 12 de la Convención de Roma.

<sup>151</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 17. El art. 18 define los diferentes derechos del titular de los derechos de autor, como el derecho a publicar o reproducir la obra, el derecho de adaptación o traducción, la interpretación o ejecución pública, etc.

<sup>152</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 19.1. El importe y el mecanismo de pago del derecho de remuneración equitativa para los siguientes ocho años se acordaron entre la Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos ATN y los principales organismos de radiodifusión del país en 2022; véase <http://www.atn.cl/anatel-firma-historico-acuerdo-con-directores-y-guionistas-de-atn/>.

<sup>153</sup> Chile, Ley N. ° 20.959, *op. cit.*, art. 1.

<sup>154</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 5.u)

<sup>155</sup> *Ibid.*, art. 71.o).

copias en pantalla y transitorias procedentes de la transmisión de obras realizadas en el marco de un acto de comunicación al público o puesta a disposición del público.

La ley ha adaptado el derecho de comunicación al público para que se adecúe con el artículo 8 del WCT, por lo tanto, incluye un derecho de puesta a disposición del público de forma tal que se pueda acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que se elija.<sup>156</sup>

También hay normas sobre los derechos patrimoniales para las obras digitales, como los programas informáticos, que en la práctica serán aplicables a los videojuegos y las aplicaciones móviles.<sup>157</sup>

Chile ha reconocido los derechos morales de los autores,<sup>158</sup> que son inalienables, y cuyo cualquier acuerdo en contrario será nulo. El ejercicio y la defensa de los derechos morales se transmiten tras el fallecimiento al cónyuge supérstite y a los sucesores *ab intestato* del autor (cuando una persona fallece sin testamento válido).

La legislación nacional reconoce derechos patrimoniales dispares para los artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales<sup>159</sup> y audiovisuales<sup>160</sup>, los productores de fonogramas<sup>161</sup> y los organismos de radiodifusión<sup>162</sup> y distingue entre derechos exclusivos y derechos de remuneración equitativa para algunos de estos titulares del derecho.<sup>163</sup> Asimismo se atribuye a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales diferentes derechos de remuneración equitativa en la ley por diferentes actos de comunicación al público, puesta a disposición o alquiler.<sup>164</sup> Finalmente, los artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales y audiovisuales también tienen algunos derechos morales.<sup>165</sup>

La Ley sobre el Derecho de Autor de Indonesia reconoce los derechos patrimoniales y morales de los autores,<sup>166</sup> entre ellos, el derecho general a obtener cualquier beneficio económico de la obra<sup>167</sup> y una variedad de derechos específicos, como la reproducción, la comunicación al público, la distribución, la adaptación, el arreglo o la transformación.<sup>168</sup>

La definición de los derechos de reproducción es muy amplia y, por tanto, puede abarcar todas las copias digitales de obras y material protegido.<sup>169</sup> La situación de los actos de

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, art. 5.v).

<sup>157</sup> *Ibid.*, art. 37bis sobre el derecho de alquiler de un programa informático.

<sup>158</sup> *Ibid.*, art. 1.2. El artículo 14 reconoce diversos derechos morales, entre ellos el derecho de paternidad, el derecho de integridad y el derecho a autorizar la divulgación de la obra.

<sup>159</sup> *Ibid.*, arts. 2 y 65-66.

<sup>160</sup> *Ibid.*, el art. 5.j) incluye en la definición a los artistas intérpretes o ejecutantes tanto de obras musicales como audiovisuales.

<sup>161</sup> *Ibid.*, arts. 67, 67bis y 68.

<sup>162</sup> *Ibid.*, art. 69.

<sup>163</sup> *Ibid.*, art. 65.

<sup>164</sup> Chile, Ley N.º 20.243, *op. cit.*, art. 3.

<sup>165</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 30. Véase, también, el artículo 2 de la Ley 20.223.

<sup>166</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 4.

<sup>167</sup> *Ibid.*, art. 8.

<sup>168</sup> *Ibid.*, arts. 9-15.

<sup>169</sup> *Ibid.*, art. 1.12.

reproducción accesorios y efímeros realizados en las redes digitales se trata específicamente en la Ley sobre el Derecho de Autor. Una excepción específica a los derechos de reproducción se establece para los actos temporales de la reproducción que se lleva cabo durante la transmisión digital o la copia de las obras digitales en un medio de almacenamiento.<sup>170</sup>

La definición del derecho de comunicación al público también incluye el derecho de puesta a disposición en Internet u otras redes digitales, donde el público tiene acceso a la obra o a la materia protegida desde el lugar y en el momento que elija.<sup>171</sup>

Los derechos morales sustanciales se atribuyen al autor.<sup>172</sup> Estos derechos son perpetuos y no pueden transferirse si el autor está vivo, pero su ejercicio es transferible a los sucesores siguiendo las normas generales del derecho de sucesiones.<sup>173</sup>

La ley reconoce distintos derechos patrimoniales exclusivos a los titulares de derechos conexos (artistas intérpretes o ejecutantes, productores fonográficos y organismos de radiodifusión).<sup>174</sup> Asimismo, se reconoce un derecho de remuneración equitativa a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales y a los productores fonográficos para la comunicación pública de fonogramas. La ley también atribuye algunos derechos morales a los artistas intérpretes o ejecutantes.<sup>175</sup>

El Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos ha reconocido los derechos patrimoniales y morales de los autores. La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 2021 estableció un derecho patrimonial general para que el autor autorice el uso de su obra de cualquier forma, complementado con ejemplos de derechos patrimoniales exclusivos (reproducción, radiodifusión, interpretación o ejecución pública, distribución, traducción, entre otros).<sup>176</sup>

Para el entorno digital, es de particular interés que el titular del derecho autorice las reproducciones electrónicas, incluida la descarga, o el almacenamiento electrónico permanente o temporal, independientemente del método o del dispositivo utilizado.

La ley también incluye una limitación que exime de la exigencia de obtener el consentimiento del titular de los derechos para la reproducción cuando esta se realiza como parte accesoria e integrante del proceso de transmisión de una obra entre partes a través de un medio o una red (por ejemplo, Internet), o como parte de un proceso que implica permitir el acceso a una copia legal de una obra almacenada digitalmente (por ejemplo, acceder a contenidos descargados en una computadora, un teléfono inteligente o una tableta).<sup>177</sup>

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, art. 49.

<sup>171</sup> *Ibid.*, art. 1.16.

<sup>172</sup> *Ibid.*, art. 5.1.

<sup>173</sup> *Ibid.*, art. 5.2.

<sup>174</sup> *Ibid.*, arts. 20 y 23-25.

<sup>175</sup> *Ibid.*, arts. 21 y 22. Estos derechos morales no pueden eliminarse ni suprimirse por ningún motivo, aunque se hayan transferido los derechos patrimoniales.

<sup>176</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 7.

<sup>177</sup> *Ibid.*, art. 22. 9. En el artículo 20.11, también se contempla la reproducción que tiene lugar en el contexto de las etapas que son accesorias e inevitables para llevar a cabo una acción lícita y de una manera

En la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos se incluye específicamente un derecho para poner a disposición obras y otra materia protegida por derechos conexos a través de computadoras, redes de datos o comunicación, o por cualquier otro medio.<sup>178</sup>

El Poder Legislativo de los Emiratos Árabes Unidos también ha reconocido diferentes derechos morales a los autores, entre ellos el derecho de paternidad (derecho a ser debidamente identificado como autor o artista intérprete o ejecutante de una obra), el derecho de integridad y el derecho de divulgación (derecho a decidir si la obra se divulga por primera vez y cómo). Los derechos morales son perpetuos y no prescriben ni pueden cederse.<sup>179</sup>

En cuanto a los derechos conexos, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos otorga varios derechos patrimoniales a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales y audiovisuales,<sup>180</sup> a los productores de fonogramas<sup>181</sup> y a los organismos de radiodifusión.<sup>182</sup> Los artistas intérpretes o ejecutantes también tienen diferentes derechos morales reconocidos por la ley.<sup>183</sup>

En Uruguay, la Ley de Derechos de Autor contempla, aunque de manera poco sistemática, una forma de conceder a los autores diferentes derechos patrimoniales.<sup>184</sup> También incluye un régimen de *domaine public payant* (dominio público de pago) para las obras que ya han entrado en el dominio público en el que se cobra una tasa por el uso de estas obras.<sup>185</sup>

Cuando se definen los derechos patrimoniales de los autores y titulares de derechos conexos, la ley contempla los principales usos digitales de la obra. La definición del derecho de reproducción de obras es amplia e incluye el almacenamiento electrónico, ya sea permanente o temporal.<sup>186</sup> Sin embargo, la legislación nacional carece de una disposición que trate adecuadamente los actos transitorios y accesorios de reproducción realizados durante el acto de puesta a disposición de la obra en las redes de comunicación. En algunos casos de explotación digital de las obras, esto puede causar inseguridad jurídica.

No obstante, la definición del derecho de comunicación al público se adapta al WCT, ya que incluye el derecho de puesta a disposición de obras de forma tal que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.<sup>187</sup>

---

que garantice que la copia se borre automáticamente sin que pueda recuperarse para fines distintos de los mencionados en los apartados 9 y 10.

<sup>178</sup> *Ibid.*, art. 7. Véase el artículo 1 para obtener la definición de comunicación al público.

<sup>179</sup> *Ibid.*, art. 5.

<sup>180</sup> *Ibid.*, art. 17.

<sup>181</sup> *Ibid.*, art. 18.

<sup>182</sup> *Ibid.*, art. 19.

<sup>183</sup> *Ibid.*, art. 16.

<sup>184</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, arts. 1. 1 y 2.

<sup>185</sup> *Ibid.*, art. 42.

<sup>186</sup> *Ibid.*, art. 2. 2.

<sup>187</sup> *Ibid.*, art. 2.

La ley también reconoce un derecho de remuneración equitativa a los compositores musicales, directores y guionistas en el caso de la comunicación al público de la obra audiovisual.<sup>188</sup>

La Ley de Derechos de Autor otorga una amplia variedad de derechos morales a los autores, los cuales no se pueden transferir.<sup>189</sup>

En lo que atañe a los derechos conexos, la Ley de Derechos de Autor contempla diferentes derechos exclusivos<sup>190</sup> para los artistas intérpretes o ejecutantes musicales<sup>191</sup>, los productores de fonogramas<sup>192</sup> y los organismos de radiodifusión,<sup>193</sup> incluidas algunas formas específicas de derechos de distribución, como el alquiler. La definición del derecho exclusivo de los artistas intérpretes o ejecutantes musicales y los productores de fonogramas que autoriza la comunicación al público se adapta al WPPT,<sup>194</sup> por lo que incluye el derecho de puesta a disposición en Internet.

Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas también tienen derecho a una remuneración equitativa por comunicar fonogramas al público.<sup>195</sup> Asimismo, la ley contempla un derecho moral de integridad para los artistas intérpretes o ejecutantes musicales.<sup>196</sup>

Por último, la Ley de Derechos de Autor del Uruguay no atribuye derechos exclusivos a los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales, aunque sí establece un derecho de remuneración equitativa para los artistas intérpretes o ejecutantes de obras literarias cuando su interpretación o ejecución se transmita o retransmita por televisión, o se grabe o fije en un disco, película, cinta, hilo o cualquier otro medio o material apto para la reproducción sonora o visual.<sup>197</sup>

### C. Excepciones y limitaciones a los derechos de autor y los derechos conexos

El WCT no contiene una lista de excepciones y limitaciones para actualizar el Convenio de Berna a la era digital. En su lugar, se limita a incluir la denominada regla de los tres pasos,<sup>198</sup> en virtud de la cual la asamblea legislativa nacional puede establecer

---

<sup>188</sup> *Ibid.*, art. 29. 4. Estos derechos son intransferibles.

<sup>189</sup> *Ibid.*, arts. 11, 12 y 13.

<sup>190</sup> *Ibid.*, arts. 7. D), 18 y 39. D).

<sup>191</sup> *Ibid.*, art. 39. A).

<sup>192</sup> *Ibid.*, art. 39. B).

<sup>193</sup> *Ibid.*, art. 39. C).

<sup>194</sup> Sobre el productor de fonogramas, véase el art. 27 de la reglamentación de la Ley N.º 17.616. La reglamentación menciona la descarga de archivos musicales de forma que el público pueda acceder a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno elija, pero el derecho de comunicación al público abarca la carga de dichos archivos para ponerlos a disposición del público. La descarga estará sujeta a los derechos de reproducción.

<sup>195</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, art. 39. D).

<sup>196</sup> *Ibid.*, arts. 37 y 38.

<sup>197</sup> *Ibid.*, art. 36. Los OGC que gestionan los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales en el Uruguay afirman que el artículo 36 implica un mero derecho de remuneración para los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales. En la práctica, los propietarios de cines y entidades de radiodifusión tales como la radio y la televisión se niegan a pagar la remuneración equitativa que imponen los tribunales. Véase <https://sugai.org.uy/institucional/>.

<sup>198</sup> El Convenio de Berna, en su artículo 9. 2), establece: “Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal



limitaciones o excepciones a los derechos concedidos a los autores en determinados casos que no atenten contra una explotación normal de la obra y no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.<sup>199</sup> Pueden encontrarse disposiciones similares en el WPPT,<sup>200</sup> el Convenio de Berna (aunque allí solo se incluyen disposiciones respecto de las excepciones a los derechos de reproducción),<sup>201</sup> y el Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>202</sup>

Los legisladores de los cuatro países seleccionados han incluido en sus leyes un variado conjunto de excepciones y limitaciones a los derechos de autor y derechos conexos que, en términos generales, no han tenido en cuenta los nuevos usos digitales de las obras y la materia protegida.

En Chile, con la Ley N.º 20.435, se introdujo en la Ley de Propiedad Intelectual una amplia variedad de excepciones y limitaciones. Como en la mayoría de los países con *droit d'auteur*, solo se permiten excepciones de uso en determinadas circunstancias definidas previamente por la ley.<sup>203</sup> Por lo tanto, el país no reconoce una cláusula abierta de usos amparados por las doctrinas de uso legítimo o uso leal.<sup>204</sup> Las excepciones y limitaciones se aplican tanto a los derechos de autor como a los derechos conexos.<sup>205</sup>

En todos los casos, en la ley se han establecido puramente casos de libre utilización (es decir, utilización sin compensación económica para el titular) y no una limitación seguida de licencia obligatoria o involuntaria (es decir, un uso autorizado por la ley acompañado de un derecho de remuneración equitativa para el autor o titular(es) de derechos conexos).

Los usos digitales no se han incluido expresamente en la lista nacional de excepciones y limitaciones, salvo para el caso de las bibliotecas o archivos que no tengan fines lucrativos, los cuales pueden ofrecer la reproducción electrónica gratuita de obras de su colección y permitir la consulta simultánea a una cantidad razonable de usuarios en las redes informáticas de la institución siempre que no puedan realizar copias

---

que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.

<sup>199</sup> OMPI. “Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)”. *wipo.int*. 1996. <<https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/>>. Véase el artículo 10.1) sobre los derechos contemplados en el Tratado, y el artículo 10.2) sobre los derechos del Convenio de Berna.

<sup>200</sup> OMPI. “Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)”. *wipo.int*. 1996, art. 16.2). <<https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/>>.

<sup>201</sup> Convenio de Berna, *op. cit.*, art. 9. (2).

<sup>202</sup> “Organización Mundial del Comercio (OMC): Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994)”. *WIPO Lex*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Art. 13. <<https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/231>>.

<sup>203</sup> Algunos expertos indican que el artículo 71. Q. de la Ley de Propiedad Intelectual podría ser una excepción abierta, cercana a una cláusula de uso legítimo; véase Araya Paz, C. “Hacia una excepción abierta a los derechos de autor en Chile: Una propuesta normativa a la luz de los usos justos”. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*. Vol. 6, N.º 1 (2017): p. 49. Sin embargo, la terminología específica del artículo 71. Q. no apunta en esta dirección, sino que se trata más bien de un uso libre tradicional en determinadas condiciones establecidas por la ley.

<sup>204</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, arts. 71. A–71. S.

<sup>205</sup> *Ibid.*, art. 71. A.

electrónicas.<sup>206</sup> También existen limitaciones específicas para los programas informáticos.<sup>207</sup>

En Indonesia, la legislación de derecho de autor incluye una combinación diversa de excepciones y limitaciones a los derechos patrimoniales.<sup>208</sup> Asimismo, prevé limitaciones referidas específicamente a obras digitales tales como programas informáticos.<sup>209</sup>

Aunque la de Indonesia no puede considerarse una jurisdicción de puro *droit d'auteur*,<sup>210</sup> la Ley sobre el Derecho de Autor sigue la tradición continental conforme a la cual se incluyen actos específicos que están exentos de la autorización del titular de los derechos de autor o los derechos conexos, en lugar de una cláusula general de uso legítimo o uso leal.<sup>211</sup>

La mayoría de las excepciones y limitaciones contempladas en la ley son casos de libre utilización, pero existe una licencia obligatoria que autoriza al gobierno a realizar actos de publicación, distribución o comunicación de las obras a través de la radio, la televisión u otros medios (incluida la puesta en línea) para el interés nacional, con una remuneración equitativa para el titular de los derechos de autor.<sup>212</sup>

En la Ley sobre el Derecho de Autor también se contempla un régimen de licencia obligatoria para llevar a cabo la traducción o la reproducción de obras científicas y literarias con fines educativos o científicos y actividades de investigación y desarrollo.<sup>213</sup> Se contempla una remuneración razonable para el autor en la mayoría de los casos, salvo para la traducción obligatoria realizada por el titular de los derechos de autor o los actos de reproducción ordenados por el ministro.<sup>214</sup>

En la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de los Emiratos Árabes Unidos, se contemplan una serie de excepciones y limitaciones a los derechos patrimoniales<sup>215</sup> de los autores y los titulares de derechos conexos.<sup>216</sup> La regla de los tres pasos se incorpora como norma de interpretación para las autoridades judiciales o administrativas nacionales, y se indica expresamente que las excepciones solo pueden aplicarse a las obras publicadas o divulgadas.<sup>217</sup>

---

<sup>206</sup> *Ibid.*, art. 71. K.

<sup>207</sup> *Ibid.*, art. 71. Ñ.

<sup>208</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, arts. 43–51.

<sup>209</sup> *Ibid.*, art. 45.

<sup>210</sup> La tradicional influencia neerlandesa sigue siendo evidente, pero se han incorporado elementos de la tradición anglosajona y sus propias peculiaridades endógenas; véase Antons, C. “Copyright in Indonesia: From a Hybrid to an endogenous system?” En *Copyright, Property and the Social Contract*, J. Gilchrist y B. Fitzgerald, editors (Springer, 2018).

<sup>211</sup> Aparte de las disposiciones de la ley, también existe el Reglamento gubernamental N.º 27 de 2019 sobre la facilitación del acceso a las obras para personas con dificultades para leer y usuarios de braille, audiolibros y otros medios; véase (en indonesio) <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/578072>.

<sup>212</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 51. (1).

<sup>213</sup> *Ibid.*, arts. 84–86.

<sup>214</sup> *Ibid.*, arts. 86.(1)(a) y 86.(5).

<sup>215</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, arts. 22–25.

<sup>216</sup> *Ibid.*, art. 25. Se establece que las restricciones aplicables a los derechos patrimoniales del autor se extenderán también a los titulares de derechos conexos.

<sup>217</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 22.

En casi todos los casos, la ley contempla la libre utilización, sin remuneración para los titulares de los derechos, aunque existe una licencia obligatoria para actos de reproducción y traducción con fines educativos o cuando lo requieran bibliotecas y archivos públicos, tal como estipula el reglamento de ejecución de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.<sup>218</sup> Estos actos solo pueden realizarse en determinadas condiciones, que incluyen una compensación justa para el autor.<sup>219</sup> Se debe garantizar que la reproducción o la traducción no causen ningún perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o de su sucesor, ni al uso normal de la obra.

Con respecto a las limitaciones para las obras digitales, se han hecho algunas adaptaciones a la ley, como la prohibición de hacer copias para uso privado de programas informáticos, aplicaciones móviles y bases de datos electrónicas, o la posibilidad de hacer una copia de seguridad de esas obras.<sup>220</sup>

Uruguay no ha adaptado su régimen de excepciones y limitaciones a los derechos patrimoniales de los autores al entorno digital, a pesar de que la redacción de esta parte de la ley fue parcialmente modificada por la Ley N.º 19.149 del 2013. Por este motivo, en la Ley de Derechos de Autor solo se contemplan unas pocas exenciones, casos en los que no se requiere el permiso de los autores y titulares de derechos conexos,<sup>221</sup> pero no se incluyen los usos digitales o las limitaciones específicas para obras digitales, como programas informáticos o bases de datos.

#### D. Titularidad y cesión de derechos

Los cuatro países seleccionados tienen normas para asignar la titularidad del derecho de autor inicial o presunciones de cesión de derechos para determinadas obras. Algunas son de especial interés para este estudio, como las obras audiovisuales o los programas informáticos creados para los empleados en el desempeño de su trabajo. Esta norma puede aplicarse, a menudo, a los videojuegos y otros juegos electrónicos y aplicaciones móviles.

En Chile, la ley de PI establece que los derechos de autor sobre obras cinematográficas corresponden a su productor,<sup>222</sup> la persona natural o jurídica es la que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de producir la obra.<sup>223</sup> El contrato entre el/los autor(es) de la

---

<sup>218</sup> Emiratos Árabes Unidos, Decisión del Gabinete N.º 47/2022 sobre el Reglamento de Ejecución del Decreto Ley Federal N.º 38/2021 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos; véase [https://www.lexismiddleeast.com/law/UnitedArabEmirates/CabinetDecision\\_47\\_2022](https://www.lexismiddleeast.com/law/UnitedArabEmirates/CabinetDecision_47_2022); art. 21.

<sup>219</sup> Por ejemplo, en el caso de las traducciones, solo pueden hacerse tres años después de la publicación de dicha obra.

<sup>220</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, arts. 22.1-c y 22.2.

<sup>221</sup> Véanse en el artículo 44.B)1.º) los casos de interpretaciones o ejecuciones de la obra en círculos domésticos o la interpretación o ejecución pública, en determinadas condiciones, en instituciones de enseñanza, públicas o privadas, y en lugares destinados a ceremonias religiosas siempre que no tengan finalidad lucrativa. Véase el artículo 45 para conocer otras excepciones y limitaciones previstas por la ley.

<sup>222</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 25. El artículo 26 define al productor como la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de realizar la obra.

<sup>223</sup> *Ibid.*, art. 26.

obra cinematográfica y el productor implicará la cesión de todos los derechos sobre la obra en beneficio del productor.<sup>224</sup>

En Chile no existe una norma general para las obras por contrato con cesión de derechos; en principio, dichas obras pertenecen a sus creadores, incluso si estos son empleados que producen la obra en cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Sin embargo, en el caso de los programas informáticos, se presume que los derechos de autor sobre la obra pertenecen a la persona natural o jurídica cuyos empleados (en el ejercicio de sus funciones) la hayan creado, salvo que se estipule lo contrario por escrito.<sup>225</sup> También existe una norma para los programas informáticos producidos por encargo de un tercero. En ese caso, la ley establece que los derechos de autor se transfieren al tercero, salvo que se estipule lo contrario por escrito.<sup>226</sup>

También existen normas específicas que establecen presunciones de cesión de derechos de obras creadas por empleados y trabajadores autónomos en una empresa periodística,<sup>227</sup> y para los fotógrafos en el caso de obras por encargo.<sup>228</sup>

En Indonesia no existe ninguna disposición particular en la Ley sobre el Derecho de Autor para establecer la titularidad de los derechos de autor de las obras cinematográficas y otras obras audiovisuales, pero si una persona jurídica explota una obra sin citar a ninguna persona como autor, quien será considerado autor es la persona jurídica, salvo prueba en contrario.<sup>229</sup>

La Ley sobre el Derecho de Autor establece normas para la atribución de derechos en el caso de que los empleados creen contenidos originales durante la jornada laboral. Salvo estipulación en contrario, el autor y titular de los derechos de autor sobre las obras producidas es la parte que las produce.<sup>230</sup> Por lo tanto, para que el empleador adquiera el derecho del empleado, es necesaria una disposición en el contrato laboral.<sup>231</sup> La misma norma rige para las obras encargadas por contratistas independientes. Sin embargo, si una persona concibe la obra y la otra solo se limita a ejecutarla bajo su dirección y supervisión, los derechos de autor corresponden a quien la concibió.<sup>232</sup>

En los Emiratos Árabes Unidos, con arreglo a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el productor no se considera autor ni titular original de los derechos de autor.<sup>233</sup> Sin embargo, salvo estipulación en contrario, se presume que el productor es representante del/los autor(es) en el uso de dicha obra, durante todo el período de utilización pactado en el contrato de producción. La ley también establece que el

---

<sup>224</sup> *Ibid.*, art. 29.

<sup>225</sup> *Ibid.*, art. 8.2.

<sup>226</sup> *Ibid.*, art. 8.3.

<sup>227</sup> *Ibid.*, arts. 24.1 y 24.2.

<sup>228</sup> *Ibid.*, art. 34.

<sup>229</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 37.

<sup>230</sup> *Ibid.*, art. 36.

<sup>231</sup> *Ibid.*, arts. 35.(1) y 35.(2). Si el autor es funcionario de un organismo público, los derechos de autor pertenecen al organismo, pero existe un derecho de remuneración a favor del autor si la obra se utiliza comercialmente.

<sup>232</sup> *Ibid.*, art. 34.

<sup>233</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 29.1, establece una lista de coautores de las obras audiovisuales.

productor será considerado editor de la obra audiovisual y gozará de los derechos patrimoniales del editor dentro de los fines de la explotación económica.<sup>234</sup>

Además, la ley contempla una presunción de cesión de los derechos patrimoniales exclusivos del artista intérprete o ejecutante de obras audiovisuales al productor de obras audiovisuales cuando el primero acepta la fijación audiovisual de su interpretación o ejecución, salvo que el artista intérprete o ejecutante y el productor pacten lo contrario por escrito.<sup>235</sup>

Asimismo, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece que si el autor creó la obra en beneficio de otra persona, los derechos de autor pertenecen a la persona en cuyo favor se realizó.<sup>236</sup> Del mismo modo, si durante su jornada laboral, un empleado o trabajador crea una obra relacionada con las actividades de su trabajo a pedido del empleador, o utilizando los medios del empleador, los derechos de autor corresponderán al empleador.<sup>237</sup>

En Uruguay, la Ley de Derechos de Autor no considera al productor de la obra audiovisual como titular original de los derechos de autor.<sup>238</sup> Salvo pacto en contrario, se presume que el autor o los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales exclusivos al productor.<sup>239</sup> Asimismo, el productor goza del derecho a modificar o alterar la obra audiovisual y a decidir sobre su divulgación.

La ley prevé una norma especial de propiedad cuando un empleado crea un programa informático, ya sea público o privado. En este caso, se presume que el autor ha autorizado al empleador, en forma ilimitada y exclusiva, el ejercicio de los derechos patrimoniales y derechos morales, salvo pacto en contrario.<sup>240</sup> La misma presunción se aplica a los autores autónomos que crean un programa informático para un tercero, nuevamente, salvo pacto en contrario.<sup>241</sup>

Además, la ley estipula diferentes presunciones de titularidad del derecho de autor para casos específicos, como los empleados de publicaciones periódicas, revistas y otros medios de comunicación social.<sup>242</sup> Sin embargo, no existe una norma general sobre las obras por contrato con cesión de derechos, no incluidas en dicho listado, y estas situaciones deben tratarse caso por caso mediante acuerdos contractuales.

La titularidad y la cesión de los derechos de autor y derechos conexos están íntimamente relacionadas, dado que en la mayoría de los casos el autor o el artista intérprete o

---

<sup>234</sup> *Ibid.*, art. 29.5.

<sup>235</sup> *Ibid.*, art. 29.6.

<sup>236</sup> *Ibid.*, art. 28.1.

<sup>237</sup> *Ibid.*, art. 28.3.

<sup>238</sup> Uruguay: la Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, art. 29.2, establece una lista de coautores.

<sup>239</sup> *Ibid.*, art. 29.3.

<sup>240</sup> *Ibid.*, art. 29.

<sup>241</sup> *Ibid.*, art. 29.9. Los derechos de los autores en virtud de contrato laboral se presumirán cedidos al empleador. Esto incluye también la autorización para decidir sobre su divulgación y para ejercer los derechos morales. Sin embargo, los autores autónomos solo ceden el derecho para publicar la obra, salvo pacto en contrario.

<sup>242</sup> *Ibid.*, art. 22.2.

ejecutante ceden sus derechos patrimoniales o concede una licencia a un tercero más capacitado para explotarlos profesionalmente en el mercado.

En Chile, la Ley de Propiedad Intelectual establece, de forma poco sistemática, una serie de normas sobre la cesión y licencia a terceros de los derechos de autor y los derechos conexos. Los derechos de autor pueden cederse o venderse por completo (transferirse en su totalidad) a un tercero, siempre que la transferencia se efectúe por instrumento público o privado autorizado ante notario.<sup>243</sup>

Los legisladores chilenos también han regulado dos contratos típicos utilizados por los autores para ceder sus derechos; el contrato de edición<sup>244</sup> y el contrato de representación para la interpretación o ejecución pública de una obra.<sup>245</sup> Las normas pueden aplicarse de forma análoga a otros contratos de cesión de derechos de autor.

La ley de PI pretendió establecer una norma para garantizar una compensación adecuada a los titulares de derechos, señalando que la remuneración pactada en ningún caso será inferior al porcentaje indicado en la reglamentación de la ley.<sup>246</sup> En la práctica, sin embargo, la reglamentación de la Ley N° 17.336 no introdujo una regla general de remuneración proporcional.<sup>247</sup> En su lugar, repitió las reglas específicas ya establecidas para el contrato de edición,<sup>248</sup> para la interpretación o ejecución pública de una obra en los casos de interpretaciones o ejecuciones en directo<sup>249</sup> y para la radiodifusión de una obra.<sup>250</sup>

En cuanto a las normas que regulan la concesión de licencias a los usuarios finales, la autorización para utilizar las obras u otra materia se define como una licencia concedida por el titular de los derechos de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra en alguno de los modos y por alguno de los medios previstos por la ley.<sup>251</sup> También contiene normas sobre el contenido mínimo de dicha licencia.<sup>252</sup> Una licencia será no exclusiva por defecto, salvo pacto en contrario.<sup>253</sup>

---

<sup>243</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 73.

<sup>244</sup> *Ibid.*, arts. 48-55.

<sup>245</sup> *Ibid.*, arts. 56-64.

<sup>246</sup> *Ibid.*, art. 20.

<sup>247</sup> Véase el art. 2 de la Reglamentación.

<sup>248</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, arts. 50 y 53. Si la remuneración se ha fijado mediante prorrateo, deberá ser como mínimo del 10% del precio de venta de cada ejemplar.

<sup>249</sup> *Ibid.*, art. 61. Si las regalías no se han fijado contractualmente en un porcentaje superior, deben ascender a un total del 10% del valor total de los ingresos por cada representación, y al 15% por el estreno.

<sup>250</sup> *Ibid.*, art. 62. El autor tendrá derecho a percibir un mínimo del 5% de la cantidad cobrada por la emisora por la publicidad emitida durante el programa o, si no la hubiere, el 10% de lo que perciba el promotor como remuneración por radiodifundir la representación.

<sup>251</sup> *Ibid.*, art. 20.1.

<sup>252</sup> *Ibid.*, art. 20.2. La autorización deberá precisar los derechos concedidos a la persona autorizada, señalando el plazo de duración, la remuneración y su forma de pago, el número mínimo o máximo de espectáculos o ejemplares autorizados o, si son ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga.

<sup>253</sup> *Ibid.*, art. 22.

La legislación de Indonesia tiene una cantidad limitada de normas para la transferencia de derechos patrimoniales del autor a terceros.<sup>254</sup> En principio, la transferencia debe realizarse por escrito, con o sin instrumento notarial.<sup>255</sup>

Los derechos de autor no pueden concederse bajo licencia o cederse en bloque, eliminando o asumiendo todos los derechos de los autores sobre sus obras,<sup>256</sup> ya que la ley limita a un máximo de 25 años los acuerdos de venta en su totalidad o las cesiones sin límite temporal. Las normas destinadas a transferir el derecho de autor también son aplicables, *mutatis mutandis* (con las modificaciones necesarias), a la transferencia de derechos patrimoniales sobre material protegido.<sup>257</sup>

También existen normas específicas en la Ley sobre el Derecho de Autor de Indonesia para conceder licencias de contenidos a los usuarios finales.<sup>258</sup> Estas deben plasmarse en acuerdos por escrito y prever una duración limitada. Además, deben contemplar las regalías acordadas en la licencia, que a su vez, deben establecerse sobre la base de las mejores prácticas vigentes y ser conformes al principio de equidad.<sup>259</sup>

La legislación emiratí tiene normas específicas para la transferencia de los derechos patrimoniales del autor,<sup>260</sup> incluidas algunas que protegen al autor como la parte más débil en el contrato. En primer lugar, la transferencia solo es válida si se efectúa por escrito y se especifican los derechos transferidos, el objeto de la transferencia, la duración y el lugar de utilización.<sup>261</sup> El autor seguirá gozando de los derechos que no hayan sido cedidos de forma expresa,<sup>262</sup> y toda transferencia de la totalidad de las obras futuras se considerará nula.<sup>263</sup> No obstante, existe la posibilidad de estipular contratos respecto de un máximo de 10 obras futuras.<sup>264</sup>

La remuneración puede acordarse en función de una suma fija, pero el autor o sus sucesores pueden solicitar una revisión judicial si el acuerdo parece injusto o se convierte en injusto debido a circunstancias posteriores a su celebración (por ejemplo, la obra ha tenido un gran éxito comercial<sup>265</sup>).

Sin embargo, los contratos más habituales que atañen a los autores no están regulados. En algunos casos, la ley declara expresamente que las normas contractuales también son aplicables a la transferencia de derechos conexos; por ejemplo, para establecer la revisión judicial de los contratos no equitativos.<sup>266</sup>

Con respecto a las licencias, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece que el autor, o su derechohabiente, está facultado para conceder una licencia de uso de

---

<sup>254</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, arts. 16-19.

<sup>255</sup> *Ibid.*, art. 16, y la explicación anexa.

<sup>256</sup> *Ibid.*, art. 82.(3).

<sup>257</sup> *Ibid.*, art. 29.

<sup>258</sup> *Ibid.*, arts. 80 y 81.

<sup>259</sup> *Ibid.*, arts. 80.(4) y 80.(5).

<sup>260</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, arts. 9-12 y 15.

<sup>261</sup> *Ibid.*, art. 9.(1).

<sup>262</sup> *Ibid.*, art. 9.(2).

<sup>263</sup> *Ibid.*, art. 15.(1).

<sup>264</sup> *Ibid.*, art. 15.(2) y art. 18 del Reglamento de ejecución.

<sup>265</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 11.

<sup>266</sup> *Ibid.*, art. 11.

la obra en cualquier forma, incluida su reproducción digital o su puesta a disposición del público en redes de comunicación.<sup>267</sup>

La Ley de Derechos de Autor de Uruguay regula la cesión de derechos de forma poco sistemática. Establece el principio general de que los derechos patrimoniales son transmisibles, siempre que la cesión se efectúe por escrito y, en cuanto a los derechos del autor, la regla principal es que el adquirente de la obra “a cualquier título” sustituye al autor en todas sus obligaciones y derechos, salvo aquellos que, por su naturaleza, sean personales como los derechos morales.<sup>268</sup>

También existe una norma inusual que establece que el derecho a la explotación económica por parte del adquirente le pertenecerá durante los 15 años siguientes a la muerte del autor, y se transmitirá, una vez transcurrido dicho plazo, a los herederos del autor que tienen el usufructo (derecho de usar y gozar de los frutos o beneficios de una cosa, cuya propiedad pertenece a otro) hasta que finalice el plazo de protección de la obra.<sup>269</sup> En consecuencia, los derechos de un autor no pueden venderse indefinidamente, pero el resultado económico es muy similar.

La ley también añade normas específicas para algunos contratos,<sup>270</sup> pero no tiene un régimen general para los contratos que transfieren los derechos patrimoniales de los autores y los titulares de derechos conexos.

### **3. Panorama de la gestión colectiva de derechos**

La eficacia de la protección de la PI en los países seleccionados no depende únicamente de la ley. Otro elemento clave del funcionamiento práctico de los derechos de PI, especialmente en el mercado digital, es el funcionamiento normal de los OGC y otras entidades de gestión de derechos.

El ecosistema de los organismos de gestión colectiva depende en gran medida de la tradición jurídica y también de las características económicas y sociales de un país. Por lo tanto, el ámbito varía significativamente entre los cuatro países.

En Chile, todo OGC debe estar autorizado para poder intervenir por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.<sup>271</sup> En determinados casos, esa autorización puede ser revocada.<sup>272</sup> Los OGC también deben adoptar la forma de una empresa privada sin ánimo de lucro que se ocupe exclusivamente de la gestión y defensa de los derechos de autor y los derechos conexos, lo que impide que una empresa comercial sea reconocida como OGC.<sup>273</sup>

La ley incluye varias normas de gestión y transparencia que regulan, por ejemplo, las votaciones y las reglas de reparto de los ingresos recaudados, que deben ser

---

<sup>267</sup> *Ibid.*, art. 7.

<sup>268</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, arts. 9-13 y 19. Véase también el art. 31.

<sup>269</sup> *Ibid.*, art. 33.

<sup>270</sup> *Ibid.*, art. 32.

<sup>271</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, arts. 91 y 94.

<sup>272</sup> *Ibid.*, art. 96.

<sup>273</sup> *Ibid.*, art. 92.



proporcionales e incluir el porcentaje destinado a gastos de administración<sup>274</sup> (no puede superar el 30%<sup>275</sup>). Los OGC deben elaborar balances generales anuales, así como un informe de las actividades del ejercicio anterior. Ambos documentos deben presentarse a los auditores externos para su aprobación.<sup>276</sup>

Los OGC deben aceptar la administración de los derechos de autor y derechos conexos que les hayan sido confiados de acuerdo con sus objetivos o fines,<sup>277</sup> y también están obligados a firmar contratos para la concesión de autorizaciones no exclusivas conforme a los aranceles generales.<sup>278</sup>

Los OGC chilenos pueden representar legalmente a sus miembros y clientes nacionales e internacionales en cualquier actuación administrativa o judicial con solo presentar copias autorizadas del documento público que contiene sus estatutos y la decisión que aprueba su funcionamiento.<sup>279</sup> De este modo, se evita tener que presentar pruebas individuales por cada contrato suscrito con los miembros del organismo, o los OGC internacionales en el marco de acuerdos de representación mutua.

Chile cuenta con ocho OGC que gestionan derechos, a saber: Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), Sociedad de Productores de Fonogramas y Videogramas Musicales (PROVOFI), Sociedad de Derechos de las Letras (SADEL), Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA Chile), Sociedad de Creadores de Imagen Fija (CREAIMAGEN), Corporación de Actores y Actrices de Chile (CHILEACTORES), Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos (ATN) y Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales (DYGA).

En Indonesia, según la Ley sobre el Derecho de Autor, los OGC, denominados tradicionalmente institución de gestión colectiva (LMK),<sup>280</sup> son personas jurídicas sin ánimo de lucro autorizadas por el autor, el titular de los derechos de autor o el titular de los derechos conexos para gestionar sus derechos patrimoniales en forma de recaudación y distribución de regalías.<sup>281</sup>

Para estar habilitado a ejercer en el país, un OGC debe estar autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y<sup>282</sup> para acceder a un permiso operativo, debe cumplir algunos requisitos legales, entre ellos ser capaz de recaudar y distribuir regalías a los titulares de derechos.<sup>283</sup>

En la Ley sobre el Derecho de Autor de Indonesia se establece una cantidad limitada de normas de gestión y transparencia para los OGC. Están obligados a realizar auditorías

---

<sup>274</sup> *Ibid.*, art. 98.

<sup>275</sup> *Ibid.*, art. 94.

<sup>276</sup> *Ibid.*, art. 99.

<sup>277</sup> *Ibid.*, art. 97.

<sup>278</sup> *Ibid.*, arts. 67 y 100.

<sup>279</sup> *Ibid.*, art. 102.

<sup>280</sup> Mahfuzzah, Z. "Duties and authorities of the Collective Management Institute (LMK) as the royalty management institution for song and music included digital music services". *IPR-Review*. Vol. 3, N° 2 (2020): p. 252.

<sup>281</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 1.22.

<sup>282</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 88.1.

<sup>283</sup> *Ibid.*, art. 88.2.

financieras mediante contadores públicos al menos una vez al año y hacer públicos los resultados.<sup>284</sup>

El porcentaje de fondos operativos se limita al 20% de la cantidad total recaudada anualmente (30% en los primeros cinco años tras la creación del OGC<sup>285</sup>). Al menos una vez al año, el ministro evaluará los OGC que funcionan en el país, evaluación que, si es negativa conlleva la revocación del permiso de operación.<sup>286</sup> Algunos derechos de remuneración equitativa han sido objeto de una gestión colectiva obligatoria.<sup>287</sup>

La propia Ley sobre el Derecho de Autor estableció dos OGC estatales para las canciones o la música. El primero representa los intereses de los autores y el segundo los intereses de los titulares de derechos conexos.<sup>288</sup> La ley considera que están facultados a recaudar y distribuir regalías por el uso de canciones y música protegidas por derechos de autor procedentes de usuarios comerciales según un porcentaje determinado y ratificado por decreto ministerial.<sup>289</sup> Por lo tanto, no es necesario firmar un contrato de representación con los titulares de derechos.

Ambos OGC deben actuar en conjunto para determinar el importe de las regalías que corresponden a cada uno de acuerdo con las mejores prácticas vigentes.<sup>290</sup> Para ello, deben establecer directrices que deben ser aprobadas por el ministro.<sup>291</sup>

En la práctica, el Instituto Nacional de Gestión Colectiva (INGC) es un organismo único que consta de dos secciones (Instituto Nacional de Gestión Colectiva de Autores e Instituto Nacional de Gestión Colectiva de Derechos Conexos), cada una dirigida por comisarios distintos cuyas funciones y estructura organizativa son controladas por un reglamento ministerial.<sup>292</sup> En este se incorporan normas adicionales de transparencia para ambos OGC, como la formulación de un código de ética y la obligación de elaborar un mecanismo de recaudación y distribución de las regalías por obras musicales.<sup>293</sup>

Asimismo, existen once organismos privados autorizados para actuar en nombre de los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de grabaciones sonoras, bajo el amparo del INGC.<sup>294</sup>

---

<sup>284</sup> *Ibid.*, art. 90.

<sup>285</sup> *Ibid.*, art. 91.

<sup>286</sup> *Ibid.*, art. 92.2.

<sup>287</sup> *Ibid.*, art. 87.2. Por ejemplo, los titulares de derechos deben afiliarse a un OGC para percibir una remuneración razonable por el uso de obras y otra materia protegida en los medios de comunicación de servicio público sin fines de lucro.

<sup>288</sup> *Ibid.*, art. 89. (1).

<sup>289</sup> *Ibid.*, art. 89. (2). Para consultar el decreto en el que se detalla el porcentaje de las regalías, véase <https://www.lmkkn.id/media/2021/04/SK-Menteri-Tarif-Royalti-Musik-Lagu-untuk-Pengguna-1.pdf>.

<sup>290</sup> *Ibid.*, art. 89. (3).

<sup>291</sup> *Ibid.*

<sup>292</sup> Indonesia, Reglamento del Ministro de Justicia y Derechos Humanos N.º 29 de 2014 relativo al procedimiento de solicitud y expedición de licencias operativas, y a la evaluación del organismo de gestión colectiva.

<sup>293</sup> Sardjono, A., *et al.* "The effectiveness of national collective management organization regulation". *Indonesia Law Review*. N.º 3 (2016): p. 326.

<sup>294</sup> Véase <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kantongi-izin-operasional-prisindo-siap-sejahterakan-para-pelaku-pertunjukan?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>.

A diferencia de los OGC estatales, que se restringen al ámbito musical, los OGC privados pueden gestionar todo tipo de derechos.<sup>295</sup> Por ejemplo, la Organización de Derechos de Reproducción de Indonesia<sup>296</sup> gestiona los derechos de reproducción de autores literarios y editores. Otros OGC que intervienen son Karia Cipta Indonesia (compositores musicales), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (productores fonográficos) y la Sociedad de Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de Indonesia.

El reglamento contempla explícitamente la posibilidad de que el INGC delegue su autoridad a los OGC privados. Esto incluye la autoridad para retirar, recaudar y distribuir regalías en el ámbito de las canciones o la música de los usuarios comerciales.<sup>297</sup>

Recientemente, el Gobierno de Indonesia publicó una reglamentación sobre los dos OGC gubernamentales,<sup>298</sup> en la que se establecen trece tipos de lugares abiertos al público que deben pagar regalías, incluidos restaurantes, cines, cafés, instituciones de radiodifusión y hoteles, así como un mecanismo para recaudar y distribuir las regalías.<sup>299</sup> Posteriormente, un decreto del ministro de Justicia y Derechos Humanos especificó los detalles de la reglamentación.

En la ley de los Emiratos Árabes Unidos no se hace mucha referencia a las organizaciones de gestión de derechos ya que de ello se ocupa la reglamentación de ejecución gubernamental de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Una disposición general en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos permite a los titulares del derecho delegar su gestión a asociaciones profesionales especializadas o confiar a otros organismos el ejercicio de estos derechos. Los contratos celebrados de esta manera se consideran contratos civiles.<sup>300</sup>

Por lo tanto, los OGC pueden tomar la forma de asociaciones profesionales especializadas o de otras organizaciones, pero en ambos casos figurarán bajo la denominación de organismos de gestión colectiva.<sup>301</sup> Los OGC deben estar autorizados por el ministro de Economía<sup>302</sup> en el ámbito federal y la autoridad competente en el

---

<sup>295</sup> Sardjono, *op. cit.*, p. 330.

<sup>296</sup> Autorizado por el Decreto del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos del 19 de agosto de 2016. Véase <http://www.prci.or.id/perkumpulan-reproduksi-cipta-indonesia-prci-2>.

<sup>297</sup> Véase <https://www.lmkn.id/faq/>.

<sup>298</sup> Indonesia, Reglamentación gubernamental N.º 56 de 2021 sobre gestión de regalías por derechos de autor de canciones o música (GR 56/2021); véase (en indonesio) <https://www.lmkn.id/media/2021/04/Salinan-PP-Nomor-56-Tahun-2021.pdf>. En el artículo 14 se indica que las regalías recaudadas deberían distribuirse a los creadores, titulares de los derechos de autor y propietarios de derechos conexos, pero también deberían utilizarse para generar fondos operativos y de reserva. Las regalías se distribuyen de acuerdo con el uso informado de canciones o música incluidas en la base de datos de SILM. Los titulares del derecho deben registrarse en el INGC para recibir regalías. Las regalías no reclamadas se conservarán por dos años y luego se distribuirán a los miembros. Véase <https://setkab.go.id/en/govt-issues-regulation-on-songs-music-copyright-royalties-management>.

<sup>299</sup> Véase <https://setkab.go.id/en/govt-issues-regulation-on-songs-music-copyright-royalties-management>.

<sup>300</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 32.

<sup>301</sup> Emiratos Árabes Unidos, Reglamentación de ejecución, *op. cit.*, art. 1.

<sup>302</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 34.1; y Emiratos Árabes Unidos, Reglamentación de ejecución, *op. cit.*, art. 15.

ámbito estatal.<sup>303</sup> La autorización incluye una tarifa y se renueva anualmente después del pago.<sup>304</sup>

La reglamentación de ejecución requiere que todos los candidatos obtengan el permiso gubernamental y exige una serie de documentos que incluye prueba de contratos celebrados con la entidad, el mecanismo de distribución de los ingresos financieros a los miembros y el acta constitutiva y el estatuto de la asociación.<sup>305</sup>

La ley también establece el principio general de no discriminación entre los postulantes que soliciten celebrar acuerdos para el uso de las obras y otra materia protegida.<sup>306</sup>

En virtud de la reglamentación de ejecución, los OGC autorizados deben cumplir con diferentes obligaciones para garantizar reglas adecuadas de gestión y transparencia. Entre ellas, se incluye un informe de transparencia anual, la obligación de conservar toda la documentación pertinente relativa a contratos y presentar anualmente las cuentas a los miembros e informarles acerca del método de distribución de los ingresos recaudados, así como de elaborar informes periódicos sobre el uso que se hace de las diferentes obras y otras materias protegidas. Los OGC también tienen la obligación de no hacer distinciones entre sus asociados o miembros.<sup>307</sup>

En los Emiratos Árabes Unidos, actualmente hay un solo OGC. La Asociación de Gestión de Derechos Reprográficos de los Emiratos (ERRA) funciona como una sociedad de gestión de los derechos reprográficos en la industria editorial para autores (escritores y artistas visuales) y editores de obras literarias impresas y digitales.<sup>308</sup>

Con arreglo a la Ley de Derechos de Autor de Uruguay, todos los OGC necesitan una autorización gubernamental previa para operar en el país, y deben adoptar la forma de una asociación privada sin fines de lucro.<sup>309</sup> La denominación de la asociación debe incluir el término gestión colectiva.

La ley también contempla la posibilidad de actuar en conjunto como una ventanilla única o de crear una persona jurídica para representar a varios OGC ante los usuarios<sup>310</sup>, teniendo obligación de negociar de buena fe con todos ellos.<sup>311</sup>

En 2003, la Ley N.º 17.616 que protege la propiedad intelectual añadió varias reglas sobre las actividades de otorgamiento de licencias de los OGC de Uruguay y su

---

<sup>303</sup> Emiratos Árabes Unidos, Reglamentación de ejecución, *op. cit.*, art. 15.

<sup>304</sup> Emiratos Árabes Unidos, Reglamento de ejecución, *op. cit.*, art. 15.6.

<sup>305</sup> Emiratos Árabes Unidos, Reglamentación de ejecución, *op. cit.*, art. 15.3.

<sup>306</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 33.

<sup>307</sup> Emiratos Árabes Unidos, Reglamentación de ejecución, *op. cit.*, art. 15.5.

<sup>308</sup> La organización denominada ESMAA también opera actualmente en el sector musical. Es propiedad de una empresa privada y otorga licencias de repertorios en los Emiratos Árabes Unidos y también en la región del Golfo. La ESMAA es una entidad de gestión de derechos en condición de cliente y, como tal, no es miembro de la CISAC. A diferencia de lo que ocurre con los OGC tradicionales, la Secretaría de la CISAC verifica solamente que estas organizaciones cumplan algunos criterios formales, y no hace una evaluación cualitativa de su operación práctica. De igual manera, la gestión y las votaciones de la CISAC no alcanzan a las entidades cliente de gestión de derechos. Véase <https://www.cisac.org/es/entidades-egd>.

<sup>309</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, art. 58.

<sup>310</sup> *Ibid.*

<sup>311</sup> *Ibid.*

legitimación para actuar en procedimientos judiciales, como por ejemplo la obligación de establecer tarifas justas y equitativas y ponerlas a disposición del público.<sup>312</sup>

Los OGC tienen el derecho, de conformidad con sus propios estatutos, a ejercer los derechos en virtud de su gestión y a hacerlos valer en procedimientos administrativos y judiciales.<sup>313</sup> Además, para presentar prueba de los derechos administrados, se les requerirá certificar por escrito el contrato de representación. Esto, sin perjuicio de la posibilidad del titular del derecho de ejercer directamente aquellos reconocidos por la ley.<sup>314</sup>

La Ley N.º 17.616 también añadió nuevas reglas sobre la gestión y la transparencia para los OGC nacionales. La ley requiere, entre otras cosas, que la remuneración recaudada se distribuya según sus reglas de distribución y solo se deduzcan gastos administrativos y fondos dedicados a las actividades de servicio social.

El Consejo de Derechos de Autor debe aprobar los porcentajes de descuentos administrativos, y los OGC deben presentar a los miembros el balance y el informe de los auditores, información que debe ser enviada a entidades extranjeras con representaciones mutuas en el territorio nacional.<sup>315</sup>

La ley exige que los OGC prevean una regla predeterminada que contemple la resolución de las regalías recaudadas, pero no distribuidas. También deben distribuir las regalías a los titulares de los derechos según los principios de distribución equitativa y proporcionalidad.<sup>316</sup> La reglamentación de la Ley N.º 17.616 añadió, además, varias reglas al funcionamiento de los OGC.<sup>317</sup>

En Uruguay, hay cinco OGC.<sup>318319</sup> La Asociación General de Autores de Uruguay (AGADU) representa a los autores literarios, audiovisuales, visuales, musicales y otros y funciona como una ventanilla única en el sector musical. En cuanto a los derechos conexos, la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes (SUDEI) representa a intérpretes de obras literarias y musicales, la Sociedad de Gestión Uruguaya de Actores Intérpretes (SUGAI) gestiona de forma colectiva los derechos de artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales,<sup>320</sup> la Cámara Uruguaya de Fonogramas y Videogramas (CUD) gestiona los

---

<sup>312</sup> Uruguay, Ley N.º 17.616, *op. cit.*, art. 21.5).

<sup>313</sup> *Ibid.*, art. 24.

<sup>314</sup> *Ibid.* art. 24.

<sup>315</sup> *Ibid.*, art. 21.

<sup>316</sup> *Ibid.*, art. 22.

<sup>317</sup> Uruguay, Reglamentación de la Ley 17.616, *op. cit.*, art. 12. Los OGC deben brindar a los miembros información detallada sobre los usos de las obras o la material protegido. Los períodos de distribución no deberían superar el año y las deducciones para los gastos administrativos y los servicios sociales deben ser coherentes con la cantidad gastada y los estándares internacionales.

<sup>318</sup> El OGC Asociación Uruguaya para la Tutela Organizada de los Derechos Reprográficos (AUTOR) fue autorizada para gestionar los derechos reprográficos en 2005, pero no está funcionando actualmente; véase <https://derechoalacultura.org/2013/10/12/panorama-de-las-sociedades-de-gestion-colectiva-en-uruguay>.

<sup>319</sup> Ríos Pinzón, Y.A., *et al. Panorama de la gestión colectiva del derecho de autor y derechos conexos en Iberoamérica*. cerlalc.org. 2018, p. 90. En Internet. 21 de octubre de 2022.

<<https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2019/01/Panorama-de-la-gestio%CC%81n-colectiva-final-1.pdf>>.

<sup>320</sup> La ley del Uruguay no atribuye derechos exclusivos a artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales, pero estos afirman tener un derecho de remuneración equitativa de conformidad con el

derechos conexos de los productores de fonogramas y la entidad de gestión colectiva EGEDA Uruguay actúa en nombre de los productores audiovisuales.

#### 4. Observancia de los derechos de la PI en el entorno digital

##### A. Desafíos actuales en la observancia de los derechos de autor en el entorno digital

La explotación generalizada de las obras en formato digital aumentó los niveles de piratería en muchas jurisdicciones. El uso no autorizado de obras digitales nativas, como programas informáticos, videojuegos y otros juegos electrónicos y aplicaciones móviles genera una gran preocupación. Esto explica, por ejemplo, que se prohíba la excepción de copia para uso privado (que permite a las personas copiar obras protegidas por derechos de autor de un dispositivo a otro) en esos casos.

Pero con la ampliación de la explotación digital de las obras literarias, musicales y audiovisuales, la piratería digital, particularmente la piratería en Internet, es un problema significativo para todos los subsectores seleccionados que se incluyeron en este estudio. Además, la piratería y la falsificación física tradicionales siguen siendo un problema grave en algunos de estos países, especialmente en la industria de la moda.

En las cuatro respuestas a la encuesta se resaltó que, a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades para aplicar la ley, los niveles de infracción siguen siendo altos, en particular en el ámbito de Internet. Esto quedó evidenciado en el Índice Internacional de la Propiedad Intelectual de 2022,<sup>321</sup> en el que se incluyó a Chile, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Dicho índice hace una evaluación comparativa de 50 indicadores del marco de la PI en las economías globales, y la posición que ocuparon los tres países fue relativamente baja en comparación con las otras 54 economías encuestadas.<sup>322</sup>

También se incluyó a Chile como “país prioritario en observación” (*Priority Watch List*) en el Informe Especial 301 de los Estados Unidos para el año 2022. Entre los motivos de preocupación se incluyeron los altos niveles de piratería en Internet y la falta de una observancia eficaz de la ley,<sup>323</sup> especialmente en lo que respecta a soluciones o sanciones por la recepción deliberada o la distribución ulterior de señales portadoras de programas transmitidas por satélite que se descodifican de manera ilegal.<sup>324</sup> También se observaron altos niveles de piratería a través de los servicios de transmisión en continuo y de aplicaciones de televisión por protocolo de internet (IPTV).<sup>325</sup> La piratería de *software* también es alta y existen dudas con respecto a la eficacia del mecanismo de

---

artículo 36 de la Ley de Derechos de Autor. El OGC firmó acuerdos de representación mutua con ocho OGC de otros países para recaudar las regalías de los actores uruguayos generadas fuera del país. Véase <https://sugai.org.uy/institucional/>.

<sup>321</sup> Cámara de Comercio de los Estados Unidos, *op. cit.*

<sup>322</sup> Indonesia ocupó el puesto 29 en la categoría de derechos de autor, los Emiratos Árabes Unidos se ubicaron en el puesto 42 y Chile, en el 43, todos ellos con una puntuación inferior al 50%. Véase Cámara de Comercio de los Estados Unidos, *op. cit.*, p. 17.

<sup>323</sup> Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, *op. cit.*, p. 18.

<sup>324</sup> *Ibid.*, p. 42.

<sup>325</sup> *Ibid.*, p. 58. Según el informe: “persiste la preocupación con respecto a la observancia de la propiedad intelectual en relación a la falta de sanciones disuasorias para las infracciones de la propiedad intelectual en los mercados físicos y en Internet” (Traducción oficiosa de la Oficina Internacional.)

órdenes judiciales que prevé la Ley de Propiedad Intelectual para inhabilitar el acceso al contenido infractor por parte de los PSSI.<sup>326</sup>

Indonesia también aparece en la lista de países prioritarios en observación en 2022. Según el informe, entre las preocupaciones de las partes interesadas de los Estados Unidos se incluyen la piratería y la falsificación generalizadas,<sup>327</sup> especialmente mediante dispositivos y aplicaciones afines. Sigue siendo necesario trabajar en la lucha contra el *software* sin licencia<sup>328</sup> y contra la elusión ilícita de las medidas tecnológicas de protección.<sup>329</sup> En el país se observaron niveles significativos de piratería a través de los servicios de transmisión en continuo y las aplicaciones de IPTV ilícitas,<sup>330</sup> así como de obras literarias.<sup>331</sup>

Los Emiratos Árabes Unidos fueron eliminados de la lista de países prioritarios en observación en el año 2021. Además, de acuerdo con la edición 2022 del Informe Especial 301, las autoridades encargadas de la observancia de la PI están aumentando las investigaciones sobre las actividades infractoras dentro y fuera de Internet como resultado de una mejora en la revisión judicial de los casos.<sup>332</sup> No obstante, sigue preocupando la falta de un marco jurídico específico para las infracciones de los derechos de autor en la red así como la capacidad de los PSSI emiratíes de aplicar la ley cuando los titulares del derecho denuncian actividades ilegales en dicho ámbito.<sup>333</sup>

En sus esfuerzos por promover la observancia de los derechos, los cuatro países son parte en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. En dicho Tratado, se incluye una cláusula que obliga a las partes contratantes a garantizar que su legislación disponga de procedimientos que permitan a los titulares de derechos de autor tomar medidas eficaces contra cualquier infracción de los derechos cubiertos por el tratado (en particular, la infracción por la puesta a disposición no autorizada).<sup>334</sup> El WCT también obliga a los legisladores nacionales a incluir soluciones rápidas que constituyan un factor de disuasión de infracciones futuras.<sup>335</sup> En el WPPT se incluye una disposición similar sobre la observancia de los derechos conexos cubiertos por dicho tratado.<sup>336</sup>

Los cuatro países también son miembros del acuerdo sobre los ADPIC, que incluye varias estipulaciones para promover la observancia de los derechos de la PI,<sup>337</sup> incluidos los derechos de autor y derechos conexos<sup>338</sup> que abarca.

---

<sup>326</sup> Cámara de Comercio de los Estados Unidos, *op. cit.*, p. 131.

<sup>327</sup> Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, *op. cit.*, p. 58.

<sup>328</sup> *Ibid.*, p. 34.

<sup>329</sup> *Ibid.*, p. 58.

<sup>330</sup> *Ibid.*

<sup>331</sup> Noerhadi, C.C. "The important role of collective management organization in the field of literary works in Indonesia." *Multicultural Education*. Vol. 7, edición 12 (2021).

<sup>332</sup> Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, *op. cit.*, p. 18.

<sup>333</sup> Cámara de Comercio de los Estados Unidos, *op. cit.*, p. 383.

<sup>334</sup> OMPI, WCT. *Op. cit.*, art. 9.

<sup>335</sup> *Ibid.*, art. 14.2).

<sup>336</sup> OMPI, WPPT, *op. cit.*, art. 23.2).

<sup>337</sup> Acuerdo sobre los ADPIC, *op. cit.*, arts. 41 a 61

<sup>338</sup> *Ibid.*, arts. 9 a 14.

Por lo general, la observancia se ha hecho posible dando a los titulares de derechos acceso a medidas provisionales<sup>339</sup> y civiles de subsanación,<sup>340</sup> que imponen sanciones administrativas o penales a los infractores, y proporcionando recursos o sanciones en caso de elusión de medidas tecnológicas de protección e información sobre la gestión de derechos.<sup>341</sup>

#### B. Mecanismos de observancia de los derechos de autor y los derechos conexos

La legislación chilena contempla distintas medidas que los tribunales civiles pueden adoptar a solicitud del demandante contra la infracción del derecho de autor y de los derechos conexos.

El titular del derecho puede activar una serie de mandamientos judiciales para detener temporalmente la infracción o evitar daños mayores. El juez puede ordenar, entre otras medidas, el cese inmediato de la obra presuntamente infractora, y la retención (secuestro) de los presuntos ejemplares falsificados, así como los materiales usados para producirlos.<sup>342</sup>

Los requisitos para estas medidas provisionales incluyen acreditar prueba razonable de la existencia del derecho que se reclama (*fumus boni iuris*), el riesgo de una infracción inminente (*periculum in mora*) y una caución suficiente.<sup>343</sup>

El titular del derecho puede iniciar acciones para solicitar el cese definitivo de la actividad ilícita del infractor<sup>344</sup> y la publicación de un extracto de la sentencia, a costa del demandado.<sup>345</sup>

De conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual, los reclamos por daños están disponibles para el titular de los derechos de autor y los derechos conexos.<sup>346</sup> La ley también define los criterios para calcular los daños sufridos por este, incluyendo como factor principal el valor legítimo de venta de los bienes sobre los cuales recae la infracción. Los tribunales pueden, además, condenar al infractor a pagar las ganancias que haya obtenido, que sean atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas

---

<sup>339</sup> Las medidas civiles provisionales normalmente incluyen mandamientos temporales y finales en los términos que el juez considere razonable para impedir o restringir la infracción del derecho de autor. En muchos casos, la orden judicial incluye la confiscación y la destrucción de los artículos ilegales.

<sup>340</sup> Habitualmente incluye una acción para reclamar daños. En algunos países, solo se permite reclamar los daños reales y el lucro cesante. Otros también incluyen la posibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Mientras que, en otros países, la ley permite cobrar los honorarios de letrados y las costas al infractor.

<sup>341</sup> OMPI. *Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos* wipo.int. 2016, p. 24. <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_909\\_2016.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf)>. En la práctica es importante establecer controles aduaneros para evitar el tráfico ilegal de bienes físicos, pero dado que ese escenario no está directamente relacionado con el entorno digital, no se hará referencia a ello en este estudio.

<sup>342</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 85.D.

<sup>343</sup> *Ibid.*

<sup>344</sup> *Ibid.*, art. 85. B.c).

<sup>345</sup> *Ibid.*, art. 85. B.a).

<sup>346</sup> *Ibid.*, art. 85. B.b).



al calcular los perjuicios reales.<sup>347</sup> En el caso de los bienes protegidos sin valor legítimo de venta al detalle, el juez determinará el monto de los perjuicios sufridos.<sup>348</sup>

El titular del derecho también puede solicitar que la indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados se reemplacen por una suma única, determinada por el tribunal en relación con la gravedad de la infracción, y que no superará a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción (aproximadamente 112.000 dólares estadounidenses según el tipo de cambio de octubre de 2022).<sup>349</sup>

La existencia de la indemnización por daños y perjuicios puede considerarse un paso positivo en la observancia de los derechos de autor en el entorno digital, ya que los métodos cuantitativos para calcular los daños y el lucro cesante por las infracciones en Internet pueden ser problemáticos.

La ley contempla sanciones o recursos en el ámbito penal para diferentes infracciones a los derechos de autor.<sup>350</sup> Algunas disposiciones protegen indirectamente el derecho moral de paternidad sancionando a aquellos que eliminan o alteran el nombre del autor de la obra.<sup>351</sup> La Ley de Propiedad Intelectual, por su parte, incluye reglas para las acciones de responsabilidad civil.<sup>352</sup>

El tribunal competente para resolver cuestiones de derechos de autor y derechos conexos en el fuero civil es el Tribunal Civil Ordinario mientras que hay una jurisdicción especializada para los reclamos que versen sobre los derechos de propiedad industrial.<sup>353</sup> Por el contrario, la legislación no contempla un órgano administrativo de observancia de los derechos de PI.<sup>354</sup>

Con respecto a los métodos alternativos de resolución de controversias (MARC), la ley de Chile contempla un procedimiento de mediación obligatoria cuando las asociaciones con personería jurídica que representan a usuarios de derechos de autor o derechos conexos no han logrado un acuerdo con un OGC respecto de una tarifa. El mediador no proviene de una agencia ni un órgano gubernamental, sino de un registro público,<sup>355</sup> y el resultado de la mediación es vinculante para las partes involucradas

Si la mediación obligatoria fracasa, la controversia puede someterse a arbitraje por solicitud de cualquiera de las partes. La sentencia del tribunal arbitral tendrá valor de

---

<sup>347</sup> *Ibid.*, art. 85. E.

<sup>348</sup> *Ibid.*, art. 85. A.

<sup>349</sup> *Ibid.*, art. 85.K. Actualmente, una unidad tributaria chilena equivale a aproximadamente 56 dólares EE. UU.

<sup>350</sup> *Ibid.*, arts. 78 a 83.

<sup>351</sup> *Ibid.*, art. 79bis.

<sup>352</sup> *Ibid.*, arts. 85. I y 85.

<sup>353</sup> El Tribunal de Propiedad Industrial se especializa en litigios relativos a marcas comerciales, patentes, diseños y otras formas de PI. Resuelve las apelaciones contra las resoluciones administrativas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, especialmente derivadas de cuestiones de registro. Véase <https://www.inapi.cl/>.

<sup>354</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 90. El Departamento de Derechos Intelectuales (perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio) es el órgano gubernamental competente en materia de derechos de autor y derechos conexos, aunque no tiene competencias administrativas de ejecución.

<sup>355</sup> *Ibid.*, art. 100.

sentencia ejecutoriada e incluirá un plan tarifario alternativo que podrá ser utilizado por cualquier usuario que lo desee. La tarifa adoptada mediante este procedimiento no puede ser modificada por el OGC ni volver a someterse a una nueva a mediación o arbitraje en un plazo de tres años.<sup>356</sup>

En casos sobre tarifas que no involucren a los OGC y asociaciones de usuarios, cualquiera de las partes puede presentar la controversia directamente al tribunal.

En Indonesia, la Ley sobre el Derecho de Autor permite a los titulares del derecho buscar un mandamiento judicial interlocutorio ante un tribunal comercial para solicitar el secuestro de los ejemplares o los productos de derechos conexos falsificados o los instrumentos usados para producirlos, así como el cese de la actividad ilegal.<sup>357</sup>

Los titulares del derecho también están facultados a reclamar daños tanto en acciones civiles como penales.<sup>358</sup> Si se reclaman en el marco de una acción penal, los daños se especifican simultáneamente en la resolución judicial.<sup>359</sup>

La acusación penal se reserva a quienes violan el derecho de autor a escala comercial. Las sanciones incluyen una multa que varía de 100 millones a 4.000 millones de rupias indonesias (aproximadamente entre 65.000 y 258.000 dólares EE. UU., según el tipo de cambio de octubre de 2022) o de uno a diez años de prisión.<sup>360</sup>

Para delitos que no sean piratería, antes de iniciar una acción penal, las partes deben buscar un acuerdo a través de la mediación, siempre y cuando todas las partes se encuentren en el territorio de Indonesia.<sup>361</sup>

El tribunal competente para resolver litigios sobre derechos de autor es el Tribunal Comercial, que tiene jurisdicción exclusiva en estos reclamos.<sup>362</sup> No hay una autoridad judicial especializada en la solución de litigios sobre derechos de autor y derechos conexos. En la práctica, según la respuesta de Indonesia a la encuesta, los litigios suelen resolverse amigablemente sin necesidad de recurrir a los tribunales.<sup>363</sup> Esto se condice con los datos estadísticos de la Dirección General de Propiedad Intelectual (DGIP).<sup>364</sup>

La Dirección General de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos es el organismo nacional de regulación y se ocupa también de los

---

<sup>356</sup> *Ibid.*

<sup>357</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 99. (4).

<sup>358</sup> *Ibid.*, art. 96. (2).

<sup>359</sup> *Ibid.*

<sup>360</sup> *Ibid.*, arts. 112 y 113.

<sup>361</sup> *Ibid.*, art. 95. (4).

<sup>362</sup> *Ibid.*, arts. 95. (2) y (3).

<sup>363</sup> La DGIP, por ejemplo, ha informado acerca de graves restricciones en lo que concierne a su personal en el campo, incluidos la falta de oficinas en todas las regiones y riesgos para la seguridad de los funcionarios. Véase [https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2021/IPKey-SEA\\_May2021\\_Musa-Nababan\\_Measures-Undertaken-to-Address-Counterfeiting-and-Piracy-by-Indonesia.ppt.pdf](https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2021/IPKey-SEA_May2021_Musa-Nababan_Measures-Undertaken-to-Address-Counterfeiting-and-Piracy-by-Indonesia.ppt.pdf)

<sup>364</sup> Según la DGIP, en 2020, 30 casos relacionados con la PI (solo seis trataban de problemas relacionados con los derechos de autor o los derechos conexos) llegaron a los tribunales en Indonesia. El año anterior, sin influencia de la pandemia de COVID-19 en las estadísticas, la cantidad de casos fue de solamente 47 (cinco casos relacionados con el derecho de autor). Véase [https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2021/IPKey-SEA\\_May2021\\_Musa-Nababan\\_Measures-Undertaken-to-Address-Counterfeiting-and-Piracy-by-Indonesia.ppt.pdf](https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2021/IPKey-SEA_May2021_Musa-Nababan_Measures-Undertaken-to-Address-Counterfeiting-and-Piracy-by-Indonesia.ppt.pdf).

asuntos de la propiedad industrial, pudiendo resolver casos a través de mediación (es decir, los litigios sobre la distribución de las regalías en el sector musical<sup>365</sup>).

Los litigios sobre derechos de autor también pueden resolverse mediante arbitraje o agencias de mediación, como la Agencia de Arbitraje Nacional de Indonesia o la Agencia de Mediación de Derechos de Propiedad Intelectual.

En la ley de los Emiratos Árabes Unidos se prevén varias soluciones y defensas contra la infracción del derecho de autor. La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos regula una variedad de medidas cautelares civiles de cesación y desistimiento, que el Magistrado de la Justicia Sumaria del tribunal civil competente debe conceder.<sup>366</sup>

Los mandamientos judiciales incluyen cesar el acto infractor, realizar el secuestro provisorio de los materiales infractores o de los ingresos resultantes y evitar la interpretación o ejecución pública de las obras.<sup>367</sup> La decisión se puede apelar ante el presidente del tribunal civil en el que se emitió la orden.<sup>368</sup>

La ley también otorga a los autores o titulares del derecho la posibilidad de reclamar daños patrimoniales en casos de infracción de derechos patrimoniales o morales. La compensación se otorgará de conformidad con las reglas generales del procedimiento civil<sup>369</sup> ante los tribunales civiles competentes. No hay un tribunal que se especialice en litigios relacionados con la PI.

En principio, existe un conjunto de disposiciones penales en la reciente Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos que aumentan las sanciones para quienes infrinjan los derechos morales o patrimoniales de los titulares de los distintos derechos protegidos. Las sanciones incluyen multas o penas de prisión, que pueden aumentar en caso de reincidencia, por un período no inferior a seis meses; la multa puede oscilar entre 100.000 y 500.000 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (aproximadamente de 27.000 a 136.000 dólares estadounidenses según el tipo de cambio de octubre de 2022<sup>370</sup>).

La ley contempla como delito la descarga o el almacenamiento ilegal en una computadora de cualquier copia de un programa informático, aplicación móvil o base de datos electrónica. Se pueden imponer penas de prisión por un período no inferior a seis meses y multas de entre 100.000 y 700.000 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (aproximadamente de 27.000 a 190.500 dólares estadounidenses según el tipo de cambio de octubre de 2022<sup>371</sup>). Las penas se agravan en caso de reincidencia.<sup>372</sup>

---

<sup>365</sup> Indonesia, Reglamentación gubernamental N.º 56 de 2021 sobre gestión de regalías de derechos de autor de canciones o música. Establece que, en el caso de un litigio relacionado con una incongruencia en la distribución del monto de las regalías, el creador, el titular de los derechos de autor o el propietario de derechos conexos puede proponer que se llegue a un acuerdo a través de mediación de la Dirección General de Propiedad Intelectual. Véase <https://setkab.go.id/en/govt-issues-regulation-on-songs-music-copyright-royalties-management>.

<sup>366</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 35.

<sup>367</sup> *Ibid.*, art. 35.

<sup>368</sup> *Ibid.*, art. 36.

<sup>369</sup> *Ibid.*, art. 43.

<sup>370</sup> *Ibid.*, art. 39.

<sup>371</sup> *Ibid.*, art. 40.1. C.

<sup>372</sup> *Ibid.*, art. 40.2.

Se prevé una pena distinta para el uso no autorizado de un programa informático, una aplicación móvil o una base de datos electrónica. No se impone una pena privativa de la libertad sino una multa que varía de 30.000 a 100.000 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (aproximadamente de 8.200 a 27.000 dólares estadounidenses según el tipo de cambio de octubre de 2022) para cada programa, aplicación o base de datos usada de manera ilegal. Como en los casos anteriores, la pena aumenta en caso de reincidencia.<sup>373</sup>

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos no designa un órgano judicial especializado para resolver litigios de derechos de autor y derechos conexos sino que son los tribunales ordinarios competentes los que deciden casos civiles y penales que derivan de la infracción de dichos derechos.<sup>374</sup>

Sin embargo, hay un procedimiento híbrido para la resolución en algunos casos, mediante el cual las decisiones del Ministro de Economía sobre la aplicación de la ley (por ejemplo, el registro de obras, la concesión de licencias obligatorias para la reproducción o la traducción de obras o la autorización de las entidades de gestión de derechos) pueden llevarse ante el Tribunal federal de apelación.

No obstante, no se aceptará ninguna demanda sin que antes se haya presentado una reclamación ante la Comisión de Reclamaciones de Derechos de Autor y Derechos Conexos, un órgano gubernamental.<sup>375</sup> Por lo tanto, es la resolución administrativa de la Comisión de Reclamaciones a la que puede apelarse con posterioridad.<sup>376</sup>

También es importante destacar que, en virtud de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el Ministerio de Economía tiene la facultad general de supervisar y controlar la implementación de la ley, así como los delitos y las infracciones que atentan contra sus disposiciones.<sup>377</sup> Esto significa que, antes de que pueda apelarse ante un tribunal, la decisión del Ministerio sobre cualquier delito o infracción civil de los

---

<sup>373</sup> *Ibid.*, art. 41.

<sup>374</sup> El tribunal civil competente puede ser el tribunal de primera instancia federal o local; véase Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 1. Esto se debe a que el sistema judicial civil de los Emiratos Árabes Unidos funciona en dos niveles. Los Emiratos de Sharjah, Ajman, Fujairah y Umm Al Quwain siguen el sistema judicial federal, pero Abu Dhabi, Dubái y Ras Al Khaimah mantienen departamentos independientes con competencia en las cuestiones no asignadas a las autoridades judiciales federales en virtud de la Constitución; véase la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos, *op. cit.*, art. 104. En cada sistema, los dos primeros pasos de la justicia civil son el tribunal de primera instancia y el tribunal de apelación. En el ámbito federal, el tribunal de mayor jerarquía es la Corte Suprema Federal, que también es la autoridad judicial más alta en los Emiratos Árabes Unidos. En el ámbito local, en cambio, el Tribunal de Casación es la máxima autoridad judicial de los Emiratos Árabes Unidos con potestad para examinar las impugnaciones presentadas contra las sentencias dictadas por el Tribunal de Apelación. Véase <https://u.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-judiciary>.

<sup>375</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 37.1 establece que el Ministerio de Economía establece la Comisión de Reclamaciones bajo la presidencia de un juez especializado nombrado por el Ministro de Justicia, con dos especialistas elegidos por el Ministro de Economía.

<sup>376</sup> *Ibid.*, art. 37.3.

<sup>377</sup> *Ibid.*, art. 47. El gobierno federal puede delegar todos o algunos de sus poderes a las autoridades locales competentes.

derechos de autor o conexos estará sujeta a la determinación de la Comisión de Reclamaciones.<sup>378</sup>

La ley no establece ninguna mediación o sistema de arbitraje específicos para la infracción del derecho de autor, pero se puede aplicar el sistema de arbitraje general para los casos civiles regulados por la Ley Federal N.º 6 de 2018 sobre arbitraje.<sup>379</sup> Hay distintas instituciones arbitrales en el país, especialmente para los casos en los que una de las partes es extranjera. Entre estas instituciones, se encuentran el Centro Internacional de Arbitraje de Dubái,<sup>380</sup> que asumió alguno de los casos gestionados previamente por el DIFC, el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres.<sup>381</sup>

En Uruguay, la ley tiene medidas limitadas contra la infracción del derecho del autor, aunque incluye las más importantes. Contempla medidas cautelares para evitar infracciones futuras o que una ya cometida subsista o se repita, como la suspensión inmediata de las actividades ilícitas, el secuestro de los ejemplares ilícitos o del equipo usado para la actividad infractora y el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita, o las cantidades debidas al titular del derecho.<sup>382</sup>

La parte perjudicada, autor o causahabiente puede iniciar una acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita o para obtener una indemnización por daños y perjuicios. También podrá reclamar una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción.<sup>383</sup>

Con respecto a los derechos de los organismos de radiodifusión, una disposición en la Ley de Presupuesto Nacional 2020–2024 determina una multa administrativa que penaliza actos no autorizados de difusión con fines comerciales de servicios televisivos de pago por visión a través de Internet o red similar.<sup>384</sup>

En el ámbito penal, la ley contempla sanciones para diferentes delitos. En algunos casos, la pena incluye prisión desde tres meses hasta tres años.<sup>385</sup> En casos de infracción sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, las multas varían de 10 a 1.500 unidades reajustables (aproximadamente entre 365 y 55.000

---

<sup>378</sup> *Ibid.*, art. 48. También se establece en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos que los empleados federales, las autoridades administrativas locales (si las designa el gobierno federal) o el jefe de la autoridad judicial local tendrán la misma capacidad que los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley para probar violaciones a esta.

<sup>379</sup> Para la versión en inglés, véase <https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/litigation-procedures/alternative-methods-to-settle-disputes-/uae-federal-law-on-arbitration>.

<sup>380</sup> Véase <http://www.diac.ae/idias/>.

<sup>381</sup> De conformidad con el Decreto N.º (34) del Gobierno de Dubái, de 2021, el Centro Internacional de Arbitraje de Dubái (DIAC) y el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) acordaron que el LCIA administrará todos los casos ventilados ante el DIFC-LCIA (aquellos iniciados y registrados con un número de caso asignado el 20 de marzo de 2022 o antes de esa fecha). Todos los procedimientos de arbitraje, mediación y otros de solución de controversias alternativos iniciados el 21 de marzo de 2022 o con posterioridad a dicha fecha serán registrados por el DIAC y administrados directamente por su órgano administrativo; véase <https://www.lcia.org/News/update-difc-lcia.aspx>.

<sup>382</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, art. 48.

<sup>383</sup> *Ibid.*, art. 51.

<sup>384</sup> Uruguay, Ley N.º 19.924 del 30 de diciembre de 2020 de la Ley de Presupuesto Nacional, Sueldos, Gastos e Inversiones para el ejercicio 2020–2024, art. 712; véase <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19924-2020/712>.

<sup>385</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, art. 46.A).

dólares estadounidenses).<sup>386</sup> El juez también ordenará la confiscación y destrucción de las copias infractoras, así como de todos los dispositivos o equipos utilizados para su producción.<sup>387</sup>

Dado que el Uruguay carece de órganos judiciales civiles especializados para resolver los asuntos de derechos de autor y derechos conexos, es el tribunal civil competente general el que resuelve dichos procedimientos. Las apelaciones se presentan ante los tribunales de apelación en lo civil. Los procedimientos penales por infracción de los derechos de autor y conexos se tramitan ante los tribunales penales ordinarios competentes.

El Consejo de Derechos de Autor es el organismo regulador nacional.<sup>388</sup> Funciona dentro de la estructura administrativa del Ministerio de Educación y Cultura<sup>389</sup> y desempeña principalmente funciones de arbitraje y mediación;<sup>390</sup> representa asimismo al Estado en cuestiones relacionadas con derechos de autor.<sup>391</sup> Algunas de estas competencias se desprenden de la Reglamentación de la Ley N.º 17.616.<sup>392</sup> La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial se encarga de los derechos de propiedad industrial.

Desde un punto de vista procesal, Uruguay tiene mecanismos de mediación judicial y extrajudicial y un sistema general de arbitraje para casos civiles que puede aplicarse a las infracciones de los derechos de autor y los derechos conexos.

La Ley de Derechos de Autor también determina que cuando los usuarios y los OGC no llegan a un acuerdo pueden, por consentimiento mutuo, iniciar un procedimiento de arbitraje en el Consejo de Derechos de Autor. El Consejo constituirá el Tribunal Arbitral en el plazo de 20 días desde la solicitud inicial. El Tribunal debe presentar su laudo dentro del plazo perentorio de 45 días hábiles a partir de su integración.<sup>393</sup>

La Reglamentación de la Ley N.º 17.616 también otorga al Consejo de Derechos de Autor la competencia general de mediar cuando es necesario entre los diferentes OGC que operan en el país y entre estos y otras asociaciones mercantiles.<sup>394</sup>

### C. Medidas tecnológicas de protección e información sobre gestión de derechos

La Ley de Propiedad Intelectual de Chile incluye una disposición referida a la eliminación no autorizada de la información sobre gestión de derechos como resultado de los tratados WCT y WPPT.

---

<sup>386</sup> *Ibid.*, art. 46.E). Una unidad reajutable equivalía a 1.494,32 pesos uruguayos (aproximadamente 36,5 dólares EE. UU.) en octubre de 2022; véase <https://www.ine.gub.uy/unidad-reajutable>.

<sup>387</sup> *Ibid.*, art. 46. C).

<sup>388</sup> *Ibid.*, art. 56.

<sup>389</sup> Uruguay, Decreto N.º 154/004 sobre la Reglamentación de la Ley N.º 17.616, *op. cit.*, art. 21

<sup>390</sup> *Ibid.*, art. 24.

<sup>391</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, art. 61.

<sup>392</sup> Uruguay, Decreto N.º 154/004 sobre la Reglamentación de la Ley N.º 17.616, *op. cit.*, arts. 20-24.

<sup>393</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, art. 58. Hasta que se dirima la controversia, se considerará otorgada la autorización para la radiodifusión del repertorio, siempre que se continúe abonando la tarifa anterior y sin perjuicio de la obligación de pagar las diferencias que pudieran derivarse del procedimiento arbitral.

<sup>394</sup> Uruguay, Decreto N.º 154/004 sobre la Reglamentación de la Ley N.º 17.616, *op. cit.*, art. 24.

Se prevé una reclamación civil por daños y perjuicios contra quienes contribuyan a la supresión o alteración de dicha información, independientemente de si esta se encontraba en formato electrónico o no. La ley también establece una multa de 25 a 150 unidades tributarias mensuales.<sup>395</sup>

Con este régimen, los legisladores chilenos van más allá de los artículos 12.1) del WCT y 19.1) del WPPT ya que estos exigen solamente una acción legislativa contra los que interfieren con la información electrónica sobre gestión de derechos. Como los Tratados establecen un estándar internacional mínimo de protección, la ley de Chile es compatible con ambos.

La Ley de Propiedad Intelectual define el término “información de gestión de derechos” sin incluir la mención de información electrónica, siguiendo estrictamente en este caso a los artículos 14.2) de WCT y 19.2) del WPPT.

Con respecto a la evasión ilegal de las medidas tecnológicas digitales, el WCT se publicó en el Diario Oficial de Chile<sup>396</sup> y, por lo tanto, es parte del derecho interno aunque aún no hay una disposición expresa en la Ley de Propiedad Intelectual para dar lugar a las disposiciones pertinentes del Tratado.

La Ley sobre el Derecho de Autor de Indonesia tiene disposiciones específicas para proteger las medidas tecnológicas utilizadas para salvaguardar la obra o los derechos conexos objeto de protección, siguiendo el ejemplo del WCT y el WPPT

Es ilegal dañar, destruir, suprimir o inhabilitar la función de las medidas tecnológicas de protección. Sin embargo, la protección tecnológica puede eludirse por razones de defensa del Estado, motivos de seguridad u otras razones previstas en la ley o las reglamentaciones.<sup>397</sup> La definición de medida tecnológica de protección no se encuentra en la Ley sobre el Derecho de Autor, sino en su explicación anexada.<sup>398</sup>

En casos de infracción ilegal para uso comercial, la pena es prisión de hasta dos años o una multa de hasta 300 millones de rupias indonesias.<sup>399</sup> No se penalizarán los actos individuales de elusión que no tengan fines comerciales.

La ley establece una protección independiente en caso de que se elimine sin autorización, se modifique o se dañe la información sobre gestión de derechos de autor o la información electrónica sobre derechos de autor utilizada por el este para proteger sus derechos morales.<sup>400</sup> Sin embargo, en la práctica, si se utilizan esos medios

---

<sup>395</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 84.

<sup>396</sup> Chile, Decreto N.º 270, *op. cit.*

<sup>397</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 52. Además, el artículo 53.(1) dispone que la protección de las obras o material protegido que utilicen medios de producción o almacenamiento de datos basados en la tecnología de la información o en la alta tecnología debe cumplir con las normas de concesión de licencias y los requisitos de producción establecidos por las autoridades competentes.

<sup>398</sup> *Ibid.*, art. 52. Véase el comentario en el que se definen las medidas tecnológicas de protección como cualquier tecnología, dispositivo o componente diseñado para impedir o restringir actos no autorizados por el autor, el titular de los derechos de autor, los titulares de derechos conexos o aquellos prohibidos por leyes y reglamentaciones.

<sup>399</sup> *Ibid.*, art. 112.

<sup>400</sup> *Ibid.*, arts. 6 y 7. (3).



tecnológicos de protección, estos también protegerán indirectamente los derechos patrimoniales del autor.

Las definiciones de información sobre gestión de derechos de autor y de información electrónica sobre sus derechos que figuran en la Ley sobre el Derecho de Autor<sup>401</sup> no coinciden con la definición de información sobre la gestión de derechos del Artículo 12.2) del WCT.

En la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de los Emiratos Árabes Unidos se impone la responsabilidad penal a quienes fabriquen o importen ilegalmente, con fines de venta, alquiler o distribución, cualquier obra falsificada o copias de esta, o cualquier aparato, equipo, dispositivo o material especialmente diseñado o preparado para evitar de manera fraudulenta la protección o la tecnología utilizada por el titular del derecho. El titular del derecho debe utilizar dicha protección o tecnología para “transmitir, poner en circulación, regular o gestionar dichos derechos, o preservar un determinado nivel de pureza de las copias”.<sup>402</sup>

Una disposición similar contempla la interrupción o el menoscabo de cualquier protección técnica o de los datos electrónicos destinados a regular y gestionar los derechos previstos en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.<sup>403</sup>

En ambos casos, la ley impone penas de prisión por un período no inferior a seis meses y una multa de entre 100.000 y 700.000 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (aproximadamente entre 27.000 y 190.500 dólares estadounidenses, según el tipo de cambio de octubre de 2022<sup>404</sup>). Dichas penas aumentan en caso de reincidencia.<sup>405</sup>

Además, en virtud del Decreto-Ley Federal N.º 34 de 2021 sobre la lucha contra los rumores y los delitos informáticos,<sup>406</sup> se considera que los sitios web proporcionan “contenido ilegal” si “facilitan información, herramientas y métodos con el objetivo de infringir los derechos de propiedad intelectual y traspasar los medios de protección utilizados para proteger dichos derechos, como decodificar películas y canales de televisión codificados, manejar disquetes magnéticos, programas y juegos electrónicos copiados, o desactivar sistemas de protección diseñados exclusivamente para combatir la piratería.”<sup>407</sup>

En Uruguay, la Ley de Derechos de Autor incluye una disposición para garantizar la adecuada protección de las medidas tecnológicas digitales utilizadas para proteger los derechos de autor o los derechos conexos cuyos términos son similares a los utilizados en las disposiciones pertinentes del WCT y el WPPT.<sup>408</sup>

---

<sup>401</sup> *Ibid.*, arts. 7.1) y 7.2).

<sup>402</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 40.1.a.

<sup>403</sup> *Ibid.*, art. 40.1. B.

<sup>404</sup> *Ibid.*, art. 40.1.

<sup>405</sup> *Ibid.*, art. 40.2.

<sup>406</sup> Emiratos Árabes Unidos, Decreto-Ley Federal N.º 34 de 2021 sobre la lucha contra los rumores y los delitos informáticos; véase (en árabe) <https://laws.uaecabinet.ae/ar/group/1011>.

<sup>407</sup> Véase <https://tdra.gov.ae/en/About/tdra-sectors/information-and-digital-government/policy-and-programs-department/internet-guidelines#prohibited-content-categories>.

<sup>408</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, art. 46.B).



Los actos individuales de elusión no están penalizados. La ley solo sanciona las actividades facilitadoras o preparatorias, como la comercialización de productos o servicios con la intención de burlar, suprimir, neutralizar o evadir los mecanismos técnicos que los titulares han implementado para proteger sus respectivos derechos. La pena impuesta en estos casos es idéntica a la asignada por la infracción de derechos sustantivos (multa y prisión de tres meses a tres años).

La ley también incluye una disposición para penalizar la alteración o eliminación individual no autorizada de información electrónica sobre gestión de derechos que no prevé multas, pero sí penas de prisión de tres meses a tres años. Lo mismo se aplicará a los actos no autorizados de distribución, importación, radiodifusión o comunicación al público de copias de obras, interpretaciones o ejecuciones de obras musicales o fonogramas, a sabiendas de que se ha suprimido o alterado sin autorización la información electrónica colocada por los titulares de los derechos.<sup>409</sup>

## **5. Infracción del derecho de autor y prestadores de servicios de intermediación en línea**

En varios marcos jurídicos ha resultado difícil establecer el rol de los PSSI. Sin embargo, es extremadamente importante velar por el cumplimiento de los derechos de autor en el entorno digital. Con frecuencia, resulta difícil encontrar al usuario infractor o este no dispone de recursos económicos para responder por los daños causados.<sup>410</sup>

Por lo tanto, es imperativo disponer de un conjunto de normas que definan correctamente la responsabilidad accesoria de las empresas de Internet que prestan servicios a los usuarios finales si estos no cumplen determinadas normas de conducta.

Estas normas tienen por objeto limitar la responsabilidad de determinados prestadores de servicios en línea que realizan actividades de intermediación. Por lo tanto, la limitación de responsabilidad (el denominado puerto seguro) nunca se aplicará a los servicios en línea que actúen como infractores directos, como un sitio web que almacene u ofrezca al público contenido infractor.

El rol de los PSSI también es fundamental en lo que respecta a las medidas cautelares (también conocidas como mandamientos judiciales) por infracción del derecho de autor y derechos conexos en línea. Los titulares de derechos deben tener la oportunidad de solicitar que se retire el contenido infractor o de impedir, de manera determinante, que los usuarios de Internet tengan acceso a dicho contenido.

La posición de los prestadores de servicios de intermediación en línea en los casos de infracción del derecho de autor varía ampliamente en los cuatro países. Solo la Ley de Propiedad Intelectual de Chile incluye un sistema completo que abarca tanto las limitaciones de responsabilidad de los PSSI como un mecanismo de bloqueo de los contenidos que infrinjan los derechos de autor y los derechos conexos.

---

<sup>409</sup> *Ibid.*, art. 46.B).

<sup>410</sup> En muchos países, no se demanda al usuario directamente por la infracción, en el caso de las infracciones en Internet. En su lugar, las leyes establecen un mecanismo de “respuesta gradual” o de “tres avisos” que permite a una autoridad administrativa dar advertencias al usuario o suspender la cuenta de acceso a Internet del usuario antes de que se inicie una acción civil o penal. Véase el Código de Propiedad Intelectual de Francia, art. L (331) (20).

## A. Chile

La Ley de Propiedad Intelectual establece una exención de responsabilidad para los PSSI de Chile.<sup>411</sup> Este régimen ha estado fuertemente influenciado por el Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América.<sup>412</sup>

El punto de partida de la legislación chilena es que no existe una obligación general para los PSSI de controlar el material que intercambian los usuarios de sus servicios.<sup>413</sup> Esto incluye la ausencia de toda obligación de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que puedan indicar una infracción del derecho de autor en línea.

La ley establece normas específicas sobre limitación de responsabilidad<sup>414</sup> para cuatro tipos de servicios de Internet, a saber, servicios de transmisión/acceso,<sup>415</sup> servicios de almacenamiento en la memoria caché del sistema,<sup>416</sup> servicios de alojamiento<sup>417</sup> y servicios de redireccionamiento. De este modo, cuando un PSSI reúne algunos requisitos generales estipulados en la ley,<sup>418</sup> y cumple con las condiciones específicas exigidas en cada caso, no estará obligado a pagar indemnizaciones pecuniarias por daños y perjuicios que deriven de la infracción del derecho de autor causada por sus usuarios.

Las condiciones comunes que se aplican a todos los tipos de PSSI exigen que publiquen las condiciones generales de los contratos de servicios con sus usuarios finales, especificando cómo se deben rescindir estos contratos en caso de infractores reincidentes. Los PSSI están obligados a no interferir en el uso de medidas tecnológicas de protección eficaces y de información sobre la gestión de derechos. El PSSI también debe ser un auténtico intermediario neutral, por lo que no debe generar contenidos ni seleccionar a los destinatarios.

La ley también estableció las condiciones específicas que deben cumplirse en cada caso para eximir de responsabilidad a los prestadores de servicios de acceso o de

---

<sup>411</sup> Para regularlo, la Ley N.º 20.435 del 4 de mayo de 2010, modifica la Ley N.º 17.336 sobre propiedad intelectual. Véase <https://bcn.cl/2ey9w>.

<sup>412</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, arts. 85. L-85.U.

<sup>413</sup> *Ibid.*, art. 85. P.

<sup>414</sup> *Ibid.*, art. 85. I.

<sup>415</sup> *Ibid.*, art. 85. M.

<sup>416</sup> *Ibid.*, art. 85. N.

<sup>417</sup> *Ibid.*, art. 85.Ñ.

<sup>418</sup> *Ibid.*, art. 85.O.

transmisión,<sup>419</sup> servicios de almacenamiento en la memoria caché del sistema,<sup>420</sup> servicios de alojamiento y servicios de redireccionamiento.<sup>421</sup>

En cualquier caso, los PSSI pueden solicitar medidas cautelares para detener temporalmente la infracción mientras el caso está pendiente, retirar el contenido infractor de su sistema o bloquear el acceso a ese contenido si no se puede eliminar.

Para ello, la Ley de Propiedad Intelectual establece un complejo procedimiento de notificación.<sup>422</sup> Para que esto sea válido, es necesaria la intervención judicial, y el cumplimiento de ciertos requisitos (la identificación clara de los derechos presuntamente infringidos, y del titular del derecho así como una descripción detallada del material infractor<sup>423</sup>).

Una vez presentado este recurso, el tribunal debe ordenar inmediatamente el retiro o la inhabilitación del contenido presuntamente infractor. El usuario final tiene derecho a solicitar la anulación de la orden, alegando todos los hechos o circunstancias que considere oportunos en la contranotificación. El juez tendrá en consideración los argumentos y tomará una segunda decisión, que puede apelarse. El reclamo se tramitará en forma breve y sumaria.

Incluso si se cumplen las condiciones de exención de responsabilidad y no se dicta una medida cautelar, los PSSI siguen estando sujetos a un mandamiento final para poner fin definitivamente a la infracción. Por lo tanto, los prestadores de servicios de transmisión o de acceso deben adoptar medidas razonables para bloquear el acceso al contenido infractor, siempre que ello no implique el bloqueo de contenido legítimo.<sup>424</sup>

De forma similar, el titular del derecho puede solicitar un mandamiento final contra los prestadores de servicios de almacenamiento en la memoria caché del sistema, los prestadores de servicios de alojamiento y los prestadores de servicios de redireccionamiento que cumplieron las condiciones de puerto seguro. El juez puede

---

<sup>419</sup> La exención de responsabilidad se aplicará si el proveedor de servicios de acceso o de transmisión cumple distintas condiciones de neutralidad (es decir, no selecciona ni modifica la información que se transmite, no inicia la transmisión y no selecciona al receptor de la transmisión).

<sup>420</sup> Los prestadores de servicios de almacenamiento en la memoria caché del sistema ofrecen copias alternativas “en caché” de sitios web para acelerar la transmisión de información en Internet. Estos PSSI están obligados por ley a cumplir las condiciones de acceso a la información y las normas relativas a la actualización de la información especificadas por el proveedor original del sitio web, a no interferir en el uso lícito de la tecnología utilizada por el proveedor del sitio web para obtener información sobre el uso en línea de los contenidos almacenados y a no modificar la información. También deben actuar con rapidez para retirar o inhabilitar el acceso al material cuando este haya sido eliminado del sitio web de origen, siempre que se haya enviado una notificación adecuada en virtud del sistema de notificación y retiro del artículo 85.Q.

<sup>421</sup> Para beneficiarse de la exención de responsabilidad, los PSSI no deben tener conocimiento real de la naturaleza ilegal de los datos, no deben recibir ningún beneficio económico directamente atribuible a la actividad ilegal y deben designar públicamente a un representante encargado de recibir las notificaciones judiciales que declaran ilegales los contenidos. Por último, tras tener conocimiento efectivo del carácter infractor del contenido, el proveedor de servicios de intermediación en línea debe retirar o inhabilitar rápidamente el acceso al material infractor.

<sup>422</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 85.Q

<sup>423</sup> La medida cautelar puede adoptarse incluso *inaudita parte* si existen razones imperiosas que así lo aconsejen, a condición de que el demandante deposite la caución necesaria.

<sup>424</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 85.R.

ordenar el retiro o la inhabilitación del acceso al material infractor y cerrar las cuentas de los infractores reincidentes.<sup>425</sup>

También existe la obligación de quien facilite a sabiendas información falsa sobre supuestas infracciones de derechos, de indemnizar por los daños y perjuicios causados.<sup>426</sup> La Ley de Propiedad Intelectual prevé una citación para que el tribunal competente ordene a los PSSI que presenten la información que permita identificar al infractor.<sup>427</sup>

## B. Indonesia

En Indonesia, la Ley sobre el Derecho de Autor no contempla la exención de responsabilidad para ningún tipo de proveedor de servicios en línea. Sin embargo, establece un procedimiento para bloquear contenidos o inhabilitar los servicios de un sistema electrónico si se infringen los derechos de autor y los derechos conexos.<sup>428</sup>

El mecanismo de bloqueo puede solicitarse en casos de infracción del derecho de autor o los derechos conexos para uso comercial, cometida a través de “sistemas electrónicos”. Por lo tanto, la Ley sobre el Derecho de Autor no distingue entre las distintas funciones o actividades de los prestadores de servicios en línea (transmisión o acceso, almacenamiento en la memoria caché del sistema, alojamiento o servicios de redireccionamiento).

En la práctica, las medidas de retiro se emplean normalmente contra los sitios web infractores<sup>429</sup> y se reserva la inhabilitación de un servicio para los proveedores de acceso.

La Ley sobre el Derecho de Autor no obliga a los PSSI a controlar el contenido infractor del derecho de autor en sus sistemas. En cambio, autoriza al Gobierno a supervisar la producción y difusión de dicho contenido a través de medios que utilizan tecnologías de la información para evitar infracciones.

Las autoridades gubernamentales también pueden supervisar la grabación de obras y objetos de derechos conexos realizadas con cualquier medio en salas de espectáculos, lo que, a menudo, es un primer paso en la puesta de contenido ilegal en Internet.<sup>430</sup>

La Ley también permite a cualquier persona (incluidos los titulares de derechos) denunciar ante la Dirección General de Propiedad Intelectual (DGIP) si tiene

---

<sup>425</sup> *Ibid.*, art. 85. R.

<sup>426</sup> *Ibid.*, art. 85. T.

<sup>427</sup> *Ibid.*, art. 85.S.

<sup>428</sup> De conformidad con el artículo 10, se prohíbe a los gerentes de locales comerciales permitir la venta o la reproducción de artículos ilegales en el local bajo su gestión. La norma regula claramente solo las tiendas físicas, aunque ha habido intentos de aplicarla a los prestadores de servicios de Internet, especialmente los prestadores de alojamiento. Véase Simanjuntak, I.K. “Legal protection of Internet intermediary to copyright infringement by users (comparative study on Indonesia, USA and European Union).” *International Journal of Research and Review*. Vol. 5, Edición 4 (2018): p. 57.

<sup>429</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 55. (4) se refiere específicamente al “bloqueo de sitios de Internet”.

<sup>430</sup> *Ibid.*, art. 54.

conocimiento de una infracción con fines comerciales cometida a través de sistemas electrónicos.<sup>431</sup>

La DGIP deberá verificar dichas denuncias<sup>432</sup> y, a instancias del denunciante, recomendará al Ministerio de Comunicaciones e Informática (MOCI) que bloquee, total o parcialmente, el contenido si existen pruebas suficientes de infracción. La DGIP también podría recomendar que los servicios del sistema electrónico sean inaccesibles para los usuarios finales de Indonesia.<sup>433</sup>

El MOCI podrá seguir esta recomendación y bloquear el contenido o impedir el acceso de los usuarios al sistema electrónico, haciéndolo inaccesible.<sup>434</sup> Si se bloquea totalmente el sitio web, la DGIP está obligada a solicitar una disposición judicial en un plazo de 14 días.<sup>435</sup>

Por lo tanto, corresponde a los tribunales confirmar o revocar la decisión administrativa de bloquear el sitio web infractor, aunque la autoridad administrativa puede impedir el acceso al sitio o bloquearlo parcialmente. En la práctica, según los datos del MOCI, la cantidad de sitios web bloqueados por actividades infractoras es moderada.<sup>436</sup>

Sobre la regulación más detallada de este mecanismo, la Ley sobre el Derecho de Autor remite a un reglamento conjunto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Comunicación e Informática publicado en 2015. Dicho reglamento incluye un mecanismo para reabrir los sitios bloqueados cuando se cumplen ciertas condiciones.<sup>437</sup>

En la práctica, estas disposiciones específicas se superponen con una compleja red de normas administrativas que regulan la responsabilidad de los servicios de Internet, especialmente las plataformas de comercio electrónico, por la difusión de contenido infractor.

El MOCI emitió una circular<sup>438</sup> que creó una política de exención de responsabilidad para las plataformas de comercio electrónico en 2016 que establecía que una plataforma en línea solo sería responsable si no podía demostrar fuerza mayor, error o negligencia por parte de sus usuarios.<sup>439</sup> Por lo tanto, para evitar la responsabilidad, la plataforma debe demostrar que un usuario era el responsable de la publicación de ese contenido. La

---

<sup>431</sup> *Ibid.*, art. 55.1.

<sup>432</sup> *Ibid.*, art. 55. (2).

<sup>433</sup> *Ibid.*, art. 55. (3).

<sup>434</sup> *Ibid.*, art. 56. (1).

<sup>435</sup> *Ibid.*, art. 55. (4).

<sup>436</sup> De conformidad con los datos proporcionados por la DGIP, la cantidad de sitios cerrados por violar los derechos de PI (no solo los derechos de autor y los derechos conexos) en Indonesia aumentó de 47 en 2019, a 176 en 2020 y a 209 en 2021. Véase [https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2021/IPKey-SEA\\_May2021\\_Musa-Nababan\\_Measures-Undertaken-to-Address-Counterfeiting-and-Piracy-by-Indonesia.ppt.pdf](https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2021/IPKey-SEA_May2021_Musa-Nababan_Measures-Undertaken-to-Address-Counterfeiting-and-Piracy-by-Indonesia.ppt.pdf).

<sup>437</sup> Indonesia, Reglamento Conjunto N.º 14/1985/N.º 26 de 2015 sobre la implementación de la cancelación de contenidos o derechos del usuario ante la infracción del derecho de autor o derechos conexos en sistemas electrónicos. Véase Simanjuntak, *op. cit.*, p. 61.

<sup>438</sup> Indonesia, Circular del Ministro de Comunicación e Información de Indonesia N.º 5 de 2016 sobre limitaciones y responsabilidades de los proveedores de plataformas y comerciantes que utilizan el sistema de comercio electrónico cuyo contenido es generado por el usuario. Véase Simanjuntak, *op. cit.*, p. 6.

<sup>439</sup> *Ibid.*

política también incluía un procedimiento de notificación y retirada que no ha sido eficaz contra los infractores reincidentes o a gran escala.<sup>440</sup>

La reglamentación gubernamental N.º 80 de 2019 referente al comercio a través de sistemas electrónicos actualizó posteriormente la política de exención de responsabilidad, y agregó que las plataformas de comercio electrónico (operadores de sistemas electrónicos) no serán responsables si eliminan los enlaces y la información electrónica ilegal inmediatamente después de tener conocimiento o constatación real de su existencia.<sup>441</sup>

### C. Emiratos Árabes Unidos

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de los Emiratos Árabes Unidos no incluye ninguna disposición sobre la responsabilidad accesoria de los PSSI en caso de infracción del derecho de autor, ni dispone de un sistema para retirar el contenido infractor o bloquear el acceso a dicho contenido.

En cambio, este país ha optado por un enfoque denominado “horizontal”, según el cual la Autoridad Gubernamental de Reglamentación de las Telecomunicaciones y el Entorno Digital (TDRA) tiene potestad para bloquear los sitios web infractores a los usuarios emiratíes.

Una de las diecisiete categorías de contenido prohibido<sup>442</sup> que puede dar lugar al bloqueo de un sitio web prevé la difusión de contenido infractor de los derechos de autor y los derechos conexos, como “proporcionar y publicar películas, fotos, dibujos, libros, programas y juegos electrónicos, canales de televisión y radio codificados y otros derechos de propiedad intelectual en formato electrónico.” (Traducción oficiosa de la Oficina Internacional<sup>443</sup>).

Para bloquear el acceso al contenido infractor, la TDRA deberá notificar a los proveedores de acceso emiratíes en virtud de las normas de la Política de Reglamentación de la Gestión de Acceso a Internet, que permite a estos proveedores

---

<sup>440</sup> Zultan, R. “Indonesia’s ongoing struggle against IP infringement offline and online.” *tilleke.com*. 30 de mayo de 2022. En Internet. 21 de octubre de 2022. [https://www.tilleke.com/print-insight/?post\\_id=61386&print=1](https://www.tilleke.com/print-insight/?post_id=61386&print=1).

<sup>441</sup> Ali, A.H., *et al.* “Responsibilities of e-commerce platforms providers against copyright infringement in Indonesia: Comparison with Singapore.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Vol. 642 (2021): p. 2.

<sup>442</sup> La definición de contenido prohibido que se encuentra en la Política de Reglamentación de la Gestión de Acceso a Internet de la TDRA es amplia e incluye “contenido inaceptable y contrario al interés, la moral y el orden públicos, la seguridad pública y nacional, la moral islámica o cualquier asunto prohibido según las leyes, los reglamentos, los procedimientos o los requisitos aplicables en los Emiratos Árabes Unidos, tal y como se describe más específicamente en cada una de las Categorías de Contenido Prohibido.” (Traducción oficiosa de la Oficina Internacional). Véase TDRA. “Internet Access Management: Regulatory Policy” *tdra.gov.ae*. 19 de abril de 2017, arts. 3-1. En Internet. 21 de octubre de 2022. <<https://tdra.gov.ae/en/About/tdra-sectors/telecommunication/regulatory-affairs-department/regulations-and-ruling#regulations>>.

<sup>443</sup> *Ibid.*, anexo.

identificar y filtrar automáticamente el contenido prohibido. También pueden prohibir el acceso en función de un informe emitido por un miembro del público.<sup>444</sup>

En caso de que existan contenidos incluidos en una categoría de contenido prohibido, la TDRA tiene la exclusiva y absoluta discreción de notificar a los responsables de la gestión de cualquier sitio web que este ha sido o será bloqueado de acuerdo con la política.<sup>445</sup> Siempre que sea posible, el bloqueo no afectará al contenido que no esté prohibido<sup>446</sup> que permanecerá vigente hasta que se elimine el contenido infractor.

Además, según el Decreto-Ley Federal N.º 34 de 2021, subir contenido prohibido y abstenerse de eliminarlo se considera un delito punible.<sup>447</sup>

#### D. Uruguay

En Uruguay no existe una legislación que establezca el rol de los intermediarios de Internet en caso de que sus usuarios suban contenido prohibido, como tampoco un régimen especial para el contenido infractor de los derechos de autor. En este caso, se aplicarán las normas generales de la responsabilidad, el derecho civil y penal.

No obstante, existen dos mecanismos para obligar a los PSSI a impedir el acceso a las señales de radiodifusión televisiva en los casos de retransmisión ilegal en línea.

El primero es el que estableció la Ley N.º 19.924<sup>448</sup> que obliga a los PSSI a bloquear el acceso a contenido ilícito en caso de difusión no autorizada por Internet con fines comerciales de servicios de televisión de pago por visión. La ley facultó a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) a impedir que los usuarios de Uruguay accedan a la retransmisión en determinadas circunstancias.

La ley establece un sistema de notificación y retirada iniciado por el titular del derecho, que debe presentar una denuncia fundada bajo declaración jurada ante la URSEC, debiendo agregar los recaudos técnicos y jurídicos que la respalden.<sup>449</sup>

La URSEC podrá tomar medidas transitorias mediante el bloqueo de la señal infractora solo si es estrictamente necesario para impedir el acceso desde el territorio nacional, previa notificación a los infractores denunciados.<sup>450</sup>

Si la difusión se realiza a través de una plataforma o un servicio de intermediación de Internet independiente, el proveedor del servicio recibirá toda la información pertinente sobre la presunta infracción, como los URL (localizador uniforme de recursos) o las direcciones IP identificados. En este caso, el proveedor del servicio deberá, de forma expedita y dentro de sus posibilidades técnicas, actuar para bloquear los URL o la dirección IP identificados con carácter provisorio, revocable y por un plazo no mayor

---

<sup>444</sup> *Ibid.* art. 3-3.

<sup>445</sup> *Ibid.*

<sup>446</sup> *Ibid.*, art. 4-1-1.

<sup>447</sup> Véase: <https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/cyber-safety-and-digital-security>.

<sup>448</sup> Uruguay, Ley N.º 19.924, *op. cit.*, art. 712.

<sup>449</sup> *Ibid.*, párrafo. 3.

<sup>450</sup> *Ibid.*, párrafo. 4.

a 30 días. La orden para bloquear el acceso a la señal infractora estará sujeta a revisión judicial.

Por último, existe una norma que se aplica cuando la retransmisión ilegal se realiza a través de un sitio web o una plataforma que no actúa como PSSI independiente pero cuya finalidad principal es la retransmisión de programación, televisión o series (es decir, sitios diseñados y utilizados para retransmitir contenido no autorizado).

En ese caso, la URSEC podrá exigir directamente al sitio web o plataforma que bloquee inmediatamente el contenido infractor. También puede solicitar a los proveedores de acceso a Internet que impidan el acceso desde el territorio nacional a las direcciones IP o los URL utilizados. El carácter de esta autoridad concedida a la URSEC es provisorio, revocable y por un plazo no mayor a 30 días.

El segundo mecanismo es un régimen especial administrativo de bloqueo en línea que se aprobó en la Ley N.º 20.075 del 20 de octubre de 2022 sobre rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal respecto del año 2021.<sup>451</sup> Faculta a la URSEC para bloquear, en tiempo real, la retransmisión ilegal en línea de eventos deportivos, ordenando a los proveedores de acceso a Internet que bloqueen el acceso a estos contenidos a los usuarios de Uruguay.<sup>452</sup>

Para beneficiarse de este mecanismo, los titulares de derechos (principalmente los organismos de radiodifusión) deben inscribirse en la URSEC, acreditando la titularidad de los derechos de transmisión.<sup>453</sup>

Tras la presentación de una denuncia, la URSEC podrá dictar medidas cautelares siempre que se inhabilite el acceso mientras dure el evento en cuestión. Esto es independiente del nombre de dominio o la dirección IP utilizados por el infractor y sin necesidad de emitir una nueva orden (en caso de que el infractor cambie a un sitio espejo). Estas medidas deben notificarse al PSSI.

La ley también establece un proceso de notificación privada en tiempo real, sin intervención de la URSEC. Los titulares de derechos pueden denunciar la retransmisión ilícita directamente a los proveedores de acceso a Internet. En un plazo de 30 minutos después de recibir una notificación, desactivan el acceso o eliminan las emisiones ilegales. Posteriormente, el PSSI deberá informar a la URSEC de las medidas adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.

El proveedor de acceso no debe impedir la entrada a páginas o sitios web que alojen contenidos y servicios legales. El bloqueo debe afectar únicamente a las retransmisiones ilegales de eventos deportivos en directo por Internet. Los titulares de derechos que

---

<sup>451</sup> Uruguay, Ley N.º 20.075 del 20 de octubre de 2022, sobre rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal para el ejercicio 2021; véase <https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/ley-20075>.

<sup>452</sup> *Ibid.*, art. 233.

<sup>453</sup> El procedimiento se inicia con una denuncia del titular del derecho fundada bajo una declaración jurada ante la URSEC, que debe incluir los recaudos técnicos y jurídicos que la respaldan. La URSEC podrá tomar medidas transitorias para evitar la difusión de la señal infractora bloqueándola solo en la medida estrictamente necesaria para impedir el acceso desde el territorio nacional, previa notificación a quienes sean denunciados como infractores.



promuevan el bloqueo sin motivos justificados o sin cumplir con la ley son plausibles de multas administrativas.

## **IV. Recomendaciones para promover el uso de los derechos de PI en el entorno digital en Chile, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, y el Uruguay**

### **1. Adaptación de la legislación nacional sobre derechos de autor al entorno digital**

Los cuatro países seleccionados cuentan con una base jurídica sólida en su legislación para proteger los derechos de PI en la era digital. Por lo tanto, no es necesario hacer un cambio radical. Sin embargo, se recomienda que consideren la posibilidad de introducir pequeñas modificaciones en sus leyes nacionales de derechos de autor para mejorar la seguridad jurídica, así como la protección de los derechos de autor y los derechos conexos para el uso digital de obras u otra materia.

#### **A. Acciones recomendadas en materia de derechos de autor y sistemas de registro**

En los Emiratos Árabes Unidos, la introducción de pequeños cambios sistemáticos mejoraría la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos; por ejemplo, separar con mayor claridad las normas sobre derechos de autor de las que regulan los derechos conexos. También resultaría útil crear secciones específicas en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos para la observancia y para el régimen de gestión colectiva de derechos.

Uruguay se beneficiaría enormemente de la actualización de su Ley de Derechos de Autor para incorporar los avances tecnológicos. Dicha ley, se publicó originalmente en 1937 y se actualizó sustancialmente en 2003. Sin embargo, sería útil renovar la legislación nacional para hacer frente a la nueva realidad dominada por la explotación en línea de obras y materia protegida.

La definición de obra en la legislación es adecuada en los cuatro países, pero sería útil incluir expresamente que solo se protegen las obras originales.

Aunque es posible interpretar que las legislaciones de Chile, los Emiratos Árabes Unidos y Uruguay<sup>454</sup> incluyen implícitamente esta condición, la incorporación de la originalidad como requisito explícito mejoraría la seguridad jurídica. Permitiría proteger cualquier creación que no se mencione expresamente en la ley, siempre que sea original.

El lugar ideal para ello se encuentra en la definición de “obra”, o en la lista de obras protegidas si no existe tal definición en la legislación nacional, como en Uruguay. Establecer la originalidad como criterio para que la obra esté protegida por la ley en un sistema de lista abierta es probablemente la mejor manera de hacer frente a la evolución tecnológica.

---

<sup>454</sup> Por ejemplo, el artículo 1 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de los Emiratos Árabes Unidos define la obra como producción “innovadora”, y el artículo 5 de la Ley de Derechos de Autor del Uruguay protege “toda producción del dominio de la inteligencia.”

Esto es especialmente útil para proteger nuevas obras en formato digital, como videojuegos y otros juegos electrónicos o aplicaciones móviles. En algunos países, como los Emiratos Árabes Unidos, la ley menciona específicamente las aplicaciones o aplicaciones inteligentes (no los videojuegos), pero dado que Chile, los Emiratos Árabes Unidos y Uruguay siguen expresamente un sistema de lista abierta, todo videojuego o aplicación móvil original puede incluirse fácilmente como obra protegida, aunque la ley no mencione expresamente estas creaciones.

Por lo tanto, la mención explícita de los videojuegos y otros juegos electrónicos y aplicaciones móviles en la lista de obras protegidas en países como Chile o Uruguay no es imprescindible, pero podría ser útil cuando se actualice la legislación. La mención expresa de los programas informáticos en ambas legislaciones nacionales refuerza la protección adecuada. Lo mismo ocurre con los videojuegos en los Emiratos Árabes Unidos. Según la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, esto podría incluirse fácilmente en la lista de obras mediante decisión ministerial.

Indonesia no tiene un claro sistema de lista abierta de obras protegidas por derechos de autor y tampoco utiliza la originalidad como criterio de protección ya que la ley también protege las obras artesanales. Sin embargo, la actual lista de obras protegidas menciona expresamente los videojuegos como obra protegida, lo que garantiza la plena protección en este caso.<sup>455</sup>

La inclusión de las aplicaciones móviles es más problemática, pero estas obras pueden obtener protección indirecta en Indonesia mediante la aplicación de las normas vigentes para videojuegos y programas informáticos.

En cualquier caso, la adopción de un sistema de lista abierta, junto con la originalidad como criterio expreso de protección, es la mejor solución para proteger las categorías de obras que surjan de la futura tecnología. Los productos artesanales siempre podrían protegerse con un derecho *sui generis*, como ocurre con algunos aspectos de la protección de bases de datos en los Estados miembros de la Unión Europea.

La originalidad y un mecanismo de lista abierta es también la mejor solución para considerar como obras protegidas los diseños o creaciones de moda. De hecho, estos se mencionan expresamente como materia protegida en Chile y en Indonesia, aunque su inclusión como obras protegidas no está tan clara en Uruguay<sup>456</sup> o en los Emiratos Árabes Unidos.<sup>457</sup> En el caso de los diseños de moda originales, el principio de protección acumulativa de los derechos de autor y de los derechos sobre los diseños industriales es la mejor garantía para los creadores.<sup>458</sup>

---

<sup>455</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 40.

<sup>456</sup> La ley protege los diseños o creaciones que tengan valor artístico en lo que se refiere al diseño de la vestimenta, pero solo si no están protegidos por la legislación sobre propiedad industrial, como ocurre a menudo.

<sup>457</sup> Los diseños de moda podrían considerarse, en virtud del artículo 2.8- de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de los Emiratos Árabes Unidos como “obras de dibujo con líneas de colores”. (Traducción oficiosa de la Oficina Internacional.)

<sup>458</sup> Uruguay, Ley N.º 17.164, *op. cit.*, art. 87.

También se recomienda, como ocurre en Chile<sup>459</sup> y los Emiratos Árabes Unidos,<sup>460</sup> que se defina claramente la relación entre la titularidad de los derechos de autor sobre la obra (*corpus mysticum*) y la del objeto material que contiene la copia original (*corpus mechanicum*).

Esto implica declarar en la ley que el comprador del bien físico (el “soporte” físico) en el que se ha incorporado la obra no tendrá, salvo pacto en contrario, ningún derecho patrimonial de explotación sobre las obras incorporadas.

Sin embargo, para tener en cuenta de forma adecuada los derechos de propiedad del comprador, la ley también debería establecer que con las obras de arte visuales (dibujos, pinturas, cuadros, esculturas, entre otros), se presume que el propietario del soporte físico tiene el derecho de exposición al público, salvo pacto en contrario.

En cuanto al registro, los cuatro países cuentan con un sistema público de registro de obras y otra materia protegida. En algunos casos (Chile, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia) el proceso puede realizarse a través de un sitio web público o una plataforma electrónica, por lo que ya pueden considerarse registros digitales operativos. Sin embargo, Uruguay no dispone de un registro digital operativo de derechos de autor y derechos conexos sino que la inscripción debe realizarse personalmente en la oficina de registro.<sup>461</sup>

Es aconsejable realizar la transición completa a un registro digital público de derechos de autor, quizá complementado por registros privados. Por supuesto, los registros digitales, al igual que los tradicionales en soporte papel, deben continuar sin ser obligatorios, como ocurre actualmente en los países seleccionados.

La transición de los registros de derechos de autor a un formato digital permite registrar rápidamente todo tipo de obras (literarias, audiovisuales, musicales, programas informáticos, videojuegos, aplicaciones móviles, entre otras) desde cualquier lugar del mundo, generando una huella digital única que crea automáticamente una prueba de propiedad y una fecha de creación que podría utilizarse en procedimientos judiciales. También permite registrar diferentes versiones de la misma obra, con un certificado único para cada una. Esto ayuda a la explotación de las obras digitales, especialmente cuando se enfrentan a mercados no convencionales, como los TNF derivados de obras protegidas por derechos de autor u otra materia.<sup>462</sup>

Es importante distinguir entre los registros electrónicos de derechos de autor accesibles y el registro automático. Aunque el registro pueda realizarse en línea, es necesaria la intervención humana. El proceso debe realizarse sin oposición, pero el responsable de la oficina de derechos de autor debe decidir sobre cualquier solicitud y denegar la inscripción de contenidos y obras no protegibles, o de materia ya registrada o que claramente no pertenezca al solicitante.

---

<sup>459</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 37.

<sup>460</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 13.

<sup>461</sup> Véase <https://www.gub.uy/tramites/registro-derechos-autor>.

<sup>462</sup> En la respuesta de Indonesia a la encuesta se indicó que la situación ideal sería contar con una vía clara para registrar derechos de PI multirregionales con un costo asequible, especialmente para los nuevos actores del mundo empresarial en fase de desarrollo.

## B. Acciones recomendadas en materia de derechos patrimoniales

En algunos países, la introducción de pequeñas modificaciones en la definición de derechos patrimoniales ayudaría a esclarecer la ley, reforzando así la seguridad jurídica. Para empezar, es mejor establecer un derecho patrimonial general a explotar la obra de cualquier modo o forma, como es el caso en Chile, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.<sup>463</sup>

También es preferible enumerar cuatro derechos fundamentales compuestos por diferentes modalidades de explotación de la obra, en lugar de limitarse a acumular diferentes ejemplos sobre cómo explotar dicho material en la legislación nacional de derechos de autor.<sup>464</sup>

De esta manera, la legislación nacional podría reconocer el derecho a autorizar la reproducción de la obra en cualquier forma, la distribución de originales o copias de la misma (incluidos su alquiler y préstamo, que se consideran mejor como subespecies de distribución por un tiempo limitado, con o sin ánimo de lucro), su comunicación al público en cualquier forma (citando diferentes ejemplos en el marco de una lista abierta), y su traducción, adaptación o transformación.

Los conceptos de reproducción, distribución, comunicación al público y transformación deben definirse cuidadosamente en la legislación nacional de derechos de autor, como ocurre en Chile<sup>465</sup> y, con menor precisión, en los Emiratos Árabes Unidos,<sup>466</sup> Indonesia<sup>467</sup> y Uruguay.<sup>468</sup> Sería beneficioso incluir una cláusula expresa para ampliar, *mutatis mutandis*, a los derechos conexos las definiciones de los derechos de reproducción, distribución y comunicación.

En algunos casos, la legislación nacional mejoraría con pequeños cambios en la definición del concepto de derecho patrimonial. En Uruguay, se recomienda que la Ley de Derechos de Autor incluya una disposición específica sobre los actos de reproducción transitorios y accesorios realizados durante la puesta a disposición de la obra en las redes de comunicación. Esto podría lograrse creando una excepción específica sobre las limitaciones, como ocurre en los demás países seleccionados.

Con respecto a los derechos conexos, los cuatro países reconocen derechos patrimoniales exclusivos a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales, los productores de grabaciones sonoras/fonogramas y los organismos de radiodifusión. Se recomienda que Indonesia se adhiera a la Convención de Roma. El país forma parte del

---

<sup>463</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 17.

<sup>464</sup> Esto es especialmente importante con respecto al derecho de comunicación al público, que suele tener muchas manifestaciones, como las interpretaciones o ejecuciones públicas en directo, la exposición al público de obras audiovisuales, la radiodifusión por medios inalámbricos, la radiodifusión por satélite, la transmisión por hilo, cable o fibra óptica, la retransmisión, la exposición al público de obras de arte o la puesta a disposición en línea.

<sup>465</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 5.

<sup>466</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 1 no define los derechos sino los conceptos de reproducción y comunicación al público.

<sup>467</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 1 no define los derechos sino los conceptos de reproducción, comunicación al público y distribución.

<sup>468</sup> Uruguay, Ley de Derechos de Autor, *op. cit.*, art. 2 describe el acto de reproducir, distribuir, traducir y comunicar al público, pero las definiciones no son tan generales como en la legislación de Chile.

WPPT y del Acuerdo sobre los ADPIC, pero los derechos, aunque similares, no son iguales en los tres tratados, sobre todo en lo que hace a los derechos de los organismos de radiodifusión y el principio de trato nacional.

De los cuatro países, solo Uruguay no reconoce los derechos exclusivos de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales. Por lo tanto, se recomienda que se adhiera al consenso internacional y reconozca los derechos exclusivos previstos para ellos en el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones o Ejecuciones Audiovisuales.

En el caso de las interpretaciones o ejecuciones en directo o no fijadas, esto implica que el artista intérprete o ejecutante debe tener el derecho exclusivo de autorizar la fijación de su actuación y de su comunicación (en directo) al público, incluida su radiodifusión.

En lo que respecta a las interpretaciones o ejecuciones fijadas, las asambleas legislativas de cada país deberían conceder los derechos de reproducción, de distribución (incluido el derecho de alquiler) y de puesta a disposición en las redes de comunicación en línea, de forma que el público pueda acceder a la interpretación o ejecución fijada desde el lugar y en el momento que desee.<sup>469</sup>

En lo atinente a la radiodifusión y otras formas de comunicación al público de interpretaciones o ejecuciones (ya) fijadas, las asambleas legislativas de cada país deberían optar por un derecho exclusivo o por un derecho a una remuneración equitativa. La ley podría establecer un derecho de remuneración equitativa o exclusiva solo para determinados casos (es decir, la radiodifusión), o simplemente negar la existencia de un derecho para el artista intérprete o ejecutante de obras audiovisuales en esos casos. Todas estas posibilidades están contempladas en el Tratado de Beijing.<sup>470</sup>

El Tratado también reconoce algunos derechos morales a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales,<sup>471</sup> que deberían incluirse al momento de adaptar la legislación nacional, si ello ocurriera.<sup>472</sup>

Por último, los países seleccionados no reconocen un derecho conexo al productor de las primeras fijaciones de películas y otras obras o interpretaciones o ejecuciones audiovisuales. Este derecho existe en los Estados miembros de la Unión Europea<sup>473</sup> pero no está amparado por un tratado multilateral internacional; en muchos países, los productores cinematográficos o audiovisuales son considerados titulares originales de los derechos de autor de la obra audiovisual, mientras que, en otros, solo se benefician de una presunción contractual de cesión de derechos por parte de los autores.

---

<sup>469</sup> Tratado de Beijing, *op. cit.*, arts. 7-10.

<sup>470</sup> *Ibid.*, art. 11.

<sup>471</sup> *Ibid.*, art. 5.

<sup>472</sup> El derecho de integridad contemplado en la legislación uruguaya a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales podría complementarse con el derecho al reconocimiento de su nombre en la fijación de las interpretaciones o ejecuciones, salvo cuando la omisión venga dictada por la forma en que se utilizan (por ejemplo, interpretación o ejecución utilizada en un anuncio de televisión).

<sup>473</sup> Unión Europea, Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos del derecho de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (Directiva sobre la Sociedad de la Información), arts. 2.d) y 3.d).

Se aconseja a los países seleccionados que adopten este derecho conexo ya que refuerza la seguridad jurídica y otorga a los productores de obras audiovisuales el control sobre las copias de las primeras fijaciones de obras cinematográficas u otras obras audiovisuales. Esto suele hacerse concediendo al productor de la obra audiovisual un derecho exclusivo para autorizar o prohibir la reproducción, distribución y comunicación al público de la primera fijación y de las copias de ésta.

### C. Acciones recomendadas en materia de excepciones y limitaciones

Los usos de las obras y material protegido en la lista de excepciones y limitaciones autorizadas por la ley están estrechamente ligados a la legislación nacional, pero naturalmente existen variaciones en los cuatro países seleccionados.

Los tratados internacionales multilaterales permiten enunciar algunas recomendaciones (con la interpretación de las asambleas legislativas de cada país según las normas constitucionales) que podrían equilibrar la protección de la propiedad intelectual y de otros derechos e intereses fundamentales.

En primer lugar, sería aconsejable incorporar la regla de los tres pasos como norma de interpretación para las autoridades judiciales o administrativas nacionales de Chile, Indonesia y Uruguay.

Para ello, es esencial que se convierta en una regla de los dos pasos, como en los Emiratos Árabes Unidos. Las asambleas legislativas de cada país deben aplicar el primer criterio (“ciertos casos especiales”), con una lista de excepciones y limitaciones redactada de forma detallada y sólo para usos específicos y no indiscriminados de obras y material protegido.

Esto podría lograrse estableciendo por ley que las excepciones y limitaciones nacionales existentes no deben interpretarse de forma que entren en conflicto con la explotación normal de la obra o causen un perjuicio injustificado de los intereses legítimos del autor.

En particular, se recomienda que Uruguay actualice la lista de excepciones y limitaciones de la Ley de Derechos de Autor para adaptarla a la evolución de la tecnología y a las nuevas necesidades de la sociedad.

En concreto, se aconseja incluir una limitación que permita la reproducción (incluidas las reproducciones digitales) de obras realizadas sin ánimo de lucro y con fines de investigación o conservación, si la reproducción la realizan museos, bibliotecas, instituciones culturales y científicas, archivos o instituciones similares. Según se informa, estas copias se realizan en la práctica, pero sin suficiente respaldo jurídico.<sup>474</sup>

Además de la excepción ya establecida para las personas con discapacidad visual de conformidad con el Tratado de Marrakech, también sería aconsejable incluir en la legislación uruguaya una limitación más general para los actos de reproducción y comunicación al público realizados en beneficio de personas con discapacidad, para usos

---

<sup>474</sup> Parada, D.R. “El derecho de autor en el entorno web: prácticas y servicios bibliotecarios bajo las limitaciones y excepciones de la ley, el caso uruguayo”. *Informatio*. Vol. 25, N.º 1 (2020): p. 148.

no comerciales y en ciertas condiciones, como por ejemplo, exigir que esté directamente relacionada con la discapacidad y en la medida en que esta lo requiera.<sup>475</sup>

Se recomienda una disposición adicional para permitir la reproducción y comunicación de obras y otro material con fines ilustrativos para la enseñanza o la investigación científica, en la medida en que estén justificadas por su finalidad no comercial y siempre que se indique la fuente y el nombre del autor.<sup>476</sup> Esta excepción ha sido adoptada en numerosas jurisdicciones de todo el mundo, en muchas de las cuales se han redactado condiciones específicas para que la limitación sea admisible o para que las instituciones de enseñanza o administraciones públicas paguen un derecho de remuneración equitativa a los autores y titulares de derechos conexos.<sup>477</sup>

Por último, se sugiere que la legislación de Uruguay incluya limitaciones específicas adaptadas a los programas informáticos y las bases de datos.

Con respecto a la lista nacional de excepciones y limitaciones que ya existe en los países seleccionados, en el contexto de este estudio son especialmente importantes las limitaciones vinculadas al Tratado de Marrakech.

Chile, Indonesia y Uruguay han ratificado el Tratado, y los Emiratos Árabes Unidos se han adherido a él.<sup>478</sup> El Tratado de Marrakech incluye excepciones y limitaciones para la utilización nacional y transfronteriza de determinadas obras publicadas en formatos accesibles para personas ciegas o con discapacidad visual. En algunos casos, esto incluye formatos digitales.<sup>479</sup>

También incluye una garantía para que las partes contratantes velen por que, cuando proporcionen protección jurídica y recursos adecuados contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas, ello no impida a las personas beneficiarias disfrutar de las limitaciones y excepciones previstas en el tratado.<sup>480</sup>

Los Emiratos Árabes Unidos han adaptado su legislación nacional al tratado,<sup>481</sup> mediante la regulación de la creación de ejemplares en formato accesible y el establecimiento de determinadas condiciones para que la persona beneficiaria y las entidades acreditadas

---

<sup>475</sup> Unión Europea, Directiva 2001/29/CE (Directiva sobre la Sociedad de la Información), *op. cit.*, art. 5.3.b).

<sup>476</sup> *Ibid.*, art. 5.3.

<sup>477</sup> España, Real Decreto Legislativo 1/1999, de 12 de abril de 1997, sobre la Ley de propiedad intelectual, art. 34.4; véase <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>.

<sup>478</sup> Chile ratificó el Tratado de Marrakech el 10 de mayo de 2016, con entrada en vigor el 30 de septiembre de 2016; Indonesia lo ratificó el 28 de enero de 2020, con entrada en vigor el 28 de abril de 2020, y el Uruguay lo ratificó el 1 de diciembre de 2014, con entrada en vigor el 30 de septiembre de 2016. Los Emiratos Árabes Unidos se adhirió al tratado el 15 de octubre de 2014 y entró en vigor el 30 de septiembre de 2016. Véase [https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search\\_what=C&treaty\\_id=843](https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=843).

<sup>479</sup> Tratado de Marrakech, *op. cit.*, art. 4.1. A).

<sup>480</sup> *Ibid.*, art. 7.

<sup>481</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 23.

puedan acceder a ellos.<sup>482</sup> El reglamento de ejecución de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece ciertas condiciones adicionales.<sup>483</sup>

En Uruguay, el Tratado de Marrakech se implementó expresamente mediante un decreto que completa el artículo 45.12 de la Ley de Derechos de Autor.<sup>484</sup>

Sin embargo, los dos países restantes no han adoptado plenamente el contenido del Tratado, por lo que se recomienda que adapten la legislación nacional para ajustarse a sus disposiciones.

A pesar de haber incorporado el texto del Tratado a su legislación nacional, Chile no modificó la ley, que sigue incluyendo una norma anterior a la ratificación del Tratado de Marrakech. La asamblea legislativa debe completarla y aplicarla para que sea válida.<sup>485</sup>

En Indonesia, se aprobó el mecanismo de implementación detallado para adaptar la legislación nacional a las principales disposiciones del Tratado, incluidos los usos digitales de las obras publicadas, pero su Ley sobre el Derecho de Autor, al igual que en el caso de Chile, incluye una disposición anterior a la ratificación del Tratado de Marrakech.<sup>486</sup>

En general, otras excepciones y limitaciones nacionales relacionadas con los usos digitales coinciden con las normas sobre derechos de autor, y en concreto, con la regla de los tres pasos establecida en los tratados internacionales.

De hecho, muchas de las excepciones y limitaciones nacionales presentes en los países seleccionados se inspiran en el Convenio de Berna, incluidas las que se refieren a citas o resúmenes de prensa,<sup>487</sup> ilustración con fines de enseñanza<sup>488</sup> y licencias obligatorias relativas a la radiodifusión y la comunicación secundaria por altavoces o instrumentos análogos.<sup>489</sup>

No obstante, existe una excepción de uso libre en el artículo 43.d de la Ley sobre el Derecho de Autor de Indonesia que excluye de los casos que se consideran infracción “la producción y distribución del contenido protegido por derechos de autor a través de tecnologías de la información y medios de comunicación que no sean comerciales o lucrativos para el autor o las partes vinculadas, o cuando el Autor no exprese objeción

---

<sup>482</sup> *Ibid.* art. 23.3 establece que “con el fin de elaborar ejemplares en formato accesible, el Reglamento de Ejecución del presente Decreto-Ley especificará las condiciones y controles que deberán cumplir los organismos autorizados”. (Traducción oficiosa de la Oficina Internacional.)

<sup>483</sup> Emiratos Árabes Unidos, Reglamento de ejecución, *op. cit.*, art. 16.

<sup>484</sup> Uruguay, Ley N.º 19.262 del 29 de agosto de 2014 sobre la aprobación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso; véase <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/457964>, y el Decreto N.º 295/017 del 24 de octubre de 2017; véase <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/295-2017>.

<sup>485</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 71.C. Chile incorporó el Tratado de Marrakech a la legislación nacional mediante el Decreto N.º 155 del 14 de febrero de 2017; véase <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1100198>.

<sup>486</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 44.(2)

<sup>487</sup> Convenio de Berna, *op. cit.*, art. 10.1).

<sup>488</sup> *Ibid.*, art. 10.2).

<sup>489</sup> *Ibid.*, art. 11 bis.2).



alguna a la fabricación y distribución en cuestión.” (Traducción oficiosa de la Oficina Internacional.)

Esto podría plantear un problema, ya que permite la distribución indiscriminada de obras y otro material en redes digitales solo a condición de que no haya intención comercial o lucrativa, lo cual entra en aparente contradicción con el Artículo 9.2) del Convenio de Berna (para los derechos de reproducción), el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, los artículos 10.1) y 2) del WCT, y el artículo 16.2) del WPPT.

En virtud de la regla de los tres pasos, una limitación para usos no comerciales solo es admisible si está prevista en la legislación nacional “para ciertos casos especiales” (es decir, copia para uso privado,<sup>490</sup> y reproducción para archivos, bibliotecas y otras instituciones educativas o culturales, entre otros).

Sin embargo, la redacción del artículo 43.d establece una limitación indiscriminada para reproducir y comunicar al público cualquier obra o materia protegida con la única condición de que el uso no sea comercial. Además, es probable que esto cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los autores ya que, si un tercero pone la obra a disposición en Internet de forma gratuita, pero sin permiso del titular del derecho, el usuario no tendrá ningún incentivo para adquirir el contenido siempre y cuando el titular de los derechos de autor lo ponga a disposición.

Por un motivo similar, excluir de los supuestos de infracción del derecho de autor el caso de que el autor no exprese objeción a la fabricación o difusión de contenidos protegidos por derechos de autor a través de tecnologías de la información y los medios de comunicación, incluso para usos comerciales, probablemente no sea compatible con la regla de los tres pasos presente en los convenios internacionales.

Esto afecta la explotación normal de la obra porque los derechos exclusivos del autor tienen carácter preventivo, en el sentido de que cualquier reproducción o comunicación al público de una obra por un tercero requiere el consentimiento previo del autor.<sup>491</sup> Toda utilización de una obra por un tercero sin dicho consentimiento debe considerarse, en principio, una infracción a los derechos de autor.

Por el contrario, la consecuencia práctica del artículo 42.d es que el *ius prohibendi* del titular del derecho queda excluido en las redes digitales. El titular del derecho solo puede actuar con posterioridad, oponiéndose a los usos comerciales específicos no autorizados, en lugar de estar facultado a excluir pasivamente a otros de esos usos no autorizados, debido al carácter preventivo de los derechos patrimoniales exclusivos.

Una solución alternativa podría ser limitar el alcance de la excepción a ciertos usos de escasa importancia y no comerciales de la obra. Esto podría incluir usos digitales (en casos de contenido generado por el usuario). Pero el uso debe ser realmente de bajo interés para ser compatible con la norma internacional de la regla de los tres pasos que establecen el WCT, el Convenio de Berna, el WPPT y el Acuerdo sobre los ADPIC.

---

<sup>490</sup> Indonesia, Ley sobre el Derecho de Autor, *op. cit.*, art. 46 establece una disposición específica para la reproducción para uso personal de obras compatibles con la prueba del criterio triple de los convenios internacionales.

<sup>491</sup> Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia del Tribunal (Sala Tercera), *Soulier y Doke*, Asunto C-301/15, 16 de noviembre de 2016, párrafo 33.

#### D. Acciones recomendadas en materia de titularidad y cesión de derechos

La legislación de los cuatro países seleccionados difiere en cuanto a la norma de atribución de la titularidad en el caso de una obra creada para un empleador en el transcurso de una relación laboral (obra por contrato de cesión de derechos). La solución más equilibrada sería suponer que los derechos patrimoniales sobre la obra se transfieren exclusivamente al empleador, salvo pacto en contrario, y sin perjuicio de los derechos morales del empleado. También sería adecuada una solución similar cuando se trate de obras encargadas al autor por otra persona física o jurídica (por ejemplo, para ser integradas a una obra colectiva).

Esta presunción legal de cesión de los derechos patrimoniales a la persona en cuyo favor se realizó la obra, o al empleador, es especialmente útil cuando se trata de obras en el entorno digital, incluidos los programas informáticos, los videojuegos y las aplicaciones móviles.

Las normas aplicables a los contratos de cesión de derechos de autor y derechos conexos quedan prácticamente fuera del ámbito de aplicación de los principales convenios multilaterales. Incluso cuando existen fuertes vínculos regionales, como en la Unión Europea, los contratos o las licencias que transfieren derechos o autorizan usos, en su mayor parte, no han sido objeto de armonización.

Esto se debe en parte a que los legisladores nacionales normalmente son reticentes a transigir, en el ámbito internacional o regional, en lo que atañe a las normas de contratación, pero también a que no existe un consenso a escala internacional sobre cómo la ley debe hacer observar los contratos de derechos de autor y derechos conexos.

Los países con tradición de *droit d'auteur* tienden a establecer normas obligatorias para proteger al autor, al que consideran la parte más débil del contrato. En casos concretos, estas normas también se aplican parcialmente a los artistas intérpretes o ejecutantes. Sin embargo, los países de tradición anglosajona en materia de derechos de autor suelen proteger menos a los autores o artistas intérpretes o ejecutantes, permitiendo que se desarrolle el principio de libertad contractual.

Por lo tanto, en muchos sistemas jurídicos el autor puede ceder los derechos patrimoniales en su totalidad como una transferencia de propiedad a un tercero que, a su vez, adquirirá el derecho a autorizar o prohibir futuros actos de explotación de la obra como nuevo titular de los derechos de autor.<sup>492</sup>

En tales casos, el autor ya no puede ejercer control sobre la manera en que un tercero utiliza los derechos, aunque muchos sistemas jurídicos incluyen en la ley un derecho de rescisión. Se trata de un derecho inalienable que permite al autor revocar o rescindir la cesión en un plazo determinado. En ese caso, todos los derechos vuelven al autor.

Sin embargo, en la mayoría de los países con *droit d'auteur*, los derechos patrimoniales no pueden transferirse ni venderse en su totalidad, aunque el titular de los derechos de autor puede conceder licencias o transferir parcialmente sus derechos a terceros para

---

<sup>492</sup> Véase la publicación de la OMPI, "Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos", *op. cit.*, p. 20.

que lleven a cabo determinados actos de explotación de la obra, de forma exclusiva o no exclusiva.<sup>493</sup> Los derechos de autor siguen correspondiendo al titular.

En la práctica, muchas legislaciones permiten ambas alternativas. La legislación nacional permite al titular original de los derechos de autor o los derechos conexos ceder completamente o “vender” sus derechos a terceros (por ejemplo, un editor o productor). Estos, a su vez, volverán a ceder los derechos o simplemente concederán licencias de los contenidos a terceros. La ley también permite al titular de los derechos de autor celebrar acuerdos o licencias con usuarios finales para autorizar el ejercicio de algunos de sus derechos, de forma exclusiva o no exclusiva.

Debido principalmente a la ausencia de consenso internacional, este estudio no formulará recomendaciones específicas a los países seleccionados con respecto a las normas nacionales existentes en materia de transferencia o concesión de licencias de derechos de autor y derechos conexos.

Sin embargo, existe un conjunto de principios generales, o normas jurídicas obligatorias, que podría ser favorable incluir en la legislación nacional si la asamblea legislativa desea establecer un conjunto más completo de disposiciones para abordar los contratos sobre derechos de autor y derechos conexos.<sup>494</sup> Esto podría ser adecuado para países como Uruguay, en el que la regulación actual probablemente no alcanza a resolver las complejas cuestiones asociadas a la cesión de derechos de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes a los editores, productores y otros derechohabientes, en particular en el entorno digital.

Se parte de la base de que el principio de libertad contractual debe regir las transacciones de PI. Por lo tanto, corresponde a la asamblea legislativa nacional de los países seleccionados decidir si es necesario adaptar este principio para proteger a los autores, y si las normas obligatorias existentes deben modificarse o ampliarse.

También debe decidir si estas normas deben aplicarse únicamente a los autores que ceden sus derechos de autor, o si todas ellas, o algunas, deben aplicarse *mutatis mutandis* a los artistas intérpretes o ejecutantes (como ya han establecido Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos).

Normalmente, muchas legislaciones elaborarán un conjunto de normas generales, aplicables a todas las cesiones de derechos de autor y luego definirán diversas normas obligatorias o predeterminadas para los contratos más importantes, como los de edición, el de representación pública de la obra, el de producción audiovisual o el de autorización de uso de programas informáticos.

Una de las decisiones más importantes es determinar si los derechos patrimoniales de los autores pueden cederse, transferirse íntegramente o venderse en su totalidad a un tercero, como ocurre en Chile.

---

<sup>493</sup> *Ibid.*

<sup>494</sup> En la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea pueden encontrarse algunas aplicaciones prácticas de principios y normas jurídicas obligatorias. Véase Francia, *Code de la Propriété Intellectuelle*, *op. cit.*, arts. 130(1)-131(9), véase <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414>; o Alemania, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, arts. 29-41, véase <https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/>.

Es evidente que, si los derechos se pueden ceder definitivamente, vender o transferir íntegramente a terceros durante la vigencia del derecho (que tiene el mismo efecto económico), no se aplicarían las normas obligatorias que protegen al autor en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual. Por lo tanto, parece conveniente no autorizar la venta en su totalidad de los derechos, como ocurre actualmente en Indonesia, sino transferirlos temporalmente respetando ciertas normas obligatorias.

Del mismo modo, el acuerdo con el autor para ceder los derechos de todas sus obras futuras debería ser nulo, como sucede actualmente en Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. La ley también podría especificar una cantidad máxima de obras futuras que se transferirán, como sucede en los Emiratos Árabes Unidos, pero debería ser moderada.

Asimismo, para proteger a los autores y respetar su libertad fundamental de creación, la disposición que los obliga a no crear más obras en el futuro debe considerarse nula, tal como se establece actualmente en los Emiratos Árabes Unidos.

Ciertas secciones de las legislaciones nacionales de los cuatro países ya cuentan con algunas normas obligatorias, pero la redacción podría modificarse o completarse en casos concretos, o adoptarse cuando no exista una disposición específica en una legislación nacional sobre derecho de autor. Por ejemplo, los cuatro países ya tienen una norma que estipula que la cesión de derechos de autor solo es válida si se realiza por escrito. Sin embargo, algunas cesiones realizadas verbalmente podrían beneficiar al autor si pudieran probarse, por lo que solo deberían ser declarados anulables por el autor.

Algunos países, como Chile, establecen que, salvo estipulación en contrario, la licencia es exclusiva, lo cual resulta preferible para proteger a los titulares de derechos.

En lo que atañe al contenido del contrato, algunos países, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, estipulan que se debe indicar expresamente los derechos transferidos, la duración y el lugar de utilización. Sin embargo, si no se han enumerado los derechos patrimoniales, el contrato no debe considerarse nulo (ya que en algunos casos esto puede perjudicar al autor, no a la otra parte), aunque el alcance de los derechos transferidos pueda verse limitado por el principio de interpretación estricta.

Por lo tanto, el contrato debe interpretarse en el sentido de que solo transfiere los derechos necesarios para alcanzar su finalidad económica; por ejemplo, en el contrato de edición, si la obra solo va a publicarse en papel, la regla de interpretación debe ser que, por defecto, el editor solo adquirirá los derechos de reproducción y distribución, pero no el derecho de puesta a disposición del libro en Internet.

También es recomendable que la legislación nacional estipule que todos los derechos no cedidos explícitamente permanezcan en manos del autor, como sucede en los Emiratos Árabes Unidos, y restrinja la interpretación del contrato únicamente a los usos de la obra ya conocidos, impidiendo al autor ceder derechos para usos desconocidos de sus obras en el momento de la celebración del contrato.<sup>495</sup>

---

<sup>495</sup> Algunos países, entre ellos Alemania, permiten este tipo de contratos, pero el autor tiene derecho a una remuneración equitativa por separado cuando la otra parte contratante inicia un nuevo tipo de uso que era desconocido en el momento de celebrar el contrato. Véase Alemania, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, párrafo 31a. (1) y 32c. (1).

En cuanto a la concesión exclusiva de licencias, algunos de los países seleccionados, incluido Chile,<sup>496</sup> la ley estipula algunas obligaciones de explotación, con la posibilidad de dejar sin efecto la transferencia exclusiva si el licenciatario no cumple.<sup>497</sup>

En cuanto a la remuneración de los autores, los cuatro países tienen normas que garantizan el principio de remuneración proporcionada. En algunos casos, solo se contempla en contratos específicos (Chile). En otros, se incluye como principio general para todos los contratos (Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos). La norma debería aplicarse en especial cuando la remuneración se base exclusivamente en una suma fija.

El artículo 18 de la Directiva sobre el mercado único digital de la Unión Europea puede servir como guía para establecer el principio de la remuneración proporcionada.<sup>498</sup> Establece que los Estados miembros “garantizarán que, cuando los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes concedan licencias o cedan sus derechos exclusivos para la explotación de sus obras u otras prestaciones, tengan derecho a recibir una remuneración adecuada y proporcionada.”

Por lo tanto, si la remuneración que se acordó no se considera adecuada y proporcionada (es decir, si no es equitativa según criterios objetivos), el autor puede exigir a la otra parte que autorice la modificación del acuerdo para que se le conceda una remuneración equitativa.

Por lo general, se puede considerar que un contrato no es equitativo para el autor cuando existe una desproporción manifiesta entre la remuneración que se pactó inicialmente y los ingresos posteriores derivados de la explotación de las obras para la otra parte.<sup>499</sup> Para determinar si un contrato es abusivo, se deben sopesar todas las circunstancias. Los factores que se tienen en cuenta normalmente incluyen una referencia a lo que es habitual y justo en las relaciones comerciales,<sup>500</sup> y la duración, frecuencia e intensidad del uso.

Para garantizar el principio de remuneración adecuada y proporcionada es esencial que el autor tenga acceso a los datos sobre los ingresos que se generaron por la explotación de su obra. En tales casos, es aconsejable incluir una norma que establezca obligaciones de transparencia para la otra parte en el contrato. Dicha información debe facilitarse periódicamente, además de estar actualizada y abarcar todas las fuentes de ingresos pertinentes para el contrato y todos los modos de explotación incluidos en él.<sup>501</sup>

---

<sup>496</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 51.a).

<sup>497</sup> Por ejemplo, el autor puede rescindir el contrato total o parcialmente si la otra parte no explota suficientemente los derechos de autor de la obra en un plazo razonable después de la celebración del contrato, salvo que ello sea responsabilidad del autor. Países Bajos, Ley de 23 de septiembre de 1912, con las nuevas normas de derecho de autor, art. 25e.1; véase (en neerlandés) <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2022-10-01>.

<sup>498</sup> Unión Europea, Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.

<sup>499</sup> España, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 47.1.

<sup>500</sup> Alemania, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 32. (1).

<sup>501</sup> Unión Europea, Directiva sobre el mercado único digital, *op. cit.*, considerando 75.

E. Lo que se recomienda hacer (o no hacer) en relación con las nuevas cuestiones que se plantean en el entorno digital

Es posible que los nuevos interrogantes sobre la protección de los derechos de PI en el entorno digital creen incertidumbres. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los jueces de cada país pueden encontrar una solución simplemente aplicando las normas nacionales e internacionales existentes. Por lo tanto, parece prematuro tomar medidas legislativas para abordar específicamente las nuevas realidades en el ámbito nacional.

Por ejemplo, tanto en los cuatro países estudiados como en la mayor parte del mundo, la situación de las obras creadas por inteligencia artificial (IA) es incierta. Sin embargo, esto no crea una necesidad imperiosa de establecer normas al respecto. Las legislaciones nacionales de los países seleccionados están preparadas para resolver la cuestión aplicando las normas generales de autoría. Además, una solución adoptada en el ámbito nacional podría variar significativamente en función de la tradición jurídica en materia de derechos de autor.

En Chile y Uruguay, por ejemplo, es lógico adoptar el enfoque antropocéntrico de la autoría utilizado por muchos países de tradición civil. El principio general es que solo las creaciones humanas pueden ser originales y, por tanto, recibir protección por derecho de autor. Para estar protegida, la obra debe reflejar la personalidad del autor, e incluso cuando se ha relajado el requisito de originalidad para conceder la protección por derecho de autor a obras como programas informáticos o bases de datos, se siguen exigiendo opciones creativas libres que parecen incompatibles con los contenidos generados por inteligencia artificial.

Sin embargo, eso no significa que las creaciones de la IA no deban recibir ninguna protección jurídica. Puede crearse un derecho conexo *sui generis* si la asamblea legislativa de cada país lo considera necesario.<sup>502</sup> Este derecho no debe proteger la expresión de la obra en función de su originalidad, sino la inversión realizada por la empresa en la IA que se utilizó para crear el contenido.<sup>503</sup>

Sin embargo, otros países podrían atribuir la autoría y la protección por derecho de autor al contenido creado por IA simplemente al considerarlo una obra generada por computadora. Por lo general, esto implica atribuir la autoría a la persona física o jurídica con la que se han llevado a cabo las gestiones necesarias para la creación de la obra.

Una solución que no parece compatible con los principios establecidos en los tratados internacionales más importantes sobre derechos de autor, como el Convenio de Berna y el WCT, es crear una autoría electrónica que considere a la IA como autor de la obra. Dicha autoría electrónica<sup>504</sup> conlleva la necesidad de atribuir derechos a una entidad que no posee personalidad jurídica, lo que atentaría contra los principios esenciales del derecho. Asimismo, considerar a la IA una persona jurídica no resolvería el problema, sino que lo complicaría considerablemente.

---

<sup>502</sup> Palmela Fidalgo, V. y D. Antunes. "La protección de obras generadas por la inteligencia artificial en el derecho de autor europeo: entre la protección indirecta y a medida." *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Vol. 41 (2021): pp. 184-185.

<sup>503</sup> *Ibid.*, p. 190.

<sup>504</sup> *Ibid.*, pp. 186-187.

También existe incertidumbre en los cuatro países sobre el régimen jurídico de los activos virtuales en lo que respecta a los derechos de autor y los derechos conexos y, en concreto, sobre la situación jurídica de los TNF basados en derechos de autor y otro material protegido.<sup>505</sup> Sin embargo, la situación jurídica de los TNF podría subsanarse mediante la aplicación de las normas generales sobre el derecho de autor, por lo que no parece necesario adoptar medidas inmediatas al respecto en la Ley de Derecho de Autor.

El panorama es menos claro en el caso del contenido generado por los usuarios. En algunas situaciones, el usuario que genera el contenido no emplea contenido de terceros. Por supuesto, esto no requiere acción alguna, ya que el usuario no está infringiendo ningún derecho y puede reclamar los derechos sobre el contenido generado que se ajuste a las normas generales.

En otros casos, el usuario simplemente copia o realiza una obra a partir de obras protegidas (obras derivadas) u otra materia sin una licencia explícita o sin la autorización del titular del derecho. En estas situaciones, la asamblea legislativa de cada país puede decidir crear una excepción o limitación que se adapte a tales usos, aunque, para ser compatible con los convenios internacionales, la legislación debe definir el uso de manera que no entre en conflicto con el uso normal de la obra u otra materia protegida y no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los titulares del derecho. Eso exige, entre otras cosas, que el uso sea estrictamente sin fines de lucro ni profesionales y solo en casos de escasa importancia económica.

## **2. Recomendaciones sobre el ecosistema de derechos de gestión colectiva**

Construir un ecosistema eficaz de OGC es vital para el funcionamiento práctico de las industrias creativas en el mercado digital. Permite gestionar de forma más sencilla y económica las complejas cuestiones de los derechos de PI entre titulares de derechos y usuarios.

La tecnología digital ha multiplicado los usos no autorizados de obras y material protegido, pero también ofrece la oportunidad de conceder licencias de contenidos de manera directa, con escaso costo de transacción para los usuarios finales. La combinación de contratos digitales, medidas tecnológicas de protección, e información electrónica sobre la gestión de derechos, hace posible la concesión de licencias para cualquier uso, especialmente en el entorno en línea.

Esto significa que cada vez es más posible gestionar los derechos mediante contratos en línea, y muchos titulares de derechos están optando por dicha modalidad. Es el caso de las empresas multinacionales con suficientes recursos y conocimientos técnicos en materia de PI, sobre todo en el caso de las producciones fonográficas o audiovisuales y los organismos de radiodifusión.

Lo mismo ocurre con los titulares de los derechos de autor de obras digitales nativas, incluidos programas informáticos, bases de datos, videojuegos y otros juegos electrónicos y aplicaciones móviles, que suelen depender en gran medida del control

---

<sup>505</sup> En su respuesta a la encuesta, los Emiratos Árabes Unidos indicaron que un enfoque coherente en la protección de los derechos de PI de los TNF sería beneficioso para promover la innovación en el sector.

directo y la concesión de licencias individuales de sus obras para evitar las copias indiscriminadas.

Sin embargo, muchos titulares de derechos individuales, microempresas y pymes, como sellos o estudios independientes, siguen dependiendo casi exclusivamente de los OGC para conceder en licencia sus contenidos.

El régimen jurídico de la gestión colectiva en los países seleccionados es diverso, por lo que resulta difícil hacer recomendaciones únicas para todos. No obstante, existen algunas buenas prácticas aceptadas internacionalmente que, de adoptarse en la legislación nacional, podrían mejorar la eficacia de los ecosistemas nacionales de gestión colectiva.

Cabe señalar que algunas de las siguientes recomendaciones ya existen, aunque la formulación exacta en la legislación puede variar. Por consiguiente, no todas las acciones sugeridas *de lege ferenda* o propuestas para establecer normas son igualmente aplicables a los cuatro países.

A. Establecimiento de una estructura nacional adecuada de entidades de gestión colectiva

Para comercializar de forma eficaz obras y material protegido es indispensable contar con una red sólida y eficiente de entidades de gestión colectiva. Un sistema inadecuado, por el contrario, perjudica el funcionamiento de la cadena de derechos de PI, especialmente en los mercados digitales.

No existe una forma única o ideal de crear una infraestructura de gestión colectiva. Como se explica en el capítulo III, las características de los OGC que intervienen en los cuatro países seleccionados varían y, en la práctica, el funcionamiento de los ecosistemas nacionales depende en gran medida de consideraciones locales.<sup>506</sup>

Algunos países, como Chile o Uruguay, disponen de varias organizaciones especializadas en diferentes categorías de titulares de derechos (autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores). Otros, como Indonesia, tienen una estructura híbrida de OGC públicos y privados, lo que da lugar a la existencia de una gran cantidad de organizaciones en el país. Los Emiratos Árabes Unidos cuentan con un OGC especializado en derechos reprográficos.

Una vez que una red nacional de OGC, y eventualmente de OIGD, se ha establecido y está en pleno funcionamiento, como en Chile, Indonesia y Uruguay, cambiarla radicalmente es poco recomendable y, además, potencialmente imposible en la práctica.

Para países como los Emiratos Árabes Unidos, donde la legislación aún no ha determinado la infraestructura nacional, no es necesario definirla rígidamente de antemano. Sin embargo, es posible decidir que se agrupen categorías similares de

---

<sup>506</sup> En Indonesia, por ejemplo, la encuesta puso de manifiesto que muchos usuarios finales y titulares de derechos desconocen el mecanismo de recaudación de regalías por obras musicales y las dificultades a las que se enfrentan los OGC para llevar a cabo su trabajo fuera de las grandes ciudades de su vasto archipiélago.



derechos, creando, por ejemplo, un OGC para los autores y otro para los titulares de derechos conexos.

En la práctica, debido a las diferencias concretas en los derechos que se gestionan y a las peculiaridades de los distintos mercados, resultaría más conveniente contar con diversos OGC que separen las categorías de titulares de derechos.

Asimismo, debido a las disparidades entre las legislaciones nacionales e internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos, en principio es aconsejable evitar que los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores estén representados conjuntamente en el mismo OGC. Esto también facilitaría la celebración de acuerdos de representación mutua con sociedades hermanas internacionales.

Sin embargo, no siempre es problemático que los autores y titulares de derechos conexos estén juntos en un OGC, especialmente cuando unifica la gestión de los derechos de autores y artistas intérpretes o ejecutantes en un subsector del mercado, como sucede en Chile con los autores y artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales. Además, en algunos Estados miembros de la Unión Europea, como España y Francia, los compositores y editores de obras musicales están representados por el mismo OGC nacional.

Algunos de los países seleccionados, como Indonesia, cuentan con sociedades especializadas en derechos reprográficos que representan tanto a los autores como a los editores de obras literarias. En algunos casos, los autores de artes visuales también forman parte de estas sociedades, como en los Emiratos Árabes Unidos. De hecho, por razones prácticas, es aconsejable incluir en la misma sociedad reprográfica tanto a los autores de obras literarias y artes visuales como a los editores de obras literarias impresas y digitales.

Queda abierto el debate sobre si todos los tipos de autor (compositores, autores de obras audiovisuales y dramáticas, autores literarios y autores de artes visuales) están mejor representados por una misma sociedad de autores (como en el Uruguay) o es más conveniente contar con varias sociedades, distinguiendo entre compositores, autores audiovisuales y autores de artes visuales (como en Chile).

Cualquier decisión depende en gran medida de las características del país (cantidad total de autores y usuarios, y tamaño de los distintos subsectores, entre otras cosas). Por lo general, en los mercados pequeños, es aconsejable empezar con una sociedad de autor para aprovechar las economías de escala. Esta sociedad única puede dividirse posteriormente si las condiciones del mercado lo requieren.

En países como Chile e Indonesia, existen varios OGC para las mismas categorías de autores (por ejemplo, compositores, directores o guionistas). Por supuesto, esta opción no es negativa en sí, pero una proliferación excesiva de sociedades para la misma categoría de titulares de derechos creará múltiples repertorios. Además, esto puede suponer un desafío para los usuarios finales que no dispongan de una infraestructura sólida y unificada de bases de datos.

Por lo tanto, es importante garantizar que los distintos OGC colaboren a la hora de conceder licencias y recaudar derechos en un sector, como ocurre en Indonesia y Uruguay. Esto podría incluir la creación de una persona jurídica para recaudar y distribuir

los ingresos entre los OGC. La ley también debería permitir a los OGC celebrar acuerdos de representación con otros OGC del país. Esto simplificaría los procedimientos de concesión de licencias a los usuarios mediante la creación de ventanillas únicas, especialmente para los usos digitales.<sup>507</sup>

En cuanto a las sociedades de derechos conexos, debido a las diferentes características de las grabaciones sonoras y las producciones audiovisuales, sería beneficioso establecer OGC por separado para los productores fonográficos y de obras audiovisuales, como sucede actualmente en Chile y Uruguay. Los artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales y audiovisuales tienen un régimen jurídico similar en tres de los países seleccionados. En la práctica, sin embargo, el mercado tiende a crear OGC por separado en estos casos.

Además, la experiencia de campo sugiere que no es aconsejable establecer OGC específicos para el entorno digital, dado que ello crearía una segmentación artificial del mercado, sin perjuicio de la especialización interna de los OGC nacionales para los mercados digitales y en línea.

#### B. Autorización

Para simplificar el sistema y evitar la proliferación de OGC, conviene supeditar la creación de OGC tradicionales (y, eventualmente, de OIGD) a la autorización del organismo regulador nacional. Esto es lo que sucede actualmente en los cuatro países seleccionados.

Normalmente, la autorización puede revocarse en determinados casos definidos con anterioridad por la legislación, pero también puede ser adecuada una solución menos extrema. Por ejemplo, es posible prever en la legislación un régimen de responsabilidad administrativa por las infracciones que pueda cometer un OGC en el ejercicio de sus funciones.

Las sanciones podrían variar desde multas de una suma fija hasta las que se basan en el porcentaje total de ingresos recaudados en el año anterior a la fecha de la multa. En última instancia, en lugar de la revocación del permiso de funcionamiento, una solución alternativa podría ser la inhabilitación para operar en el país durante un período determinado.

Un aspecto acertado de la legislación de los países seleccionados es que no exige que los OGC adopten una forma jurídica específica para que se los autorice a funcionar en el país. En Chile, Uruguay e Indonesia se exige que los OGC sean organizaciones sin fines de lucro que pueden adoptar diversas formas, como asociaciones civiles, cooperativas o fundaciones.

Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos delegan la administración de los derechos en asociaciones profesionales especializadas u “otros organismos”. Este último término es amplio y puede incluir sociedades de responsabilidad limitada que están controladas o

---

<sup>507</sup> Por ejemplo, en el sector de obras musicales, los OGC que representan a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes de tales obras y los productores de fonogramas deben trabajar de manera coordinada en determinados actos de comunicación o puesta a disposición del público. Lo mismo sucede en el sector de obras audiovisuales, donde las plataformas digitales internacionales deben encontrar la manera de simplificar la gestión de derechos en un determinado territorio.

son propiedad de titulares de derechos de autor y derechos conexos, o entidades que representen a dichos titulares. No existe ningún impedimento para que un OGC adopte dicha forma jurídica, siempre que el régimen jurídico y el control administrativo sean los mismos que los previstos para los OGC constituidos como organizaciones sin fines de lucro.

Muchos países permiten que no solo los OGC clásicos lleven a cabo la gestión colectiva de derechos, sino también las OIGD, como ocurre en los Emiratos Árabes Unidos. Las OIGD son organizaciones autorizadas por ley o por contrato para gestionar los derechos de autor o los derechos conexos en nombre de los titulares de los derechos para su beneficio colectivo. A diferencia de los OGC, las OIGD no son propiedad de los titulares del derecho ni están controladas por ellos, sino por terceros. Además, persiguen fines económicos.

La recomendación general sobre las OIGD es que, debido al principio de libertad de contratación, los titulares del derecho deben tener libertad para confiarles la gestión de sus derechos.

El correcto funcionamiento en el mercado de una combinación de OGC y OIGD depende en gran medida de las condiciones de cada país, en particular, del nivel de control real que pueda ejercerse sobre las normas internas de gestión y transparencia de las OIGD. Por lo tanto, los legisladores deben decidir si es aconsejable autorizarlas, teniendo en cuenta la situación jurídica y de mercado específica de cada país.

Si se permite que funcionen, las obligaciones de la OIGD deben ser similares a las que se exigen para un OGC. En particular, los requisitos de transparencia vigentes para los OGC también deberían aplicarse, *mutatis mutandis*, a las OIGD.<sup>508</sup>

Las asambleas legislativas de cada país son las encargadas de elaborar las normas para el buen funcionamiento de los OGC en lo que respecta a la adhesión y los derechos de los miembros, la transparencia y la concesión de licencias. Asimismo, es importante que el organismo regulador nacional garantice en la práctica el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los OGC, con la facultad para llevar a cabo las inspecciones y actividades de control que considere oportunas.<sup>509</sup>

Para garantizar un entorno favorable para los OGC, podrían bastar unas pocas normas claras que estén establecidas en la legislación nacional, siempre que las autoridades administrativas las apliquen de forma coherente. Eso implica facultar al organismo regulador para que pueda imponer sanciones administrativas o multas cuando no se respeten las normas obligatorias.

### C. Normas de afiliación y transparencia

---

<sup>508</sup> El régimen jurídico de los organismos de gestión de derechos puede regularse de muchas maneras, pero para tener en consideración un buen modelo, véase la publicación de la Unión Europea, Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (Directiva sobre Gestión Colectiva).

<sup>509</sup> En algunas respuestas a la encuesta (por ejemplo, Chile) se indicó que una reforma legislativa que refuerce la capacidad de control del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sobre los OGC mejoraría su transparencia y rendición de cuentas.

Se recomienda que el OGC facilite toda la información pertinente a los posibles titulares de derechos antes de incorporarse. Esto podría incluir el contenido y las consecuencias del acuerdo de representación, los casos de administración colectiva obligatoria, las condiciones de cancelación de la afiliación, si los derechos se concederán sobre una base exclusiva o no exclusiva, cómo se estructuran los órganos rectores y cómo participar en ellos como miembro.<sup>510</sup>

La afiliación debe estar abierta a todos los titulares de derechos individuales, de acuerdo con criterios publicados, objetivos y no discriminatorios.<sup>511</sup> La inadmisión debe fundamentarse exclusivamente en criterios predeterminados por la ley o el estatuto del OGC.<sup>512</sup>

La relación entre los titulares de derechos y los OGC debe respetar el principio de libertad contractual. Esto significa que los titulares del derecho deben firmar voluntariamente un contrato de representación civil con el OGC. Este mandato definirá el alcance de la autoridad del OGC para conceder licencias sobre los derechos o representar a sus titulares.

Los titulares de derechos tendrán la libertad de conceder solo mandatos o licencias no exclusivos y de conservar el derecho de utilizar las licencias individualmente, salvo cuando la legislación disponga la gestión colectiva obligatoria. Deben poder rescindir el mandato y confiar sus derechos a otra organización o gestionarlos individualmente.<sup>513</sup> Si existen varios OGC para las mismas categorías de titulares de derechos, estos tendrán la libertad de elegir a cuál de ellas autorizar para que los represente.

Como hemos observado, la regla general es que un OGC solo puede representar a los titulares de derechos que hayan dado su autorización de manera expresa y voluntaria. En la práctica, sobre todo en los mercados digitales, hay usos en los que intervienen una gran cantidad de titulares de derechos, obras u otro material, además de usuarios. Eso encarece los costos de la tramitación de autorizaciones para el ejercicio de derechos individuales.<sup>514</sup>

Por este motivo, se indica la gestión colectiva obligatoria en algunos casos si así lo establece expresamente la ley o un mandato gubernamental. Para los usuarios finales, esto facilita la adquisición de todos los derechos que necesitan para desarrollar su actividad, como ya sucede en Chile o Indonesia.<sup>515</sup>

En cuanto a los titulares de derechos como miembros de un OGC, la ley debería establecer el principio básico de no discriminación, que es lo que ocurre actualmente en los Emiratos Árabes Unidos. En la práctica, esto significa tratar a todos los miembros de forma equitativa y justa.

---

<sup>510</sup> OMPI. “Caja de herramientas de la OMPI sobre buenas prácticas para organismos de gestión colectiva (Caja de herramientas)”. *wipo.int*. 2021, pp. 24 y 27-28. <<https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4561>>.

<sup>511</sup> *Ibid.*, p. 28.

<sup>512</sup> Unión Europea, Directiva de Gestión Colectiva, *op. cit.*, art. 5.2.

<sup>513</sup> *Ibid.*, p. 37.

<sup>514</sup> Unión Europea, Directiva del mercado único digital, *op. cit.*, considerando 45.

<sup>515</sup> Chile, Ley de Propiedad Intelectual, *op. cit.*, art. 21.

De acuerdo con las normas de gestión, la ley debe establecer que la entidad se gobierne de forma independiente y transparente. El OGC debe tener una estructura orgánica adecuada definida de acuerdo con la ley y su estatuto. Ello requiere controles adecuados, incluida una participación equitativa de las categorías de titulares de derechos asociados al OGC, para evitar que una categoría quede marginada o poco representada.

En cuanto a las reglas de votación, es aconsejable implementar un sistema, como el de Chile, que esté fundado en criterios de ponderación que dependan de los derechos generados y que establezcan límites razonables al voto plural.

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de gestión colectiva, es esencial que la ley garantice que los OGC recauden y distribuyan de forma transparente la remuneración que abonan los usuarios.

Sin la garantía de transparencia interna (para los miembros) y externa (para los licenciarios), un OGC no sería un instrumento adecuado para gestionar los derechos de PI, especialmente en un entorno digital cada vez más complejo.

Los países seleccionados tienen normas de transparencia diferentes. En muchos casos, establecen una serie de obligaciones para los OGC, aunque su número y contenido exactos, así como el grado de aplicación, varían mucho.

Por ejemplo, los cuatro países ya han incluido en la legislación nacional la obligación de distribuir la remuneración recaudada entre los miembros, con una deducción por gastos de gestión o actividades de servicio social.

Lo mismo sucede con la obligación de que el OGC cuente con un reglamento interno de distribución, de acceso público y con normas claras y predeterminadas en función del principio de proporcionalidad con relación al uso de las obras u otra materia protegida.

La legislación nacional de los cuatro países también varía en cuanto a la obligación de informar periódicamente a los titulares de derechos sobre la situación económica y de gobierno de la organización. Una asamblea general del OGC debe aprobar la auditoría de cuentas y un informe de transparencia anualmente.<sup>516</sup>

En algunos casos, podría ser beneficioso para las asambleas legislativas de cada país incluir buenas prácticas internacionalmente aceptadas en materia de transparencia. Por ejemplo, se recomienda que los OGC nacionales estén obligados a divulgar públicamente (de preferencia, en su sitio web) sus contratos de licencia estándar y las tarifas aplicables, incluidos los descuentos.

La información publicada en línea también debe incluir el estatuto del OGC, las condiciones de afiliación y de cese de la autorización para gestionar derechos, la lista de las personas que gestionan la organización y los acuerdos de representación con otros OGC nacionales o de otros países, las prestaciones abonadas a los miembros y los

---

<sup>516</sup>Este último deberá tener un contenido mínimo exigido por ley que incluya la situación financiera del OGC (balance, estado de resultados, informe de gastos, detalles de la remuneración distribuida o no distribuida, etc.) Debe incluir las principales actividades realizadas y una descripción de la entidad, incluido el porcentaje de la remuneración destinado a gastos administrativos y salarios de los directivos. Si el OGC gestiona o controla otras entidades, también deberá incluirse información detallada al respecto. Véase Unión Europea, Directiva relativa a la gestión colectiva, *op. cit.*, art. 22 y anexo.

procedimientos de reclamos y resolución de controversias a disposición de los miembros y usuarios.<sup>517</sup>

También se recomienda que los OGC estén obligados a responder puntualmente a las solicitudes del público, los usuarios u otras partes interesadas, sobre su repertorio, los derechos gestionados o los territorios que abarcan las licencias.<sup>518</sup>

La ley debería contemplar una norma por defecto para los pagos no reclamados. Estos deberían distribuirse a los titulares de derechos asociados o destinarse a otros fines establecidos en la ley o en el estatuto del OGC. Los OGC deberían poner a disposición del público su política sobre el uso de importes no distribuibles.<sup>519</sup>

#### D. Concesión de licencias

La concesión de autorizaciones y licencias por parte de los OGC depende, en principio, del alcance del contrato de representación firmado entre el titular del derecho y el OGC.

No obstante, los mecanismos de concesión de licencias colectivas permiten celebrar acuerdos en mercados digitales donde las licencias colectivas fundamentadas en una previa autorización individual de los titulares de derechos, no ofrecen una solución completa para abarcar todas las obras u otro material que se vaya a utilizar. Por lo tanto, deberían limitarse a ámbitos jurídicos bien definidos, en los que la obtención de la autorización de los titulares de derechos de forma individual resulte excesivamente onerosa o poco práctica.<sup>520</sup>

Dichos mecanismos permiten al OGC ofrecer licencias en nombre de todos los titulares de derechos pertenecientes a una misma categoría (es decir, artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales), independientemente de si han autorizado al organismo a tal efecto.

En la práctica, esto podría lograrse estableciendo en la ley que las licencias otorgadas por el OGC pueden ampliarse para que su aplicación alcance a los derechos cuyos titulares no han autorizado al OGC a representarlos.<sup>521</sup>

En otros casos, se hace por mandato legal, como en Indonesia, donde los dos OGC estatales están facultados por ley para representar a autores o artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales sin necesidad de celebrar un contrato expreso de representación.<sup>522</sup>

---

<sup>517</sup> OMPI, Caja de Herramientas sobre Buenas Prácticas, *op. cit.*, pp. 23–24; y Unión Europea, Directiva relativa a la gestión colectiva, *op. cit.*, art. 21.

<sup>518</sup> Unión Europea, Directiva relativa a la gestión colectiva, *op. cit.*, art. 20.

<sup>519</sup> *Ibid.*

<sup>520</sup> Unión Europea, Directiva del mercado único digital, *op. cit.*, art. 12.2.

<sup>521</sup> Unión Europea, Directiva del mercado único digital, *op. cit.*, art. 12.1.a).

<sup>522</sup> Sardjono, *op. cit.*, p. 335. En la encuesta de Indonesia se indicó que la Decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos N.º M.HH-01.KI.01.08 de 2019 otorgó a los dos OGC estatales un mandato legal para representar a los titulares de derechos que no hubieran autorizado al organismo en ese sentido. La decisión del ministerio se refiere al nombramiento de los comisarios de la Agencia Nacional de Gestión Colectiva de Creadores y Actores, y de la Agencia Nacional de Gestión Colectiva de los Derechos del Sector de las Canciones o la Música.

Por último, en países como Chile, la ley simplemente crea una presunción de representación cuando establece que se presume legalmente que los OGC representan a todos los titulares de derechos, incluidos aquellos que no han autorizado al organismo en tal sentido.

Se crea así una presunción refutable que facilita el funcionamiento del mercado de licencias y los procedimientos judiciales; el OGC no tiene que presentar prueba exacta ante los tribunales de todos los contratos con sus miembros, como ocurre en países como el Uruguay. Dicha presunción puede refutarse en un caso concreto si se cuestiona que existe una representación legítima con relación a algún titular o titulares de derechos específicos.

De todas formas, la ley debe garantizar que los titulares de derechos que no sean miembros del OGC que concede la licencia tengan acceso a toda la información pertinente sobre el acuerdo. Para garantizar que los titulares de derechos puedan recuperar el control de sus obras, también es fundamental que tengan la oportunidad real de excluir la aplicación de tales mecanismos, tanto antes de la celebración de una licencia como durante su vigencia.<sup>523</sup>

Los cuatro países seleccionados reconocen las normas más importantes relativas a la concesión de licencias por parte de los OGC, pero en algunos casos la redacción exacta de la ley se podría completar o actualizar.

Por ejemplo, un principio básico de la ley debe ser que cuando un OGC es la única opción viable para adquirir determinados derechos, este esté obligado a acordar condiciones contractuales razonables con los potenciales usuarios de derechos de autor.

Se debe exigir legalmente a los OGC que establezcan tarifas justas y equitativas para todos los usuarios a cambio de la utilización de su repertorio, en condiciones de igualdad, no discriminación y transparencia.

Por último, la legislación nacional de derecho de autor debería establecer claramente una serie de competencias para el organismo regulador nacional, que incluyan la capacidad de decidir mediante arbitraje, previa presentación voluntaria de las partes, las controversias entre las entidades de gestión y los usuarios, así como de establecer tarifas complementarias o supletorias en ausencia de acuerdo.

#### E. Mantenimiento de bases de datos para los mercados digitales

La existencia de bases de datos completas, compatibles e interconectadas es indispensable para el funcionamiento práctico de los derechos de PI en el mercado digital de cualquier país. Las bases de datos son una garantía de exactitud y transparencia, y un instrumento fundamental para concretar la tramitación de autorizaciones para el ejercicio de derechos de forma rentable y en un plazo razonable.

En Chile, de acuerdo a la encuesta realizada, los OGC controlan diversas bases de datos activas, aunque no siempre son capaces de conceder licencias de contenidos digitales. En Indonesia existe una base de datos de derechos musicales, y el país está trabajando

---

<sup>523</sup> Unión Europea, Directiva del mercado único digital, *op. cit.*, considerando 48.

para coordinar una nueva base de datos nacional con un mecanismo recientemente instalado para recaudar y distribuir las regalías de dichas obras.<sup>524</sup>

Las bases de datos pueden ser de propiedad privada o estar sujetas a normas de libre acceso, pero el público debe poder consultar la información que contengan. Los datos completos y precisos garantizan que exista información adecuada sobre el repertorio para usos digitales, como los detalles de la obra u otra materia protegida,<sup>525</sup> la descripción del titular del derecho y la especificación de si el OGC está autorizado a conceder licencias sobre el contenido o se requiere una autorización individual en algún caso concreto.

Las bases de datos deben definir los usos digitales que abarca el régimen de la licencia, así como su extensión territorial y temporal. Además, deben contener el repertorio de cada OGC u OIGD, aunque es crucial que estén conectadas con otras entidades que intervengan en el país.

Para que las bases de datos sean útiles en la era digital, también deben incluir un repertorio internacional, que solo puede construirse con una red sólida de acuerdos de representación mutua. Por lo tanto, es imperativo que las bases de datos locales sean compatibles con las normas internacionales y con las herramientas utilizadas por otras organizaciones y federaciones nacionales, como la CISAC y el *Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique* (BIEM), entre otras.

### **3. Promoción de la observancia de los derechos de PI en el entorno digital**

Como se explica en el capítulo III, el acatamiento de los derechos en la práctica, especialmente en el ámbito virtual, sigue siendo motivo de preocupación en los cuatro países seleccionados. Resulta esencial establecer y aplicar una observancia adecuada de los derechos de autor y los derechos conexos para garantizar que los titulares de derechos en el entorno digital tengan la protección adecuada.

Las autoridades judiciales, administrativas y encargadas del cumplimiento de la ley deben ser ágiles y eficientes a la hora de reaccionar ante la infracción masiva y aparentemente anónima en Internet. Los jueces, fiscales, inspectores y otros funcionarios precisan de recursos humanos, tecnológicos y económicos para desempeñar eficazmente sus funciones. Sin un sistema judicial y administrativo capaz de resolver las demandas por infracción en un tiempo y forma razonables, es muy poco probable que se respeten los derechos de PI.

También existen algunas modificaciones menores que cabe introducir en el ámbito legislativo con respecto a los recursos legales, las sanciones en el ámbito penal, la

---

<sup>524</sup> En Indonesia, mediante el Reglamento gubernamental 56/2021, se encargó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la creación, en el plazo de dos años, de una base de datos de música y canciones que sirva de base para la distribución de regalías por el uso comercial que se haga de ellas. Se actualizará cada tres meses para incluir automáticamente cualquier canción o música previamente registrada en el Ministerio, y será una parte clave del llamado Sistema de Información de Canciones o Música. Véase <https://setkab.go.id/en/govt-issues-regulation-on-songs-music-copyright-royalties-management>.

<sup>525</sup> A los efectos de la identificación, resultan especialmente útiles normas internacionales como el ISBN (Número Internacional Normalizado de Libros), el Número Internacional Normalizado para Obras Audiovisuales (ISAN) y el Código Internacional Normalizado de Grabaciones (ISRC).



salvaguarda de las medidas tecnológicas de protección y la gestión de los derechos de información que podrían ayudar a promover la observancia de los derechos de PI en los países seleccionados.

#### A. Modificaciones jurídicas menores

El análisis de las normas nacionales descritas en el capítulo III revela que no es necesario introducir cambios sustanciales en la legislación nacional para garantizar la observancia de los derechos de PI en el entorno digital. Esta impresión se confirmó en las respuestas a la encuesta nacional, según las cuales no se detectaron problemas acuciantes en relación con las medidas provisionales y de subsanación civil, ni con las infracciones penales,<sup>526</sup> apuntándose en cambio a la aplicación práctica de estas normas.

Las particularidades de cada país, que a su vez están influidas por las tradiciones jurídicas y culturales, condicionan especialmente la política en materia penal. Los legisladores de los cuatro países pueden diferir en lo que se considera un castigo apropiado o proporcional por la infracción de la PI.

En este estudio, se ha comprobado que existen normas que imponen responsabilidad penal, abarcan los actos de infracción del derecho de autor y los derechos conexos y están definidas en la ley. La excepción parcial es la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de los Emiratos Árabes Unidos, que fija un período mínimo de prisión y no un período máximo.<sup>527</sup>

Por lo tanto, no corresponde a este estudio hacer recomendaciones adicionales sobre el régimen jurídico nacional de las infracciones penales para los derechos de PI.

En cuanto a las medidas y los recursos provisionales civiles, en algunos casos sería aconsejable modificar las normas que establecen el sistema de cálculo de los daños y perjuicios. Por lo tanto, se recomienda que los países que todavía no incluyan expresamente, en su legislación de derechos de autor, una disposición que establezca indemnización por daños y perjuicios (los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia) la incorporen. Esto facilitaría el cálculo de daños y perjuicios en escenarios digitales complejos.

Una medida típica para determinar la indemnización por daños y perjuicios consiste en que el titular del derecho, sin necesidad de prueba, tenga derecho a percibir un pequeño porcentaje de la facturación realizada por el infractor como compensación. Pero el titular del derecho siempre puede exigir una indemnización mayor si demuestra, con arreglo a las normas generales, que la violación del derecho le causó daños o pérdidas mayores. Para controlar la facturación real del infractor, el juez debe estar autorizado por la ley para exigir que presente su documentación interna.

La legislación también debe establecer expresamente que la indemnización por daños morales está a disposición de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes que son titulares de estos derechos en virtud de la legislación nacional. En el caso de los daños

---

<sup>526</sup> Por ejemplo, en las respuestas a la encuesta de Chile, en términos generales, se informó que el actual sistema de observancia de los derechos de PI puede considerarse eficaz, especialmente si la infracción se presenta ante los tribunales.

<sup>527</sup> Emiratos Árabes Unidos, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, *op. cit.*, art. 39.

no pecuniarios la indemnización debe proceder, aunque no se haya probado el perjuicio económico.

También es recomendable establecer en la legislación nacional que el titular del derecho solicite al infractor que desista de la infracción antes de entablar acciones civiles, y les dé la oportunidad de resolver la cuestión. En ocasiones, este procedimiento puede ser útil para evitar el juicio, imponer una multa acordada o incluso para dictar una orden de cese y desistimiento.

En el ámbito de las medidas tecnológicas de protección y la información sobre la gestión de derechos, se recomienda que Chile implemente una disposición específica para impedir la elusión de las medidas tecnológicas de protección en su legislación nacional, de acuerdo con la redacción del artículo 11 del WCT y el artículo 18 del WPPT.

Se sugiere que Indonesia incluya la definición de medida tecnológica de protección en su Ley sobre el Derecho de Autor, y no en la aclaración anexa. También se aconseja proteger específicamente la “información sobre la gestión de derechos”, la cual se utiliza para velar por los derechos patrimoniales de los autores de las obras de forma coherente con el artículo 12 del WCT.

En los Emiratos Árabes Unidos, se recomienda que las obligaciones que protegen la información sobre la gestión de derechos se implementen en un lenguaje más cercano a la redacción del artículo 12 del WCT y el artículo 19 del WPPT, y que se incluya específicamente en la legislación una definición de información sobre la gestión de derechos. Del mismo modo, se recomienda proteger la “información sobre la gestión de derechos” vinculada a la materia protegida de forma coherente con el artículo 19 del WPPT, al menos para los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales y los productores fonográficos que se mencionan en el tratado.

En lo que respecta a las autoridades judiciales, en países como Chile existe cierta especialización jurídicas para algunas controversias relativas a los derechos industriales (que normalmente surgen durante el proceso de registro del derecho), pero no para aquellas sobre derechos de autor y derechos conexos.

Sin embargo, la infracción del derecho de autor y los derechos conexos es un problema delicado, y a menudo plantea cuestiones legales complejas, en especial en el entorno digital. Por lo tanto, lo recomendable sería que existan tribunales civiles o comerciales especializados.<sup>528</sup>

Dichos tribunales deben recibir todas las demandas sobre derechos de autor y derechos conexos en un territorio predeterminado, y también ocuparse de las controversias sobre propiedad industrial, ya que en algunos casos los límites entre derechos son difusos.

En las cuatro respuestas a la encuesta se indicó que existían organismos de mediación o arbitraje no especializados, pero con capacidad para resolver controversias de PI como complemento a los procedimientos arbitrales específicos de PI que existen a escala internacional, en particular en la OMPI.

---

<sup>528</sup> Los Emiratos Árabes Unidos, en su respuesta a la encuesta, indicaron que este es uno de los ejes principales de su programa de reforma de la PI.

Sin embargo, los cuatro consideraron que la adopción de un sistema de solución de controversias en línea específico para la PI es un buen mecanismo para mejorar la protección de los derechos de PI en el entorno digital, en especial para las microempresas y las pymes que no suelen disponer de los recursos necesarios para litigar o llevar a cabo procedimientos de arbitraje tradicionales.

Esto aumentaría la flexibilidad para todas las partes que intervienen, ya que permite resolver el diferendo de manera más rápida que la mediación fuera de la red. La mediación en línea también podría ser útil para consultas preliminares antes de recurrir al mecanismo más complejo de arbitraje o mediación fuera de la red, y casi siempre implicaría una reducción de plazos y costos, en especial si las partes están radicadas en territorios diferentes, como suele ocurrir en los litigios contractuales en el mercado digital.

Debería considerarse seriamente la posibilidad de establecer, en la legislación nacional, un mecanismo de mediación y arbitraje en línea. El organismo regulador nacional de los derechos de autor y los derechos conexos podría ser el encargado de organizarlo y mantenerlo, aunque también podría delegarse la tarea en instituciones nacionales privadas.

#### B. Observancia administrativa en línea

La observancia de los derechos de autor y los derechos conexos en el entorno de Internet exige una rapidez que no es acorde con la naturaleza de los tribunales civiles o penales tradicionales. Esto agrava el riesgo de los titulares de derechos de sufrir pérdidas, como se indica en la respuesta de Indonesia a la encuesta. En muchos casos, los mecanismos alternativos de solución de controversias no son una opción, porque el infractor no tiene ninguna intención de cumplir la ley, ya que su “modelo operativo” se sustenta en la infracción en línea a través de sitios web u otras herramientas en línea.

En este escenario, establecer un mecanismo administrativo para controlar y sancionar la infracción del derecho de autor en línea es un procedimiento especialmente eficaz para garantizar la adecuada observancia de los derechos.

Como se explica en el capítulo III, países como los Emiratos Árabes Unidos ya cuentan con un organismo administrativo para sancionar a quienes suban contenido prohibido. Este último es un concepto amplio que también incluye el material que infringe los derechos de autor y los derechos conexos. Pero sería más conveniente que la legislación específica incluyera un procedimiento para las infracciones en línea de los derechos de autor y los derechos conexos, dado su carácter masivo y las peculiaridades jurídicas que exige un órgano administrativo especializado.

En cualquier caso, este mecanismo debería estar incluido en la legislación para garantizar el debido respeto de los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de información.<sup>529</sup> También debe equilibrar los principios de celeridad y protección efectiva del titular del derecho, los de proporcionalidad y el derecho de

---

<sup>529</sup> En la respuesta de los Emiratos Árabes Unidos se informó que uno de los aspectos del trabajo que se está llevando a cabo para la próxima reforma relativa a la PI es la creación de un órgano administrativo especializado dedicado a la observancia de los derechos de PI, específicamente las infracciones que se producen en Internet.

defensa del proveedor de contenidos, que, de todas formas, debe tener la oportunidad de ser oído.

Existen diferentes modelos de observancia administrativa en línea que se podrían adoptar, como los vigentes en Francia<sup>530</sup> o España.<sup>531</sup>

Normalmente, el organismo regulador nacional se centraría en diversos proveedores de contenido en línea, como sitios web, blogs o servicios infractores similares, si ofrecen un servicio de acceso público en el territorio nacional que pone a disposición una cantidad significativa de obras o materia protegida. Esto incluye no solo los sitios web que ofrecen descargas o transmisión en continuo de forma ilícita, sino también aquellos que proporcionan activamente enlaces a contenido infractor y los prestadores de servicios de televisión por protocolo de Internet (IPTV) junto con sus sitios espejo especializados en proporcionar acceso ilícito a servicios de radiodifusión. Por lo general, se realiza con fines comerciales.

En términos generales, los legisladores nacionales exigirán la existencia de infracción y que se haya notificado previamente al propietario del sitio o servicio infractor exigiéndole que retire el contenido.

Si el organismo regulador determina que el contenido ofrecido infringe los derechos de autor o derechos conexos, puede ordenar directamente al proveedor del contenido que lo retire de su sistema. Para evitar que el contenido vuelva a publicarse, el proveedor de servicios también podría estar obligado a incluir medidas técnicas y tareas de vigilancia específicas. En algunos casos, se podrá proceder al cierre del sitio web o del servicio, normalmente hasta un plazo máximo fijado por la ley.

Si el proveedor del contenido no lo elimina voluntariamente, es probable que el organismo regulador nacional deba colaborar con los prestadores de servicios de intermediación en línea, exigiéndoles que suspendan el servicio correspondiente. El legislador nacional debe decidir si el proveedor de servicios bloquea el acceso a todos los usuarios directamente después de la orden administrativa, o si una autoridad judicial debe confirmar la orden previamente, como sucede en muchos Estados miembros de la Unión Europea, para garantizar la libertad de expresión e información.<sup>532</sup>

En cualquier caso, un órgano judicial debería poder revisar la decisión del organismo regulador. Por lo general, el organismo regulador impondría una multa al proveedor de contenidos, pero en algunos de los países que cuentan con legislación al respecto esto solo es posible en casos de reincidencia. Esta sanción administrativa siempre debe ser compatible con las medidas de subsanación civil o los recursos penales solicitados por el titular del derecho.

#### **4. Regulación del rol de los prestadores de servicios de intermediación en línea en la infracción del derecho de autor**

---

<sup>530</sup> La observancia de los derechos de autor en línea está garantizada por la *Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique* (Arcom); véase <https://www.arcom.fr/larcom>.

<sup>531</sup> En España, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos de autor en línea. España, Ley de Propiedad Intelectual, op. cit., art. 195.

<sup>532</sup> España, Ley de Propiedad Intelectual, op. cit., art. 195.6.

Regular el rol de los PSSI es una parte fundamental de los aspectos prácticos de la observancia para proteger a los titulares del derecho contra la infracción. Para algunos sectores como el de la moda, los PSSI también son esenciales para la observancia de las marcas y los derechos sobre los diseños en el metaverso.

Las soluciones que se adoptaron en los cuatro países seleccionados para regular la responsabilidad de los PSSI varían ampliamente, desde un mecanismo horizontal para controlar el contenido prohibido hasta disposiciones contra la retransmisión ilícita en línea de señales de radiodifusión.

Chile, por ejemplo, ha optado, en la Ley de Propiedad Intelectual, por crear un régimen clásico de “puerto seguro” (exención de responsabilidad) para los PSSI, a partir de un sistema de notificación y retirada.

En Indonesia, la Ley sobre el Derecho de Autor incluye un procedimiento que habilita a las autoridades administrativas a bloquear contenidos, y existen normativas que establecen exenciones de responsabilidad y mecanismos de bloqueo de contenidos ilegales en distintas circunstancias.

En la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de los Emiratos Árabes Unidos no se limita la responsabilidad de los PSSI, pero se ha adoptado un mecanismo para bloquear el acceso a diferentes categorías de contenido prohibido, entre ellos los que infringen los derechos de autor y derechos conexos. En el Decreto-Ley Federal N.º 34 de 2021, también se establece que subir contenido prohibido y abstenerse de eliminarlo se considera un delito punible.<sup>533</sup>

La Ley de Derechos de Autor de Uruguay no regula las limitaciones de responsabilidad de los PSSI. Sin embargo, se ha establecido en la legislación general un mecanismo de bloqueo para impedir el acceso a las señales de radiodifusión televisiva en los casos de retransmisión ilegal en línea. Existe un sistema similar para bloquear en tiempo real la retransmisión en línea de los eventos deportivos.

#### A. Actualización o creación de nuevas normas nacionales

En Chile, el régimen de exención de responsabilidad que prevé la Ley de Propiedad Intelectual es compatible con los estándares internacionales en este campo. Sin embargo, existen dudas sobre la eficacia del sistema de notificación y retirada en la práctica. Las partes interesadas han alegado que el sistema requiere la intervención judicial y en muchos casos es demasiado lento para permitir la correcta observancia de los derechos.<sup>534</sup>

Dado que el conocimiento real solo se adquiere cuando existe una resolución judicial que ordena retirar o bloquear el contenido, y el proveedor de servicios ha ignorado o desobedecido dicha resolución, el sistema también resulta problemático para los

---

<sup>533</sup> Véase <https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/cyber-safety-and-digital-security>.

<sup>534</sup> Según la encuesta de Chile, el sistema debería sustituirse por otro rápido y extrajudicial. En el Informe Especial 301 también se instó a Chile a mejorar su marco de responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet para permitir una acción eficaz y rápida contra la piratería en línea; véase la publicación de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, *op. cit.*, p. 42.

prestadores de servicios de alojamiento y los prestadores de servicios de redireccionamiento.

Se sigue de ello que la notificación privada por parte de los titulares de derechos según el procedimiento estándar previsto por la ley no es suficiente para considerar que el proveedor de servicios tiene un conocimiento real y obligarle a actuar con celeridad para retirar el contenido infractor o hacer imposible el acceso al mismo.

Por lo tanto, cabe suponer que sería beneficioso para Chile adaptar sus disposiciones de exención de responsabilidad a las nuevas circunstancias tecnológicas. La legislación de 2010 se inspiró en la Sección 512 del Título 17 del Código de los Estados Unidos, que se publicó el siglo pasado.

El entorno en línea ha cambiado drásticamente desde que se promulgó por primera vez la legislación chilena, y han surgido muchas situaciones híbridas entre el rol clásico del proveedor de acceso y el del proveedor de alojamiento. En la actualidad, los usuarios intercambian contenido protegido en las redes sociales, los mercados en línea y las plataformas digitales, así como en muchos otros servicios que no existían cuando se diseñó el régimen de exención de responsabilidad. En consecuencia, se recomienda que las normas nacionales de Chile sobre la responsabilidad de los PSSI por infracción del derecho del autor se actualicen para dar respuesta a esta nueva realidad.

También se aconseja a los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Uruguay que actualicen sus leyes sobre derecho de autor para regular la responsabilidad de los PSSI en caso de infracción del derecho de autor o derechos conexos, teniendo en consideración los siguientes factores.

B. Definición del mejor modelo para regular el rol de los prestadores de servicios de intermediación en línea en la infracción del derecho del autor

Es evidente que la elaboración de una legislación adecuada sobre la responsabilidad del PSSI por infracción del derecho del autor en los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y el Uruguay tiene implicancias en otros ámbitos del derecho que trascienden el alcance de este estudio. Por este motivo, solo se harán recomendaciones generales *de lege ferenda* para tratar el rol de los PSSI en la legislación nacional sobre derecho de autor.

En primer lugar, toda política nacional debe procurar cumplir con dos objetivos principales. Por un lado, debe proteger eficazmente los derechos de los titulares de los derechos de autor, y de otros derechos, contra las infracciones en línea. Por otro lado, la ley debe garantizar la seguridad jurídica de los PSSI, permitiéndoles desarrollar su actividad en condiciones de seguridad razonables en caso de que sus usuarios incurran en actividades ilegales.

Así pues, no disponer de un régimen de responsabilidad en los casos de infracción del derecho del autor no parece una opción aconsejable, ya que las normas generales de responsabilidad conjunta civil o penal no tendrán debidamente en consideración el rol específico de los PSSI en la actividad ilegal.

Para regularlo, las asambleas legislativas de cada país deben decidir entre un enfoque vertical u horizontal. El primero consiste en elaborar una legislación específica sobre la responsabilidad de los PSSI en los actos de infracción por parte de los usuarios. Un

ejemplo destacado de este modelo es la Sección 512 del Título 17 del Código de los Estados Unidos.

En cambio, el segundo enfoque aplica las excepciones de exención de responsabilidad a todo tipo de actividades infractoras en las que incurran los usuarios finales relativas, por ejemplo, a los derechos de autor y los derechos conexos, pero también a los derechos de propiedad industrial, privacidad, difamación y de imagen, entre otros.

Este enfoque se describe en la Directiva de la Unión Europea sobre comercio electrónico de 2000.<sup>535</sup> La Unión Europea también adopta este enfoque en el Reglamento de Servicios Digitales de 2022.<sup>536</sup> Sin embargo, la Unión Europea modificó parcialmente su enfoque con la Directiva del mercado único digital, que estableció una exención de responsabilidad en casos de infracción del derecho de autor y los derechos conexos para los prestadores de servicios que compartan contenidos en línea (OCSSP), mediante la creación de un régimen especial que seguirá subsistiendo tras la entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales.<sup>537</sup>

Ambos enfoques tienen ventajas y desventajas. El enfoque vertical contempla de forma adecuada las características especiales de la desmesurada infracción del derecho del autor y derechos conexos en línea, pero puede generar incoherencias si se infringen simultáneamente otros derechos de PI (especialmente, marcas y diseños). En cambio, el enfoque horizontal instauro un sistema de responsabilidad más homogéneo, pero no tiene en consideración la naturaleza masiva y las características especiales de la infracción del derecho de autor y derechos conexos en línea.

Desde el punto de vista de *de lege ferenda*, parece conveniente optar por un enfoque vertical, con una legislación que defina el papel de los PSSI en los casos de infracción del derecho de autor y los derechos conexos. La infracción del derecho de autor en línea presenta suficientes particularidades para justificar un régimen *ad hoc*.

También existen diferentes bases para establecer el régimen de responsabilidad de los PSSI en casos de infracción del derecho del autor. Con arreglo al primer modelo, la ley establece limitaciones de responsabilidad o “puertos seguros” para los PSSI, si cumplen determinadas condiciones. El segundo modelo funciona a la inversa, pues atribuye responsabilidad, en principio, al PSSI por los actos infractores que realicen sus usuarios, que puede eludirse *a posteriori* si se cumplen determinadas condiciones.

Posiblemente se prefiera la primera opción para los PSSI clásicos que realizan actos de mera intermediación, como los prestadores de servicios de transmisión o acceso, los prestadores de servicios de almacenamiento en la memoria caché del sistema, los

---

<sup>535</sup> Unión Europea, Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). En los artículos 12 a 15 se establecen diferentes limitaciones de responsabilidad para los proveedores de transmisión o acceso, los proveedores de almacenamiento en la memoria caché del sistema y los proveedores de alojamiento.

<sup>536</sup> Unión Europea, Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales).

<sup>537</sup> Unión Europea, Reglamento de Servicios Digitales, *op. cit.*, considerando 11.

prestadores de servicios de alojamiento y los prestadores de servicios de redireccionamiento, mientras que la segunda se prefiera para los OCSSP.

C. Responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación en línea por infracción del derecho del autor

El modelo general para establecer la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación en línea por infracción del derecho del autor está bien establecido en muchas jurisdicciones. Si bien tiene varias subversiones en cada país, en su esencia, se sustenta en varios principios generales.

La idea central de establecer un régimen de exención de responsabilidad para los PSSI en este caso es que estos proveedores solo realizan actividades de intermediación y no disponen de medios técnicos para controlar o filtrar el contenido infractor en sus sistemas. Esto significa que los prestadores de servicios de intermediación en línea están exentos de las demandas por daños y perjuicios u otras compensaciones monetarias que pudiesen solicitar los titulares de los derechos de autor, o de la responsabilidad penal que pueda imponerse según la legislación nacional.

Sin embargo, las medidas cautelares o provisionales y los mandamientos judiciales quedan fuera del ámbito de aplicación de este régimen, ya que básicamente son instrumentos para que los titulares del derecho detengan e impidan la infracción en línea.

Para crear un mecanismo de responsabilidad para los prestadores de servicios de intermediación en línea en la legislación nacional sobre derechos de autor, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Uruguay deberían establecer en la ley que los PSSI no tienen la obligación explícita de supervisar en general el contenido en sus servicios o de investigar circunstancias que indiquen actividades ilegales. No obstante, la legislación debería establecer que estos prestadores no pierdan la exención de responsabilidad por el mero hecho de llevar a cabo de buena fe investigaciones voluntarias destinadas a detectar y eliminar o inhabilitar el acceso a contenido ilegal.<sup>538</sup>

También se recomienda que la legislación establezca las condiciones comunes que deben cumplir los PSSI para beneficiarse de una exención de responsabilidad. Esas condiciones incluirían que el intermediario de Internet disponga de una política contra los infractores reincidentes<sup>539</sup> que prevea la rescisión del contrato de servicios del usuario en caso de infracción reiterada del derecho del autor.

Algunas jurisdicciones exigen que el PSSI no interfiera con las medidas tecnológicas estándar que utilizan los titulares del derecho para proteger el contenido sujeto a derecho de autor o la información electrónica para identificarlo en el entorno en línea.<sup>540</sup> El Reglamento de Servicios Digitales obliga a los prestadores de servicios de

---

<sup>538</sup> *Ibid.*, art. 7.

<sup>539</sup> El concepto de infractor reincidente se debe definir claramente en la legislación y exigir la prueba de actividades infractoras realizadas previamente por el usuario (es decir, si existe un sistema de notificación y retirada en la ley que se haya utilizado repetidamente para eliminar el contenido subido por el usuario).

<sup>540</sup> Estados Unidos, Título 17, Código de los Estados Unidos, Sección 512, Limitaciones de responsabilidad relativas al material en línea, arts. (i)(1)(B) y (i) (2); Unión Europea, Directiva sobre el comercio electrónico, *op. cit.*, art. 13 solo lo establece para los servicios de almacenamiento en la memoria caché del sistema.



intermediación en línea a que pongan a disposición del público los informes de moderación de contenido que elaboren.<sup>541</sup>

También es importante identificar qué actividades de los PSSI deben incluirse en las normas especiales de responsabilidad, así como las condiciones asociadas en cada caso para estar cubierto por la exención de responsabilidad. Estas condiciones se suelen sustentar en dos elementos clave: el conocimiento por parte del intermediario de la actividad ilegal que llevó a cabo el usuario, y su derecho y capacidad para controlar al infractor y evitar futuras infracciones.

Las categorías de PSSI que pueden acogerse al régimen de “puerto seguro” deben basarse en el rol efectivo del proveedor de servicios, dado que una empresa puede desempeñar distintas funciones al mismo tiempo. Por lo general, este régimen se implementa en los prestadores de servicios de transmisión o acceso, los prestadores de servicios de almacenamiento en la memoria caché del sistema, los prestadores de servicios de alojamiento y los prestadores de servicios de redireccionamiento.

Los prestadores de servicios de transmisión o acceso son aquellos que proporcionan acceso a terceros a servicios en línea, o que son meros conductores de la transmisión automática de información en línea. Las condiciones específicas para beneficiarse de la exención de responsabilidad por lo general exigen que el PSSI mantenga su neutralidad (es decir, que no seleccione ni modifique la información incluida en la transmisión, que no inicie la transmisión y que no seleccione al receptor de esta).

En el pasado, la legislación también regulaba la actividad de los prestadores de servicios de almacenamiento en la memoria caché del sistema. Se trata de un almacenamiento automático, intermedio y temporal de información que se realiza con el único fin de hacer más eficiente la transmisión posterior de la información a otros usuarios que la soliciten.

Un análisis detallado de los problemas de responsabilidad relacionados con las actividades de almacenamiento en la memoria caché del sistema revela que son prácticamente inexistentes en la práctica. Sin embargo, la exención de responsabilidad para estos proveedores debería incluirse en la legislación como medida de precaución.

Las condiciones para acceder a ella no deberían diferir de forma significativa de las existentes en la mayoría de las legislaciones.<sup>542</sup> También deben incluir la obligación de actuar con celeridad para eliminar o inhabilitar el acceso al contenido infractor en cuanto se tenga conocimiento efectivo de que se ha eliminado la información en la fuente inicial (sitio web) para evitar mantener el contenido ilícito en una versión antigua del sitio almacenada en caché.

---

<sup>541</sup> Unión Europea, Reglamento de Servicios Digitales, *op. cit.*, art. 15.

<sup>542</sup> Por lo general, esto implica que el PSSI no modifique la información, cumpla las condiciones de acceso a la información, respete las normas estándar del sector en materia de actualización de la información y no interfiera en el uso legal de tecnología homologada para obtener datos sobre el uso de la información. Véase la publicación de la Unión Europea, Directiva sobre comercio electrónico, *op. cit.*, art. 13.

El proveedor de servicios de alojamiento<sup>543</sup> es el prestador de servicios de intermediación en línea que se limita a almacenar contenido en su sistema o red a petición del usuario. Las condiciones específicas para beneficiarse de la exención de responsabilidad en este caso incluyen por regla general que el PSSI no tenga un conocimiento real de la infracción y desconozca los hechos o las circunstancias por los que la infracción es notoria o evidente para un observador razonable (conocimiento aparente o presunto).

Muchas jurisdicciones también establecen que la exención de responsabilidad no se aplicará cuando se trate de información que proporciona el propio prestador de servicios de intermediación en línea y no el destinatario del servicio, incluso cuando dicha información se haya elaborado bajo la dirección editorial del prestador.<sup>544</sup> Algunas jurisdicciones, como los Estados Unidos de América, también exigen que el proveedor de alojamiento no reciba ningún beneficio económico que se atribuya directamente a la actividad ilegal.

En caso de que un PSSI advierta o tenga conocimiento del contenido infractor, en virtud del principio de debida diligencia, deberá actuar con celeridad para eliminar o inhabilitar el acceso a los contenidos infractores. Esto subraya que es el incumplimiento de dicho deber lo que genera responsabilidad para el prestador de servicios de intermediación en línea.

Cabe debatir si un intermediario de la Web 2.0 o una plataforma digital deben poder acogerse a la limitación de responsabilidad del proveedor de servicios de alojamiento. Para reunir los requisitos, debe desempeñar claramente un rol neutral o pasivo, en contraposición a un rol activo en la promoción de la actividad ilegal.

Dado que esto puede dificultar su definición, el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea consideró necesario distinguir la subcategoría de plataformas en línea dentro de la categoría más amplia de proveedores de servicios de alojamiento (por ejemplo, computación en la nube o servicios de alojamiento en Internet). Las plataformas en línea son, por ejemplo, las redes sociales o las plataformas en línea que permiten a los consumidores celebrar contratos a distancia con comerciantes (mercados en línea).<sup>545</sup> En el reglamento se redactaron normas y deberes específicos en este caso.<sup>546</sup>

Los proveedores de redireccionamiento suelen definirse como prestadores que redireccionan a los usuarios a una ubicación en línea que contiene material infractor o que utilizan herramientas de localización de información, como un directorio, un índice o enlaces.<sup>547</sup>

En este caso, las condiciones por las que se exige de responsabilidad deberían ser las mismas, en esencia, que las que se aplican habitualmente a los proveedores de

---

<sup>543</sup> Es decir, el prestador de servicios de intermediación en línea se limita a almacenar contenido en su sistema o red por indicación de un usuario; véase Estados Unidos, Título 17, Código de los Estados Unidos, Sección 512, *op. cit.*, art. (c).

<sup>544</sup> Unión Europea, Reglamento de Servicios Digitales, *op. cit.*, considerando 18.

<sup>545</sup> *Ibid.*, considerando 13.

<sup>546</sup> *Ibid.*, arts. 19-28.

<sup>547</sup> Estados Unidos, Título 17, Código de los Estados Unidos, Sección 512, *op. cit.*, art. (d).

alojamiento, aunque lógicamente, la ilegalidad se refiere al contenido vinculado, no al contenido que almacena el proveedor de alojamiento.<sup>548</sup>

Asimismo, la exención de responsabilidad no debería aplicarse si el operador del sitio web en el que figura el enlace subordina o supervisa al proveedor del enlace, o cuando el sitio web en el que figura el enlace presenta la información de terceros como propia, dado que no actúa como intermediario de Internet sino como proveedor de contenido.

En los casos de proveedores de servicios de almacenamiento en el caché de sistema, alojamiento y redireccionamiento, muchas jurisdicciones han definido un mecanismo específico de notificación y retirada para que los PSSI sepan que existe contenido infractor en sus sistemas. Esto significa que una vez que los titulares del derecho reciben una notificación válida, tienen la obligación de actuar con celeridad para retirar el contenido o inhabilitar el acceso a este.

Sin embargo, en muchas jurisdicciones, el sistema de notificación y retirada solo se aplica a las notificaciones de autoridades judiciales o administrativas.<sup>549</sup> Por lo tanto, una notificación privada del titular del derecho no es, en principio, suficiente para que el PSSI tenga conocimiento efectivo y se vea obligado a retirar el contenido o inhabilitar el acceso para evitar la responsabilidad.

En otros casos, la notificación privada solo aporta información para los proveedores de alojamiento (incluidas las plataformas en línea) y los obliga a asumir ciertos deberes además de retirar el contenido (mecanismos de notificación y acción), como explicar al usuario los motivos de su decisión y denunciar las actividades sospechosas a las autoridades.<sup>550</sup> Las asambleas legislativas de cada país deben decidir qué opción se adapta mejor a sus propias características constitucionales y jurídicas.

Para que la notificación de retirada sea válida debe cumplir ciertos requisitos de fondo y de forma que tienen que estar detallados en la ley, como la identificación adecuada del titular del derecho y de la obra u otra materia afectada, así como una descripción y la ubicación exacta del material infractor.

Si el prestador de servicios de intermediación en línea suprime el acceso al material infractor, debe notificarlo inmediatamente al usuario. Si el usuario considera que no infringe la ley, puede presentar una contranotificación en la que solicite la restitución del contenido. El PSSI debe revocar su decisión y restablecer el contenido o permitir el acceso a este si la contranotificación demuestra claramente que es legal.

La asamblea legislativa también podría establecer un sistema alternativo de solución de controversias en línea, siempre que todas las partes estén de acuerdo con la solución extrajudicial.<sup>551</sup> Esto evitaría una demanda directa del titular del derecho contra el

---

<sup>548</sup> Un modelo para esta disposición puede encontrarse en la Ley de España N.º 34/2002 de 11 de julio de servicios a la sociedad de la información y de comercio electrónico, art. 17; y la Ley Federal de Austria que regula determinados aspectos jurídicos de las transacciones comerciales y jurídicas electrónicas (Ley de Comercio Electrónico - ECG), art. 17.

<sup>549</sup> Unión Europea, Reglamento de Servicios Digitales, *op. cit.*, art. 9.

<sup>550</sup> *Ibid.*, art. 16-18.

<sup>551</sup> Estados Unidos, Título 17, Código de los Estados Unidos, Sección 512, *op. cit.*, arts. c) y g) 2.c).

usuario cuando no esté de acuerdo con la decisión del PSSI respecto al restablecimiento del contenido.

También se recomienda que la legislación nacional incluya la responsabilidad de los remitentes de notificaciones o contranotificaciones abusivas en caso de conocimiento efectivo o tergiversación a sabiendas o falsedad. Sin embargo, la mera tergiversación por negligencia no debe dar lugar a la responsabilidad del remitente de una notificación inexacta.<sup>552</sup>

De todas maneras, la legislación nacional debe prever una citación para identificar al infractor con el fin de imponerle las responsabilidades penales, administrativas o civiles adecuadas.<sup>553</sup>

D. Más allá de la responsabilidad: medidas cautelares contra los prestadores de servicios de intermediación en línea en caso de infracción del derecho del autor

Aunque puedan beneficiarse de la exención de responsabilidad, los PSSI siempre deben ser pasibles de medidas cautelares por medio de un mandamiento judicial temporal o permanente, con el objetivo de poner fin a la infracción o evitar que se reinicie.

El mandamiento judicial suele consistir en una orden que prohíbe al proveedor de servicios dar acceso a material infractor que se encuentre en un sitio de Internet específico. También, es posible que el juez dicte una orden que le impida dar acceso a un abonado o titular de cuenta que incurra de forma reiterada en una actividad ilegal. En ese caso, el PSSI debe cancelar la cuenta del abonado mencionado en la orden.

El juez o la autoridad administrativa deben conceder los mandamientos judiciales temporales ponderando los factores habituales en estos casos, a saber, la proporcionalidad, la magnitud del perjuicio que pueda sufrir el titular del derecho si no se impide o restringe la infracción, la viabilidad técnica, la eficacia del mandamiento judicial, la posibilidad de una medida menos gravosa con efectos similares<sup>554</sup> y, en su caso, la constitución de una garantía para cubrir futuros daños.

De hecho, la experiencia ha demostrado que las medidas cautelares, centradas únicamente en impedir el acceso al contenido infractor, han logrado una disminución real de la piratería en línea en muchos países.<sup>555</sup>

---

<sup>552</sup> Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos. "Section 512 of Title 17: A report of the Register of Copyrights." *copyright.gov*. Mayo 2020, p. 5. <<https://www.copyright.gov/policy/section512/section-512-full-report.pdf>>.

<sup>553</sup> Estados Unidos, Título 17, Código de los Estados Unidos, Sección 512, *op. cit.*, art. h), y Unión Europea, Reglamento de Servicios Digitales, *op. cit.*, art. 10.

<sup>554</sup> Estados Unidos, Título 17, Código de los Estados Unidos, Sección 512, *op. cit.*, art. j) 2).

<sup>555</sup> Entre ellos se cuentan algunas jurisdicciones latinoamericanas, como Colombia, Ecuador y Perú, donde las oficinas nacionales de derecho de autor o PI exigen a los prestadores de servicios de acceso locales que deshabiliten el contenido infractor. En Suecia, la cantidad de encuestados que supuestamente accedían a contenido que infringía el derecho de autor disminuyó del 21% al 14% con la implementación de mandamientos judiciales dinámicos. Véase la publicación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, *op. cit.* p. 12.

Esta solución ofrece al titular del derecho la posibilidad de solicitar lo que se denomina mandamiento dinámico de bloqueo,<sup>556</sup> ya sea ante los tribunales o a través de una autoridad administrativa. Estos mandamientos judiciales, pueden dictarse en los casos en que un sitio web idéntico (espejo) esté disponible inmediatamente después de dictar la medida cautelar con una dirección IP o URL diferente.<sup>557</sup>

El mandamiento judicial se redacta de una manera flexible que permite abarcar la nueva dirección IP o URL sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.<sup>558</sup> De este modo, puede actualizarse en forma periódica con las distintas ubicaciones del contenido infractor, que uno o varios infractores hayan cargado, y el contenido puede mantenerse en línea más fácilmente.

Una modalidad de los mandamientos dinámicos de bloqueo es la de las órdenes de bloqueo en directo, como las que se han aplicado recientemente en la legislación de Uruguay. Permiten el bloqueo repetido de un sitio cada vez que se produce una transmisión en directo (por lo general, eventos deportivos).<sup>559</sup> Las órdenes permiten que el titular del derecho identifique los nuevos servidores y los comunique a los proveedores de acceso para que los bloqueen, y así evitar que los usuarios cambien de servidor para ver el evento.

#### E. El caso de los proveedores de servicios para compartir contenidos en línea

La existencia de un mecanismo de notificación y retirada para regular la responsabilidad de los proveedores de alojamiento y redireccionamiento puede cuestionarse seriamente a la luz de la tecnología actual. Para muchos de los grandes PSSI y titulares de derechos, el envío y la tramitación de notificaciones y contranotificaciones sobre contenido infractor es, en gran medida, un proceso automatizado que se realiza a gran escala y que requiere mucho tiempo y recursos de ambas partes.

Además, la evolución de los algoritmos “araña” permite controlar automáticamente el contenido infractor del derecho de autor de forma más precisa y refinada. Estos sistemas automatizados, con la colaboración de los titulares del derecho, pueden filtrar el contenido infractor para identificarlo correctamente. De hecho, mediante una combinación de sistemas de concesión de licencias, identificación y filtrado de contenido, algunas de las plataformas digitales más grandes del mundo en colaboración con grandes titulares de derechos, ya han elaborado mecanismos a medida para gestionar el contenido en sus sistemas.<sup>560</sup>

Este avance tecnológico acompaña a los servicios para compartir contenidos en línea que permiten acceder a grandes cantidades de contenido protegido por derechos de

---

<sup>556</sup> *Ibid.*, p. 46. Según el índice, esta solución se utiliza actualmente en varios Estados miembros de la Unión Europea, la Federación Rusa, la India, el Reino Unido y Singapur.

<sup>557</sup> Unión Europea, Oficina de Propiedad Intelectual. “Study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union.” *euipo.europa.eu*. Marzo 2021, pp. 16-17 <[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/2021\\_Dynamic\\_Blocking\\_Injunctions/2021\\_Study\\_on\\_Dynamic\\_Blocking\\_Injunctions\\_in\\_the\\_European\\_Union\\_FullR\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Dynamic_Blocking_Injunctions/2021_Study_on_Dynamic_Blocking_Injunctions_in_the_European_Union_FullR_en.pdf)>.

<sup>558</sup> *Ibid.*

<sup>559</sup> *Ibid.*, p. 17.

<sup>560</sup> Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos, “Sección 512 del Título 17,” *op. cit.*, p. 10.

autor que suben sus usuarios. Amplía el acceso a obras y otra materia, y ofrece grandes oportunidades para que las industrias creativas elaboren nuevos modelos operativos.

Sin embargo, las plataformas en línea también se utilizan a menudo para cargar contenido protegido por derecho de autor sin la autorización previa de sus titulares.<sup>561</sup> Por lo tanto, se podría considerar el establecimiento de un régimen de responsabilidad para el OCSSP en la legislación nacional de los cuatro países seleccionados como opción para equilibrar todos los intereses en juego, incluidos los de los pequeños y medianos titulares del derecho y de los PSSI.

La redacción exacta de esta legislación podría contemplar distintas opciones, dado que el modelo de esta reglamentación aún está en fase de desarrollo. Las opciones adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea al aplicar el artículo 17 de la Directiva del mercado único digital revelan, que los legisladores nacionales quieren ejercer su poder discrecional a la hora de equilibrar los derechos fundamentales.

Dado que todavía no se ha probado ninguna de las alternativas en la práctica, es conveniente no recomendar un modelo único porque las consideraciones de política nacional y las peculiaridades constitucionales son demasiado variadas en los cuatro países como para hacerlo.

En la práctica, la consecuencia principal de la adopción de dicha legislación es que se invierte el sistema clásico de excepciones de “puerto seguro”, sustituyéndolo por una atribución *ab initio* (es decir, desde el principio) de responsabilidad del OCSSP por los actos de comunicación al público que hacen los usuarios de sus servicios.<sup>562</sup> Esto significa que los proveedores de alojamiento no se beneficiarán de la exención de responsabilidad, pues están haciendo un acto directo de explotación.<sup>563</sup>

Esto implica, a su vez, que es necesario que exista un acuerdo de autorización o licencia con los titulares del derecho para realizar dicho acto de comunicación al público.<sup>564</sup> No obstante, para respetar la libertad contractual, no se debe obligar a los titulares del derecho ni a los OCSSP a celebrar tales acuerdos de licencia o autorizaciones.<sup>565</sup> En la redacción de los tratados internacionales sobre derechos de autor, los derechos exclusivos tienen carácter preventivo. Solo los propios titulares de los derechos pueden conceder esa autorización, esta no puede provenir de una licencia no voluntaria impuesta por un legislador nacional.<sup>566</sup>

---

<sup>561</sup> Unión Europea, Directiva del mercado único digital. *op. cit.*, considerando 61.

<sup>562</sup> Para ello, es necesario especificar que los proveedores de servicios para compartir contenidos en línea realizan un acto de comunicación al público, o de puesta a disposición del público, de obras u otra materia cuando dan acceso al público a esos contenidos. Véase Unión Europea, Directiva del mercado único digital. *op. cit.*, art. 17.1.i) y considerando 64.

<sup>563</sup> *Ibid.*, art. 17.3. y considerando 65.

<sup>564</sup> *Ibid.*, art. 17.1).ii) y considerando 64.

<sup>565</sup> *Ibid.*, considerando 61.

<sup>566</sup> ALAI (*Association littéraire et artistique internationale*). “Draft Opinion on certain aspects of the implementation of Article 17 of Directive (EU) 2019/790 of 17 April, 2019 on copyright and related rights in the digital single market.” *alai.org*. 30 de marzo de 2020, p. 3. En Internet. 21 de octubre de 2022. <[https://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/200330-opinion-article-17-directive-2019\\_790-en.pdf](https://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/200330-opinion-article-17-directive-2019_790-en.pdf)>.

Este régimen especial de responsabilidad por infracción del derecho de autor debería ser específico para cada sujeto, y solo aplicable a los proveedores de servicios para compartir contenidos. Por lo tanto, la definición exacta de proveedor de servicios para compartir contenidos en línea es crucial.<sup>567</sup>

El régimen debe abarcar únicamente los servicios que, *de facto* (ciertos en los hechos, pero no sancionados oficialmente), compiten en el mercado en línea con servicios con licencia, en especial en los casos de servicios de transmisión en continuo de audio y vídeo. Los servicios deben facilitar el acceso público al contenido que otros usuarios cargan, así como a una gran cantidad de contenido protegido por derechos de autor o derechos conexos. Por ello, es necesario que la identificación de estos prestadores de servicios se haga de manera precisa, caso por caso.<sup>568</sup>

También se recomienda incluir en la legislación<sup>569</sup> casos específicos excluidos de este régimen especial de responsabilidad y aclarar que la exención de responsabilidad prevista en determinadas condiciones para estos proveedores, no corresponde a plataformas que utilicen un modelo operativo claramente orientado a facilitar contenido infractor (es decir, que los propios prestadores de servicios canalicen contenido ilegal hacia el sistema para atraer usuarios).<sup>570</sup>

La excepción de “puerto seguro” solo se aplicaría a casos de infracción del derecho del autor, ya que la responsabilidad que emanaría de cargar otro tipo de contenido ilícito debería resolverse mediante las normas nacionales aplicables.

Las condiciones que debe cumplir el OCSSP para beneficiarse de la excepción de responsabilidad deben redactarse cuidadosamente en la legislación nacional. Según la Unión Europea, el proveedor de servicios debe demostrar que ha hecho los mayores esfuerzos por obtener una autorización y para asegurar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas debidamente identificadas por los titulares del derecho.<sup>571</sup>

En la mayoría de los casos, esto significa establecer mecanismos de filtrado para evitar la presencia de contenido infractor en el sistema, para lo cual se requiere una cooperación activa entre el OCSSP y los titulares del derecho. Ambos deben tener acceso simultáneo a bases de datos que se actualicen continuamente para disponer de información completa y precisa sobre el contenido que debe filtrarse.

---

<sup>567</sup> Unión Europea, Directiva del mercado único digital. *op. cit.*, art. 17. El art. 2.6. establece que un “proveedor de servicios para compartir contenidos en línea” es un prestador de un servicio de la sociedad de la información cuyo fin principal, o uno de cuyos fines principales, es almacenar y permitir que el público acceda a una gran cantidad de obras y otros materiales protegidos cargado por sus usuarios, que además organiza y promociona con fines lucrativos.

<sup>568</sup> *Ibid.*, considerando 63.

<sup>569</sup> *Ibid.*, considerando 62. En el artículo 2.6.ii), se excluyen los servicios como las enciclopedias en línea sin fines lucrativos, los repositorios científicos o educativos sin fines lucrativos, las plataformas para desarrollar y compartir programas informáticos de código abierto, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas (por ejemplo, los proveedores de correo electrónico), los mercados en línea y los prestadores de servicios entre empresas y en la nube, que permiten que los usuarios carguen contenido para su propio uso.

<sup>570</sup> Unión Europea, Directiva del mercado único digital. *op. cit.*, considerando 62.

<sup>571</sup> *Ibid.*, art. 17.4. b).

Las obligaciones del proveedor de servicios de garantizar que el contenido infractor no esté disponible deben interpretarse a la luz del principio de proporcionalidad, dando especial consideración en la disponibilidad técnica de los mecanismos de filtrado y si son rentables para el proveedor de servicios y económicamente sostenibles a largo plazo.<sup>572</sup>

El tipo de obras u otras prestaciones que los usuarios del servicio cargan también son pertinentes para determinar si el OCSSP ha hecho lo suficiente para mantener el contenido protegido fuera de su sistema.<sup>573</sup> Por ejemplo, si el servicio para compartir contenidos permite a sus usuarios cargar obras especialmente susceptibles a la copia ilegal, como programas informáticos, videojuegos o aplicaciones móviles, el sistema de filtrado deberá ser muy sólido, ya que una sola copia cargada podría perjudicar en gran medida la explotación normal de la obra si se hace una reproducción masiva de ella en el servicio.

En algunos casos, es posible que ningún sistema de filtrado sea adecuado para un OCSSP específico, por lo cual la única manera de evitar que ese contenido no autorizado esté disponible sería notificando de forma individual a los titulares del derecho.<sup>574</sup>

Las asambleas legislativas de cada país también deben tener en consideración que los mecanismos de filtrado automático son costosos para desarrollar y mantener, y, para muchas empresas emergentes, pueden actuar como barreras que les impidan entrar al mercado para compartir contenidos en línea. Por ende, sería aconsejable no exigir estas condiciones en el caso de nuevos actores del mercado con un volumen reducido de facturación y audiencia.<sup>575</sup>

Parecería mejor requerir únicamente que cumplan el procedimiento habitual de notificación y retirada,<sup>576</sup> dado que el volumen de contenido infractor no debería ser grande. Sin embargo, las asambleas legislativas deben tener cuidado de determinar si un proveedor de servicios para compartir contenidos en línea específico es realmente “nuevo”.<sup>577</sup>

La Unión Europea determinó además que, en algunos casos, el proveedor de servicios, debe demostrar que ha hecho los mayores esfuerzos para impedir la carga futura de obras específicas no autorizadas y previamente denunciadas por los titulares del derecho.<sup>578</sup> En la práctica, esto significa instituir un sistema de notificación y retirada e, indirectamente, la obligación del proveedor que comparte el contenido de vigilar en forma activa sus sistemas en busca de contenido infractor que haya sido denunciado.

Los mecanismos automáticos de filtrado generan preocupación sobre la posibilidad de restringir indebidamente la libertad de expresión del usuario, por lo que la legislación

---

<sup>572</sup> *Ibid.*, art. 17.5 y considerando 66.

<sup>573</sup> *Ibid.*

<sup>574</sup> *Ibid.*, considerando 66. Por este motivo, las asambleas legislativas de cada país deberían incluir siempre un sistema de notificación y retirada, que permita a los proveedores de servicios para compartir contenidos en línea eludir su responsabilidad cuando actúen con celeridad para inhabilitar el acceso o retirar el contenido protegido de sus sistemas, una vez que los titulares del derecho les envíen una notificación completa y justificada de infracción; véase el artículo 17.4.c).

<sup>575</sup> *Ibid.*, considerando 67.

<sup>576</sup> *Ibid.*, art. 17.6.

<sup>577</sup> *Ibid.*, arts. 17. 6.i) y ii).

<sup>578</sup> *Ibid.*



nacional debe establecer las garantías adecuadas para evitar el filtrado de contenido que no sea ilegal.<sup>579</sup>

En particular, debe garantizar que el usuario pueda ejercer las excepciones y limitaciones nacionales a los derechos de autor y derechos conexos, sobre todo los más cercanos a la libertad de expresión, como citas, críticas, reseñas o parodia.<sup>580</sup>

Necesita, entonces, establecer un mecanismo de contranotificación que permita que los usuarios que no estén de acuerdo con la inhabilitación del acceso o la eliminación del contenido protegido puedan reclamar y obtener un resarcimiento. Determinar si un contenido es legal es una cuestión compleja que no se resuelve correctamente con un mecanismo de filtrado automático. Por este motivo, cuando el usuario presenta contranotificaciones y cuestiona la inhabilitación o eliminación del contenido, las demandas deben someterse a una revisión no automática (humana).<sup>581</sup>

Se recomienda especialmente la creación de un mecanismo de recurso extrajudicial para la resolución imparcial de controversias.<sup>582</sup> El usuario también debe tener acceso a una autoridad judicial para defenderse de la eliminación o inhabilitación indebida del acceso.

Este mecanismo complejo intenta lograr un equilibrio entre los derechos de los prestadores de servicios, de sus usuarios y los de los titulares del derecho. De establecerse estas medidas de precaución, el filtrado podría ser un instrumento válido para determinar el equilibrio entre la propiedad intelectual y otros derechos.<sup>583</sup>

Por último, en todos los casos, debe entenderse que las normas de responsabilidad aplicables a escala nacional a los proveedores de servicios para compartir contenidos lo son sin perjuicio de que los tribunales nacionales puedan dictar mandamientos judiciales contra los OCSSP.<sup>584</sup>

## 5. Medidas educativas

Todas las respuestas a la encuesta subrayan la importancia de adoptar medidas educativas para las distintas categorías de partes interesadas en la explotación digital de obras y otra materia, incluidos los usuarios, las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, los titulares del derecho y las entidades de gestión de derechos.<sup>585</sup>

---

<sup>579</sup> *Ibid.*, art. 17.7.

<sup>580</sup> *Ibid.*, art. 15.7.

<sup>581</sup> *Ibid.*, art. 17.9.

<sup>582</sup> *Ibid.*, considerando 70.

<sup>583</sup> Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), *República de Polonia contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea*, Asunto C-401/19, 26 de abril de 2022, párrafo 98.

<sup>584</sup> Unión Europea, Directiva del mercado único digital, op. cit., considerando 66.

<sup>585</sup> En Chile, por ejemplo, se destacó que muchas instituciones públicas, OGC y otras partes interesadas reciben formación específica sobre cómo utilizar correctamente los derechos de PI para proteger los productos o servicios creativos en el entorno digital, pero que aún queda trabajo por hacer en este aspecto. En la respuesta de Indonesia se mencionaron las importantes iniciativas que llevan adelante las autoridades gubernamentales y el sector privado junto con las empresas locales, pero también se observaron las dificultades a las que se enfrentan estas empresas para encontrar personal jurídico experto en derechos de PI fuera de las ciudades. En la respuesta de los Emiratos Árabes Unidos, se subraya la

Una recomendación general es que todas las actividades de carácter formativo y educativo, aunque se realicen en el aula, se transmitan también en línea, se conserven como material educativo y permanezcan publicadas. En ese sentido, las técnicas de aprendizaje a distancia garantizan el acceso a los recursos educativos, independientemente de las condiciones geográficas o la disponibilidad de tiempo.

Para los fines de este estudio, las medidas educativas recomendadas se dividen en las que se dirigen al público y a los usuarios de contenido protegido, las que se dirigen a los titulares del derecho y las que se dirigen a las autoridades judiciales y encargadas del cumplimiento de la ley.

La sensibilización sobre la importancia de respetar los derechos de autor y los derechos conexos se considera escasa según las respuestas a la encuesta, especialmente en el entorno digital. Los Emiratos Árabes Unidos y Chile manifestaron expresamente que la publicación de guía educativas sobre derechos de PI sería de interés (en concreto, para el uso de los medios sociales) para explicar el régimen jurídico de los contenidos que generan los usuarios. En Chile se señaló asimismo la conveniencia de educar a los estudiantes incluso en la escuela primaria.

Según las respuestas a la encuesta, el público no es consciente de las consecuencias de la infracción del derecho del autor, ni siquiera cuando se imponen sanciones graves (como en los casos penales). En los Emiratos Árabes Unidos, las respuestas hicieron referencia a las campañas de sensibilización sobre el riesgo cada vez mayor al que se enfrentan los infractores, sobre todo en el contexto comercial. Por su parte, en Chile, uno de los principales desafíos en el entorno digital es crear una cultura de respeto generalizado de los derechos de PI.

Para ello, las autoridades públicas podrían promover y financiar campañas publicitarias centradas en las graves consecuencias de la infracción del derecho del autor, concretamente en el entorno en línea. Estas campañas también podrían incluir pruebas de cómo la descarga ilegal o la puesta a disposición del público de contenidos protegidos perjudica a los creadores y a la economía digital nacional, provocando pérdidas de empleo y perjudicando el desarrollo de los creadores jóvenes.

En términos más generales, las medidas educativas dirigidas a los titulares del derecho deberían centrarse en subsanar la falta de conocimientos que existe actualmente en los cuatro países, en los que las partes interesadas no comprenden de un modo cabal los derechos de PI que subyacen en las obras y otra materia protegida cuando comercializan sus propios productos o servicios.

Estas medidas deben centrarse en llevar a cabo previamente el proceso necesario para obtener la autorización o las licencias del titular del derecho correspondiente cuando se comercialice un producto o servicio que requiera dichas autorizaciones.

Los cuatro países reconocieron que los titulares de los derechos no saben qué derechos son aplicables a su contenido y cómo comercializar eficazmente sus obras y otra materia protegida para evitar infracciones de terceros.

---

importancia de los aspectos educativos de la cadena de valor de la PI para protegerse contra los usos no autorizados y para que los titulares del derecho aprendan a comercializarlos.

En la respuesta a la encuesta de Indonesia se observó que muchos creadores todavía no son conscientes de la importancia de registrar sus obras y otros materiales como medida de protección preliminar, y que consideran que invertir recursos en proteger sus derechos es una carga.

Para tratar estas cuestiones, se recomienda que las partes interesadas privadas y públicas inviertan en transmitir conocimientos jurídicos adecuados a las empresas que explotan productos o servicios creativos en el entorno digital. La formación interna sobre cuestiones de PI debe ser una prioridad para los países seleccionados.

Indonesia informó que la comunidad de titulares está empezando a recibir formación interna sobre derechos de PI, y estos esfuerzos deben continuar y fomentarse.

Chile reconoció que las medidas educativas y la formación jurídica permanente también deberían incluir al personal de los OGC, que desempeñan un rol fundamental en el funcionamiento de la cadena de derechos de PI. No cabe duda de que esta debería ser la línea de acción recomendada.

La formación del equipo jurídico de un OGC debe abarcar todas las áreas principales del entorno digital, desde cómo elaborar correctamente licencias y acuerdos con los usuarios de derechos de autor, hasta cómo detectar infracciones en Internet para defender a sus miembros y cómo crear servicios de asesoramiento jurídico para que los titulares de los derechos defiendan sus intereses contra las infracciones en línea.

En las cuatro respuestas a la encuesta se subraya la importancia de crear una red eficaz de organizaciones de titulares de derechos de alcance nacional, regional e internacional para facilitar la transferencia de información y la cooperación en la promoción del uso de los derechos de PI en el entorno digital.

Estas redes ya existen en algunos países,<sup>586</sup> y pertenecer y colaborar activamente con asociaciones internacionales como la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI),<sup>587</sup> y federaciones de sociedades de gestión colectiva, como la CISAC,<sup>588</sup> el Consejo de Sociedades para la Gestión Colectiva de los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes (SCAPR),<sup>589</sup> la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO), es una práctica habitual para fomentar el ejercicio de los derechos de PI.

Además, la red debe construirse en el ámbito nacional y reunir a todos los OGC existentes en el país en una federación o asociación formal. Los poderes públicos

---

<sup>586</sup> En su respuesta, Chile destacó la Red de Asociaciones de Música Chilena.

<sup>587</sup> La IFPI y su red de grupos nacionales representan a unas 8.000 empresas discográficas de todo el mundo; véase <https://www.ifpi.org/members/our-members/>.

<sup>588</sup> Con 228 sociedades miembros en 119 países, la CISAC representa a más de 4 millones de creadores de diferentes repertorios artísticos, incluidos los sectores musical, audiovisual, teatral, literario y visual; véase <https://www.cisac.org/es>.

<sup>589</sup> El SCAPR es la organización internacional para el fomento de la cooperación práctica entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los OGC, y representa a 56 organismos de gestión colectiva de 41 países; véase <https://www.scapr.org/about-us/>.

también deben promover la inclusión de los titulares de derechos nacionales en asociaciones regionales o internacionales mediante campañas de información.<sup>590</sup>

Según las respuestas a la encuesta, la formación jurídica de las autoridades judiciales y encargadas del cumplimiento de la ley en el área de los derechos de PI, tanto en el entorno digital como en el mundo físico tradicional, ha experimentado una mejora significativa.<sup>591</sup> Las iniciativas que se han llevado adelante incluyen talleres, cursos, formación especializada y otras herramientas a escala nacional y con la cooperación de organizaciones internacionales, incluida la OMPI.

Aún queda trabajo por hacer en las distintas jurisdicciones, y en los cuatro países hay consenso en cuanto a que la formación de los funcionarios y de las autoridades judiciales encargadas del cumplimiento de la ley sigue siendo insuficiente, en términos generales.

Se recomienda que continúen los esfuerzos para formar adecuadamente a los jueces que se ocupan de las controversias de PI. La creación de órganos judiciales especializados en controversias de PI, como recomienda este estudio, es una medida educativa en sí misma, ya que el tratamiento de este tipo de controversias suele mejorar la capacidad del juez para resolver futuros casos.

La educación formal de los jueces nacionales todavía es esencial, incluso en esta instancia, y la formación específica para resolver controversias en el entorno digital debería considerarse obligatoria. Debe hacerse hincapié en la formación de por vida, ya que la evolución tecnológica exige que las competencias de los órganos judiciales se actualicen y mejoren periódicamente.

Esto es especialmente importante para resolver las infracciones del derecho de autor en los mercados digitales, en los que comprender las ramificaciones tecnológicas del caso es esencial para resolver las cuestiones jurídicas. La actualización debe programarse de manera acorde con el aumento del ritmo de los cambios tecnológicos.

También es recomendable aplicar medidas para capacitar a los funcionarios y demás personal gubernamental, ya que desempeñan un rol clave en la protección eficaz de los derechos de PI. Esto beneficiaría en gran medida a las actividades diarias de fiscales, agentes de aduanas e inspectores ministeriales, entre otros.

## **6. Adopción de nuevas políticas para fomentar el ejercicio de los derechos de PI en la era digital**

Las políticas nacionales para fomentar el ejercicio de los derechos de PI en el entorno digital tienen objetivos diferentes y son específicas de cada país. Por eso resulta difícil, incluso indeseable, asesorar del mismo modo a los cuatro países seleccionados. Sin embargo, hay algunos puntos en común.

---

<sup>590</sup> Por ejemplo, según el sitio web de la IFPI, ninguna discográfica de los Emiratos Árabes Unidos ni del Uruguay formaba parte de la asociación. De Indonesia solo tres sellos están asociados, mientras que en Chile, tres de las sedes nacionales de las principales empresas forman parte de la organización. Véase <https://www.ifpi.org/members/our-members/>.

<sup>591</sup> En la respuesta de Indonesia se destacó que existe una universidad empresarial, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que imparte formación jurídica sobre PI a los funcionarios de la DGIP.

La principal recomendación sería contar con una política nacional específica para promover los derechos de PI en los mercados digitales. Los países seleccionados tienen políticas diferentes, pero la economía digital presenta desafíos que sugieren la conveniencia de una política adaptada a la explotación de obras y otros materiales.

También sería aconsejable introducir cambios institucionales. Según las respuestas a la encuesta, los cuatro países incorporan en su ordenamiento jurídico una dirección general o agencia administrativa especializada con diferentes funciones en materia de protección por derechos de autor y derechos conexos.<sup>592</sup>

La forma y las funciones que se atribuyen al organismo regulador nacional difieren en la legislación de los cuatro países. Tanto en Indonesia como en los Emiratos Árabes Unidos cuentan con un departamento ministerial que abarca todas las formas de propiedad intelectual e industrial. Por su parte, en Chile y Uruguay existe una división específica en el Ministerio de Cultura que se ocupa de los derechos de autor y los derechos conexos.

Sin embargo, el funcionamiento práctico de los derechos de autor y los derechos conexos presenta suficientes peculiaridades y diferencias con otros derechos de PI (falta de registro para obtener protección, duración, gestión colectiva, observancia en el entorno en línea o responsabilidad de los PSSI) como para justificar la creación de una oficina de derecho de autor independiente como agencia gubernamental, separada de la oficina de propiedad industrial.

Esta estructura formal permitiría centralizar diferentes aspectos de la protección por derecho de autor y mejoraría la eficiencia, por ejemplo, en el registro, la supervisión de los OGC, las funciones de mediación y arbitraje y la observancia administrativa en línea. También actuaría como órgano consultivo en materia de políticas de derechos de autor o medidas educativas para fomentar su protección.

En el ámbito institucional, sería aconsejable reforzar la colaboración entre los distintos departamentos ministeriales, organismos gubernamentales y autoridades encargadas del cumplimiento de la ley para impedir la piratería en línea. Para lograrlo, se recomienda la creación de un grupo de trabajo nacional dedicado a la infracción masiva en Internet.

También sería prudente contemplar la existencia de un foro nacional permanente que debata las prioridades y las políticas, teniendo en cuenta las sugerencias de distintas fuentes, como las empresas del entorno digital, el gobierno, el mundo académico y la sociedad civil.<sup>593</sup>

La composición práctica de este foro nacional de PI variará, naturalmente, de un país a otro, pero podría actuar como órgano consultivo de las instituciones públicas, e incluso como grupo de reflexión para promover enfoques nuevos y productivos que potencien las industrias creativas en el entorno digital.

---

<sup>592</sup> El Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos, el Consejo de Derechos de Autor de Uruguay, la DGIP de Indonesia y el Departamento de Derechos Intelectuales de Chile.

<sup>593</sup> En la respuesta a la encuesta de Indonesia se destacó la importancia de coordinar de manera correcta las partes interesadas públicas y privadas. Chile se refiere a la existencia de un órgano de gestión público-privado de las industrias creativas creado para idear y aplicar políticas adecuadas.

Cabe destacar que lo que se recomienda no es un órgano consultivo tradicional compuesto por autoridades ministeriales y representantes o titulares del derecho, sino más bien, un foro permanente que sea flexible en su composición y actividades, y que funcionaría como un ágora donde todas las partes interesadas, privadas y públicas, podrían debatir e intercambiar ideas, proponer soluciones políticas y encontrar bases normativas comunes.

Por su parte, Chile y los Emiratos Árabes Unidos, indicaron en sus respuestas que existen mecanismos de financiación estatal, incentivos fiscales, descuentos en las tasas y programas de mecenazgo o patrocinio cultural en sectores específicos (audiovisual, en particular), pero que no suelen estar orientados al mercado digital.<sup>594</sup>

Se recomienda utilizar estos mecanismos de ayuda financiera para idear productos o servicios creativos para el entorno digital.<sup>595</sup> Esto implicaría extender esquemas tradicionales de financiación, incentivos fiscales o patrocinio a los sectores más orientados a la explotación digital de obras, como los videojuegos, los programas informáticos o las aplicaciones móviles.

---

<sup>594</sup> Los Emiratos Árabes Unidos informaron que, a fin de convertirse en la jurisdicción líder en el espacio de los activos virtuales, Dubái ha creado la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái, que planea reducir tasas y apoyar las expansiones o las exenciones fiscales para atraer inversiones en criptomonedas y TNF.

<sup>595</sup> En la respuesta de Indonesia, se indicó que el Gobierno está llevando a cabo el programa de estímulo “Proud of made in Indonesian Products” para aumentar las transacciones de compra de productos creativos nacionales de los sectores de la moda, la artesanía y la gastronomía en plataformas digitales.